

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA
RECINTO UNIVERSITARIO RUBEN DARIO "RURD"
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JURIDICAS
DEPARTAMENTO DE DERECHO



TRABAJO MONOGRAFICO PARA OPTAR
AL TITULO DE LICENCIADAS EN DERECHO

TEMA:

**Aplicación del Régimen Jurídico de los Recursos Administrativos en
Materia Aduanera en el Segundo Semestre del 2012 en la Dirección
General de Servicios Aduaneros Código Aduanero Uniforme
Centroamericano-Reglamento al Código Aduanero Uniforme
Centroamericano**

Autores:

Br. Rosa Esmeralda Corea Trujillo
Br. Yara Yamila Martínez López

TUTORA: Msc. María del Socorro Ríos Trejos

Managua, 06 de julio de 2013

INDICE

RESUMEN.....	5
AGRADECIMIENTOS	6
I.- INTRODUCCIÓN.....	8
II.- ANTECEDENTES.....	14
III.- JUSTIFICACIÓN.....	17
IV.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	20
V.- OBJETIVOS.....	21
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:.....	21
VI.- HIPÓTESIS.....	22
CAPÍTULO I	23
GENERALIDADES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO	23
VII.-GENERALIDADES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO	24
I. CONCEPTOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO	24
II. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO	26
III. FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO	27
IV. POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN	32
V. RELACIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO CON OTRAS CIENCIAS ...	36
VI. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	39
CAPÍTULO II	61
DERECHO ADUANERO.....	61
II. CARÁCTERÍSTICAS DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN	71
III. EL DERECHO ADUANERO EN CENTROAMERICA	73
IV. LA CONVENCIÓN DE KIOTO	78
V. SISTEMA ARMONIZADO	79
VI. CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO MODELO ADUANERO:.....	82
VII. UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA.....	83
VIII. ADMINISTRACION ADUANERA COMUN	84

IX.	ARMONIZACIÓN ARANCELARIA:	84
X.	LIBRE COMERCIO	85
XI.	SISTEMA DE LA AUTODETERMINACION ADUANERA EN NICARAGUA	85
XII.	ALCANCE DE LA AUTODETERMINACIÓN ADUANERA	87
XIII.	INFRACCIONES ADUANERAS	88
XIV.	DERECHO ADUANERO	92
XV.	DERECHO ADUANERO Y SUS CARACTERÍSTICA TRIBUTARIA	93
XVI.	RELACIÓN DEL DERECHO ADUANERO CON OTRAS Y OTRAS DISCIPLINAS JURÍDICAS	94
XVII.	FUENTES DEL DERECHO ADUANERO	96
XVIII.	PRINCIPIOS DEL DERECHO ADUANERO	98
CAPÍTULO III		106
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN GENERAL		106
I.	DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	107
II.	NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	108
III.	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	109
IV.	PRINCIPALES TIPOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	111
V.	INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	113
VI.	MECANISMOS DE IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS DEL EJECUTIVO	115
VII.	Principios fundamentales de recursos de amparo administrativo	117
CAPÍTULO IV		121
TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS ADUANEROS		121
TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA ADUANERA		122
I.	ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA DGA	122
II.	DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS	122
III.	Funciones de la Dirección General de Aduanas	123
IV.	CONCEPTO DE ADUANA	125
V.	COMPONENTES DE LA ADUANA	126
VI.	EL GATT	126

VII.	EL DESPACHO	129
	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS.....	132
VIII.	PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS MINISTRATIVOS EN MATERIA ADUANERA.....	133
IX.	Elementos Generales del Recurso	135
X.	DE LAS DILIGENCIAS	136
XI.	DEL RECURSO DE REVISIÓN.....	138
XII.	FLUJOGRAMA PARA LA TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 140	
XIII.	DEL RECURSO DE APELACIÓN	141
XV.	SILENCIO ADMINISTRATIVO	144
	CAPÍTULO V	145
	DERECHO COMPARADO	145
	TABLA DE MARCO LEGAL EN CENTROAMERICA.....	146
	PROCEDIMIENTO CENTROAMERICANO DE LOS RECURSOS ADUANEROS	149
I.	DERECHO COMPARADO LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN CHILE 155	
II.	TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS	160
III.	CORTE DE APELACIONES:	161
IV.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:.....	161
V.	LA TRAMITACION DE LOS RECURSOS ADUANEROS EN CHILE:.....	162
VI.	DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN.....	162
VII.	TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVO EN CHILE Y NICARAGUA	170
	DISEÑO METODOLÓGICO	173
A.	Tipo de Investigación	173
B.	Enfoque:	173
C.	Tiempo:.....	173
	MÉTODOS	173
A.	Entrevistas	173
B.	Revisión Documental	173

POBLACIÓN:.....	174
MUESTRA.....	174
FORMAS DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO	174
A. Confiabilidad	174
INFORME DE RESULTADOS.....	174
XIII.- CONCLUSIONES	179
BIBLIOGRAFÍA	181
ANEXOS.....	182

RESUMEN

Esta monografía, comprende el análisis y estudio de los Recursos Administrativos previstos en la Ley Creadora de servicios aduaneros, que los particulares pueden interponer contra las resoluciones administrativas y ante los propios órganos de la administración aduanera. La misma se enmarca en una investigación documental, obteniéndose la información bibliográfica fundamentalmente de doctrina y legislación centroamericana, complementada con el aporte de autores extranjeros. Se parte del análisis de la doctrina general de los recursos administrativos para concretar luego el estudio de los recursos previstos en la Ley Creadora de Servicios Aduaneros. Para encontrar el fundamento legal de los recursos aduaneros, se analizan las normas de la Constitución Política de la República de Nicaragua, la Ley 290 Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo, el Código Tributario y la propia Legislación Aduanera de los países centroamericanos.

Tal análisis permite además, encontrar mediante la aplicación del orden jerárquico de las leyes, las deficiencias en la regulación de los recursos contenida en la Ley Creadora de Servicios Aduaneros y cuáles de las normas de igual o superior rango, resultan aplicables para subsanar las mismas.

Entre las conclusiones de la investigación se encuentran: que los recursos tributarios tienen su fundamento constitucional en los artículos 133, 316 y 317 de la Constitución de la República, que consagran los principios de generalidad de los tributos, equidad y legalidad tributaria; y, que la regulación de los recursos en la vigente Ley Creadora de Servicios Aduaneros, es escueta e incipiente, por lo que se hace necesaria la aplicación supletoria del Código Tributario y la Ley 265 Ley que Establece el Autodespacho para la Importación, Exportación y Otros Regímenes.

"No dejes apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como necesaria; trabaja, aspira, tiende siempre hacia la altura.

Rubén Darío

AGRADECIMIENTOS

Es satisfactorio llegar a la meta, que al inicio parecía inalcanzable, demostrarnos que vencer cada reto planteado a lo largo de nuestra carrera, es posible, solo cuando se tiene la voluntad y el apoyo de nuestros familiares, maestros y amigos.

Hoy, entregamos al Departamento de Derecho; Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas, este trabajo monográfico que representa la culminación de estudios universitarios, en el cual hemos puesto esfuerzo, dedicación y conocimientos alcanzados para generalizar, sistematizar y ponerlo a disposición de compañeros y amigos como material de apoyo en nuestro que hacer como estudiantes.

Llegar hasta este momento ha implicado un gran esfuerzo, que estamos convencidas será un hermoso recuerdo en el devenir de los años y se constituirá en nuestras vidas en un referente a seguir ante las vicisitudes que nos deparan para forjarnos un futuro mejor y de compromiso social en el ejercicio profesional.

Agradecemos a Dios por darnos la fortaleza, la confianza en nosotras mismas, por acompañarnos, guiarnos día a día por el camino correcto y no desvanecer en nuestro propósito.

A nuestras Familias, especial reconocimiento por su apoyo, cariño y comprensión, pero por sobre todas las cosas por interiorizar y asumir como suyos el esfuerzo que implicó estos años y que nos ha permitido transitar este

camino con la certeza de que no estamos solas y al final, apreciar una algarabía de colores que nos permiten sonreír placenteramente.

Gracias a nuestra Alma Mater, que ha dispuesto de la organización Administrativa y Docente necesaria para formarnos, con calidad y calidez y educarnos en valores éticos, tan necesarios para nuestro ejercicio profesional, que indudablemente serán nuestra guía, inspiración y compromiso en nuestro diario actuar, mismo que se constituye desde ya en un reto, que asumimos de mantener nuestra formación continua y preservar el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

Maestros, nuestro cariño y reconocimiento por su encomiable labor de forjar con paciencia, dedicación y empeño a sus estudiantes dándonos a diario una parte de ustedes que hoy forman parte de nosotras porque dejan huellas invaluable de nuestra experiencia.

Agradecemos muy especialmente a nuestra tutora María del Socorro Ríos Trejos, quien de manera incondicional nos brindo su tiempo, apoyo y muy importantes conocimientos, para culminar con nuestro trabajo monográfico, de verdad que usted nos enseñó mucho durante este tiempo y todos los momentos buenos y difíciles que pasamos quedaran grabados en nuestra mente. Gracias por la paciencia que nos tuvo.

Gracias a los amigos y amigas que hicieron posible compartir experiencias, alegrías, dudas, cuestionamientos, aciertos y desaciertos y que juntos logramos nuestro objetivo esencial de compartir conocimientos.

Bra. Yara Yamila Martínez López.
Bra. Rosa Esmeralda Corea Trujillo.

I.- INTRODUCCIÓN

El inicio del comercio llevó a concebir las aduanas como instituciones que tienen por objeto el cobro de peaje con el propósito de financiar la gestión del Estado, lo cual era posible a través del control y regulación del tráfico de mercancías entre las naciones.

Junto con el surgimiento de las aduanas como instituciones, trajo consigo la necesidad de crear nuevas rutas de comercio y con ello se generó la corrupción a lo interno de los países, con el único propósito de obviar el pago de estos peajes.¹

Con el tiempo se experimentó un auge en el comercio internacional que ha implicado efectuar operaciones comerciales complejas tanto desde el punto de vista económico con el crecimiento de bienes objeto de intercambio, por la variedad y volumen de productos a comerciar y por las distancias geográficas entre los países involucrados.

Este auge experimentado que involucraba un flujo de dinero y capital de las transacciones implicaron también una considerable intensificación en los procesos productivos y la comunicación, razón por la que el cobro de peaje resultaba insuficiente para garantizar que los gobiernos pudiesen ordenar e inducir la actividad económica comercial para el beneficio de las naciones que representaban.

Se hacía necesario establecer trámites y procedimientos que regularan la actividad comercial en general, convirtiendo las aduanas en sistemas más complejos, de tal forma que su evolución ha sido reflejada en las funciones que estas realizan, cobrando en sus inicios desde el simple impuesto por el paso de

¹ Palacio, Noel Rafael y Barahona, Juan Carlos. (1996). Sistema Aduanero Nacional de Nicaragua. (1era. Ed.). Nicaragua.

la mercadería hasta considerársele como la representación física del Estado nacional y el punto que separa una frontera nacional de otro.²

Las barreras establecidas por los diferentes Estados condujeron en algunos momentos a guerras, conquistas y colonización que tenían como propósito la solución de problemas comerciales

¿Cómo definiríamos Aduana?: **Aduana** es un servicio público de constitución fiscal situada en puntos estratégicos, por lo general en costas y fronteras encargada del control de operaciones de comercio exterior, con el objetivo de registrar el tráfico internacional de mercancías que se importan y exportan desde un país concreto, y cobrar los impuestos que establezcan las aduanas.³

De tal forma, que las ideas básicas funcionales de la aduana se constituye en controlar y fiscalizar el paso y el pago de las mercancías por la frontera que incluye: recaudar los tributos aduaneros, prevenir las infracciones y delitos aduaneros, el tráfico de drogas y estupefacientes, registrar los controles sanitarios, fitosanitarios, registrar el cumplimiento, restricciones y regulaciones no arancelarias, confirmar los certificados de origen, impedir el tráfico de residuos tóxicos.

Los procesos de globalización e interdependencia geográfica, han sometido al Estado nacional a un proceso de transformación, que modifica su estructura como producto de una constante búsqueda por homogenizar los procedimientos de comercio, como resultado del proceso de mundialización de las relaciones económicas, que se basa fundamentalmente en las telecomunicaciones y el desarrollo de la tecnología informática, originando o propiciando un mayor dinamismo en los servicios, en las transacciones comerciales.

² Thompson Argüello, Joe Henry (2009). *Derecho Procesal Administrativo Aduanero*, (1era. Ed.). Managua: CADAEN

³ Ballasteros Román, Alfonso J. (2001). *Comercio Exterior: Teoría y Práctica*, (2da. Ed.). España: Universidad de Murcia.

Tales circunstancias han conllevado a su vez a una ampliación del ordenamiento jurídico interno del Estado tradicional ya que desde ninguna perspectiva puede un Estado particular responder a estos fenómenos.

Los procesos de agilización en el comercio internacional, intervienen los servicios aduaneros que está compuesto; por los funcionarios aduaneros, los agentes de aduana, corredor de aduana, operadores de comercio exterior y los exportadores o importadores de mercancías, estando todos ellos, obligados a cumplir con las normas y requisitos para cada régimen, trámite y operación aduanera.

La actividad aduanera es importante en el desarrollo económico y social de una nación y en ese sentido los funcionarios aduaneros, en la aplicación de la legislación aduanera tienen el mandato legal de cumplir y hacer cumplir las leyes que rigen la actividad comercial de importación y exportación de mercancías y sus otros regímenes sin que haya abuso de autoridad o discrecionalidad.

La actividad aduanera se fundamenta en el control del tráfico internacional de mercancías, entradas y salidas del país, que requiere de tres grandes actuaciones: la clasificación, valoración y procedimiento que se materializan en diversos trámites y operaciones aduaneras con los propósitos de garantizar en primer lugar el cumplimiento de los procedimientos de facilitación, control y regulación de la legislación aduanera, la correcta recaudación de tributos y el pago a las exportaciones.

La lucha contra la evasión de los impuestos o distintas faltas en el sistema aduanero constituye una tarea fundamental, tanto del Estado como de los ciudadanos, en procura de sanear los fundamentos primordiales de la sociedad tales como lo ético y moral, lo jurídico, económico y social; con la finalidad de que prevalezca el Estado de Derecho. Por ello es una responsabilidad de la sociedad en general el combatir y erradicar cualquier ilícito y mala organización

para poder cumplir con las exigencias sociales en el campo educativo, salud, infraestructura, entre otros.

Conforme a lo establecido en la Ley 339: Ley creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a la Ley creadora de la Dirección General de Ingresos. La Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), como órgano superior de Aduanas a nivel nacional, tiene la misión de velar por la efectiva regulación del sistema aduanero en materia de recursos, controlar y hacer cumplir las obligaciones de los funcionarios y usuarios de este sistema, teniendo como objetivo principal, la administración de los servicios aduaneros para el control y facilitación del comercio exterior por medio del desarrollo y mejoramiento constante de la técnica aduanera.

Las atribuciones y funciones que por ley se le han otorgado a la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), con el tiempo han devenido en un descontrol en contra de los usuarios del servicio aduanero; por cuanto cada administración, con la finalidad de cumplir con sus programas sociales, recaudan, a costa de lo que sea, lo que incide negativamente en el flujo comercial. En ocasiones creando una situación insostenible para quienes no poseen un capital que respalde sus actividades comerciales ya que trabajan con préstamos bancarios, lo cual los lleva a tener que evadir el pago de los tributos aduaneros, sobre todo los de la Importación de mercancías y así subsistir a la par de quienes poseen capital suficiente, cometiéndose ilícitos de defraudación y contrabando aduanero lo que lleva a la gran cantidad de recursos presentados ante la DGA.

En este trabajo monográfico, titulado **“Aplicación del Régimen Jurídico de los Recursos Administrativos en Materia Aduanera en el segundo Semestre de 2012 en la DGA. Managua (CAUCA Y RECAUCA).”** Se abordan además de aspectos generales e históricos los antecedentes de la aduana y el desarrollo que ha en Nicaragua hasta llegar a lo establecido por la Ley 339 Ley Creadora

de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos. Así mismo se establece una valoración de cómo, la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), cumple la ley de una manera irregular violentando con ello diversos derechos de los ciudadanos, como el de presunción de inocencia en tanto no se demuestre su culpabilidad conforme a la ley y el debido proceso o cuando esta institución quiere implementar multas que no corresponden.

Con la presente investigación se pretende dar respuesta a las inquietudes de los usuarios del Servicio Aduanero del por qué suceden irregularidades y que sus resultados sirvan de punto de partida para defender sus derechos ante posibles violaciones de la administración estatal representada por la DGA.

Es importante señalar que sus resultados también servirán como un termómetro para determinar el grado de dominio que tienen en la aplicación de la ley, en lo referente a la defraudación y contrabando aduanero, tanto los empleados del servicio aduanero así como los auxiliares de la función pública, que son en primera instancia, generalmente, quienes representan a los consignatarios o importadores que se ven involucrados en conflictos con la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA).

En definitiva, el cuerpo jurídico aduanero establecen la conducta, concilian intereses, prevén conflictos e imponen sanciones a quienes violan las disposiciones que están relacionadas con el Derecho administrativo sancionador y que da como resultado al Derecho Administrativo infraccionario aduanero donde se establece y regulan diferentes presupuestos jurídicos que configuran la administración aduanera.

Esta facultad sancionadora de la administración es un poder jurídico en virtud del cual la administración impone correcciones a los administrados por conductas

que desvirtúan el orden jurídico a partir del cual debe garantizarse el mantenimiento del orden general de la sociedad.

Esta facultad que el Estado tiene de sancionar para resguardar el orden, no puede ser vista como un privilegio, por el contrario, es solamente un instrumento para el cumplimiento de sus fines. Tampoco puede considerarse como una actuación, en la que prevalece la libertad absoluta sino, que ésta se encuentra limitada por las disposiciones constitucionales y por las facultades que este mismo cuerpo normativo otorga a sus administrados, para recurrir ante las instancias competentes en aras de redimir sus derechos presuntamente violentados.

II.- ANTECEDENTES

Desde los inicios del comercio, las aduanas fueron concebidas como instituciones que tenían por objetivo el cobro de peajes que financiaran la gestión del Estado. Esto se lograba a través del control y la regulación del tráfico de mercancías entre las naciones. Podemos estar seguros que la corrupción, la defraudación, el contrabando y la búsqueda de nuevas rutas de comercio que obviaran el pago de estos peajes nacieron junto con las aduanas.⁴

Con el transcurso del tiempo, el intercambio de bienes se hizo más complejo, el número de países involucrados creció, la variedad de productos a comerciar se incrementó, los volúmenes de los mismos fueron cada vez mayores, el flujo del dinero y capital de las transacciones aumentaron considerablemente, los procesos productivos y las facilidades de comunicación se intensificaron de tal manera que el simple cobro de peaje y contabilización de las mercancías no bastaba ya para que los gobiernos pudiesen ordenar y encauzar la actividad comercial hacia el beneficio de las naciones que representaban.

Se hacían necesarios trámites y procedimientos que regularan la actividad comercial y en consecuencia las aduanas se convirtieron en sistemas cada vez más complejos. Estas barreras ocasionaron, en determinados momentos de la historia, que los estados consideraran solucionar sus problemas comerciales a través de: la guerra, la conquista, la colonización, la independencia, la dominación y la revolución entre otros.

Al final de la Segunda Guerra Mundial encontramos que en el mundo hay dos sistemas económicos que luchan entre sí, el socialismo y el capitalismo. Resultaba imperativo para los gobiernos capitalistas contener el avance del socialismo y el arma principal con que contaba era la base económica natural del

⁴ Palacio, Noel Rafael y Barahona, Juan Carlos. (1996). Sistema Aduanero Nacional de Nicaragua. (1era. Ed.). Nicaragua.

sistema mismo, como lo son la propiedad privada, la libre contratación y el comercio; los cuales se deberían complementar con un sistema político democrático que pudiera hacer frente a la amenaza.

Las economías más débiles serían el frente de estos dos sistemas, urgía pues fortalecer a dichos países y especialmente los que habían sido seriamente afectados por el conflicto. La única manera en que se podía lograr era a través de la eliminación de las brechas económicas existentes entre las naciones y por tal motivo, dentro del marco de contención al socialismo, los conceptos de Integración Económica, Mercado Común, Libre Comercio comienzan a tener sentido.

Los primeros intentos tienen carácter mundial al convocarse la “Conferencia Internacional sobre Comercio y Empleo” que elaboró un código de conducta, destinado a regular el comercio internacional y que llevó a la creación de una Organización Internacional de Comercio (OIC) que sería auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, 23 naciones firman el Acuerdo General sobre Aranceles de Aduanas y Comercio (GATT) en 1947, lo que supuso la anulación del proyecto de creación de la OIC. El GATT es un acuerdo multilateral intergubernamental, que desde su sede en Ginebra, regularía las relaciones comerciales de los países firmantes y que sería el foro en donde dichas naciones negociarían todo lo relacionado a comercio internacional.⁵

Ese mismo año se crea la “Organización Europea de Cooperación Económica” (OECE) con motivo del Plan Marshall. La OECE alcanzó grandes logros en la elaboración de mecanismos eficaces que facilitasen las relaciones económicas internacionales. Con esta experiencia más tarde un grupo de países europeos

⁵ Ibidem.

crean la Comunidad Económica Europea (CEE) y otros firman la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

Los primeros tenían como objetivo la creación de un Mercado Común donde personas, servicios y capitales pudieran circular libremente. Los segundos se limitaban a crear una zona de libre cambio que eliminara los obstáculos, arancelarios y no arancelarios, a los intercambios comerciales entre los países firmantes.

Poco a poco los países que integran EFTA se fueron adhiriéndose a la CEE (en la actualidad Unión Europea). Este ejemplo fue seguido por otros países en otras regiones y vemos como surgen en los sesentas el Mercado Común Centroamericano (MCCA), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEA), y el Pacto Andino.

Estos bloques económicos perseguían objetivos similares, pero se diferenciaban en el modelo económico a desarrollar. La concepción básica consistía en crear “grandes mercados nacionales” libres de Derechos aduaneros para los miembros y en relación a terceros con un sistema arancelario común que protegería y permitiría el desarrollo de la industria regional.

Las particularidades políticas (presencia o ausencia de democracia) de los países que los conformaban y los modelos de desarrollo escogidos fue lo que estableció las diferencias entre los éxitos de unos y los fracasos de otros. Unos optaron por volcarse afuera y se enfocaron en la exportación. En ambos modelos la función recaudadora de las aduanas fue quedando en un segundo plano, la necesidad de los países de contar con información confiable que permitiese orientar tanto a los gobiernos como empresas sobre los rumbos que tomaba la actividad comercial internacional hizo que la función controladora se impusiera.

III.- JUSTIFICACIÓN

DERECHO ADUANERO:

“Es una rama del Derecho administrativo, del Derecho tributario y del Derecho comercial que se encarga de regular el tráfico de mercancías ya sea tratándose de importación o exportación, además de imponer sanciones a los particulares que incurran en infracciones hacia estas regulaciones. Basaldúa, Ricardo Xavier.”⁶

La complejidad que representa el Derecho Aduanero, tiene una gran trascendencia para la política comercial y fiscal de un país, puesto que a través de él se regulan las posibles medidas proteccionistas del mercado interior de la competencia de los productos extranjeros.

Corresponde al Estado de Nicaragua la organización del Estado bajo los principios establecidos en la Constitución Política de Nicaragua en el título octavo, así lo señala el **Arto.130: “ La nación nicaragüense se constituye en un Estado Social de Derecho, ningún cargo concede, a quien lo ejerce, más funciones que las que le confieren la constitución y las leyes...”⁷**

Así mismo corresponde al Estado de Nicaragua garantizar la defensa de los derechos de los ciudadanos frente al Estado mismo conforme el Arto. 27 de la Constitución Política: “ **Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivo de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social.**

Los extranjeros tiene los mismos deberes y derechos que los nicaragüenses con excepción de los Derechos políticos y los que establezca las leyes no pueden intervenir en los asuntos políticos del país.

⁶ Basaldúa Ricardo Xavier; Introducción al Derecho Aduanero; 2002; Argentina. Pag 24

⁷ Constitución de la República de Nicaragua; 4ª ed. Hispamer, Managua Nicaragua 2011. Arto. 130

El Estado respeta los derechos reconocidos en la presente constitución todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sujetas a su jurisdicción.⁸

El Derecho Administrativo es aquella rama del Derecho Público que regula todo lo concerniente a la relación entre el Estado o Administración Pública y los ciudadanos o administrados. Partiendo desde este principio podemos decir entonces que el Derecho Administrativo vela por el interés común, pero ese interés común muchas veces se encuentra limitado por el carácter discrecional que tiene la administración respecto de los actos o disposiciones que ésta realiza.

En estas circunstancias es donde cabe hablar de los Recursos Administrativos, ya que si bien es cierto que una de las características de la administración es su discrecionalidad, para actuar, también la ley otorga mecanismos de defensa para los ciudadanos cuando estos consideren agraviados sus derechos con los actos y disposiciones dictados por la administración.

Con el trabajo monográfico **“Aplicación del Régimen Jurídico de los Recursos administrativos en materia Aduanera en la DGA en el segundo semestre de 2012. Managua”**, analizaremos los medios que la Ley otorga a los ciudadanos para impugnar los actos y disposiciones que emita la autoridad aduanera que les cause algún perjuicio. Así también consideramos que nuestro trabajo pueda contribuir, como material de consulta y conocer lo relativo al Derecho Aduanero, que muy poco se estudia en nuestro país pero que es de gran importancia, en tanto que regula parte de los actos de comercio que se realizan en nuestro territorio, tanto para la importación como para la exportación. Actividad sobre la cual recaen una serie de disposiciones administrativas de la entidad que regula la actividad aduanera en Nicaragua.

⁸ Constitución Política de la Republica de Nicaragua, Obr citada. Arto.27.

Interrogantes que a diario se hacen las personas que se encuentran en la actividad aduanera, tales como ¿Qué pasa cuando se nos retiene una mercadería sin aparente causa justificada? ¿Qué medios legales tenemos para revocar las decisiones administrativas de la DGA?, ¿Cuál es el procedimiento?, ¿Quién es la última instancia que conoce sobre el asunto?, ¿Cómo se debe recurrir ante las instancias administrativas aduaneras? Son las que nos permitirán conocer de los medios de impugnación de los que se valen los ciudadanos para defenderse de los actos o disposiciones que dictan las autoridades aduaneras sobre diferentes aspectos que le puedan causar algún perjuicio.

Razones suficientes para motivarnos a realizar un estudio detallado sobre los Recursos Administrativos en materia aduanera y por tanto, tener claridad del régimen jurídico de la actividad aduanera en Nicaragua de conformidad con las normas jurídicas de nuestro país ya que muchas veces las autoridades asumen potestades que la ley no le otorga y por tanto los actos que realizan pueden ser impugnados y revocados legalmente.

IV.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Durante el segundo semestre del año 2012, los Administrados del Departamento de Managua dedicados a la actividad aduanera se han encontrado en un estado de indefensión en el proceso de tramitación de los Recursos Administrativos por que además de encontrarnos una gran dispersión de las normas que rigen en el Derecho Aduanero lo cual dificulta el acceso que las personas puedan tener al momento de recurrir para reclamar frente a la entidad estatal, las normas jurídicas administrativas suponen una tramitación de los medios de impugnación en el que la autoridad aduanera, en su carácter de administrador es a su vez juez y parte del proceso.

V.- OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Analizar la Aplicación del régimen jurídico administrativo aduanero en la aplicación de los Recursos Administrativos aduaneros en Nicaragua en el periodo del II semestre del año 2012 en la Dirección General de Aduana en el departamento de Managua.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Identificar los recursos que en la vía administrativa aduanera que establece la legislación nicaragüense para impugnar los actos o disposiciones que causen perjuicio a los ciudadanos, emitidos por las autoridades aduaneras en materia de su competencia.
2. Valorar la eficacia de los procedimientos para la interposición de los Recursos Administrativos que se establecen en el Derecho Aduanero para que los Administrados puedan recurrir a redimir sus derechos.
3. Valorar la experiencia en la tramitación de los recursos aduaneros en Chile a través de un análisis comparado con la legislación nicaragüense.
4. Presentar algunas recomendaciones que de acuerdo a los resultados de la monografía se pueda coadyuvar a la superación de las dificultades encontradas.

VI.- HIPÓTESIS

Las constantes violaciones a los Derechos de los administrados en materia aduanera se dan como consecuencia de la debilidad del sistema jurídico administrativo y de la dispersión de normas legales, dejándolos en estado de indefensión y de inferioridad con respecto al Órgano Administrativo competente el que actúa como juez y parte en el proceso.

CAPÍTULO I

GENERALIDADES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

VII.-GENERALIDADES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

I. CONCEPTOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

Estructurar una definición propia de Derecho Administrativo pasa por hacer un estudio de las definiciones planteadas por diferentes tratadistas del Derecho que señalamos en nuestro trabajo para una comprensión amplia y detallada del tema que nos ocupa.

El Derecho Administrativo:

- a) **En sentido Amplio:** *Es todo el derecho relacionado con la Administración Pública. Pero esta definición deja afuera a entes que no integran la Administración Pública y que ejercen funciones Públicas.*
- b) **En sentido Estricto:** *Es el conjunto de normas jurídicas, que rigen las relaciones de la Administración Pública con los administrados y de sus órganos o agentes entre sí.*

*Dromi, Roberto define: "El Derecho Administrativo es el conjunto de normas y principios que regulan y rigen el ejercicio de una de las funciones del poder, la administrativa. Por ello, podemos decir que el derecho administrativo es el régimen jurídico de la función administrativa y trata sobre el circuito jurídico del obrar administrativo."*⁹

*Diez lo define como un conjunto de principios y normas de derecho público interno que regula la organización y la actividad de la Administración Pública y la relación de ésta con los administrados.*¹⁰

Para Cassagne: Es la parte del Derecho Público interno que regula la organización, las funciones de substancia administrativa, Legislativa y

⁹ Dromi, Roberto. Tratado de Derecho Administrativo. Pág. 136. 1998. Buenos Aires, Argentina. 7ma Edición.

¹⁰ Diez Manuel María. Derecho Procesal Administrativo. Pág. 123.

jurisdiccional del Poder Ejecutivo y de las entidades jurídicamente descentralizadas, las funciones administrativas de los restantes órganos (Poder Legislativo y Poder Judicial) y en general todas aquellas actividades realizadas por personas Públicas o privadas a quienes el ordenamiento les atribuye potestades de poder público derogatorias o exorbitantes del derecho privado.¹¹

*Para el Doctrinario **Gordillo**: es la rama del Derecho Público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente contra ésta.*

*Por otra parte **Bielsa**: es el conjunto de normas positivas y principios de Derecho Público que se aplican en forma concreta (es decir, no sólo creación de normas sino actuación del Estado) a los servicios públicos, así como al debido control de la legalidad de la actividad estatal en defensa de los administrados (es decir que se controla que la actividad del Estado sea justa y legal ya que éste, al actuar como autoridad usando el poder público, puede lesionar derechos individuales).*

De tal forma que podemos considerar que el Derecho Administrativo es según las definiciones estudiadas aquel que regula la función administrativa del Estado. Cabe hacernos la pregunta entonces ¿Qué es Administración? El diccionario de la Real Academia Española lo define que se deriva del latín "administrare", palabra compuesta, integrada del prefijo "ad", el sustantivo "manos", y el verbo "trahere", que significa "servir, gobernar, cuidar, regir", evocando la idea de prestación de servicios.

La función de Administración es una actividad concreta, dirigida, a través de una acción positiva; a la realización de los fines concretos de seguridad, progreso y bienestar de la colectividad definido así por el doctor Armando Rizo Oyanguren.

La función del Estado puede ser formal cuando el Estado realiza actividades a través del poder Ejecutivo, y ejerce una función material cuando la función

¹¹ Varios Autores. Derecho Administrativo. Libro Guía de Estudio. Pag.25. Argentina. Editorial Estudio.

*administrativa del Estado es el acto administrativo en sí, es decir, vamos a entender por Función administrativa aquella que el Estado realiza bajo un orden jurídico, y que consiste en la ejecución de actos materiales y de actos jurídicos que crean, reconocen, modifican o extinguen situaciones jurídicas individuales.*¹²

II. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

El Derecho Administrativo tiene características especiales que lo diferencian de otras ramas del Derecho a saber:

1. **Es de Derecho Público:** *En tanto que regula la actividad estatal y la de los entes no que actúan en ejercicio de la función administrativa. El fin del Derecho Público es satisfacer intereses colectivos o sociales, y el fin del Derecho Privado es satisfacer intereses particulares o individuales (aunque algunas normas del derecho público pueden proteger intereses particulares - ej.: protección constitucional de la libertad, propiedad privada, etc.-).*
2. **Es Común:** *Es la parte del Derecho que estudia los principios "básicos" del Derecho Público. Es decir, el Derecho Administrativo suministra los principios comunes para el Derecho Aduanero, tributario, policial, municipal, ambiental, previsional, de aguas.*
3. **Es Dinámico:** *Sus normas deben adaptarse a las constantes transformaciones que se producen en la sociedad, en donde pueden surgir situaciones de emergencia que el derecho debe resolver rápidamente (para satisfacer el interés público). Es por eso que el Derecho Administrativo dicta normas que regulan la emergencia administrativa, económica, previsional, social, Judicial, etc.*
4. **Es Organizacional:** *Responde al orden y regulación de cada uno de los diferentes entes: Nación, Provincias, Municipios.*

¹² Rizo Aranguren, Armando. Manual Elemental de Derecho Administrativo. Pag.22. León, Nicaragua. 1991.

5. **Es Interno:** *Es un régimen jurídico de la función administrativa, de ejercicio estatal o no estatal, que rige la relación libertad-autoridad en lo interno de las distintas organizaciones.*
6. **Es exorbitante:** *Tiene poderes que exceden la Órbita del Derecho Privado.*

III. FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

En general las fuentes del Derecho Administrativo son similares a las de otras disciplinas jurídicas. Existen diferentes clasificaciones:

FUENTES SOCIOLÓGICAS Y JURÍDICAS:

SOCIOLÓGICAS: Son aquellas que incluyen los factores políticos, económicos, sociales, religiosos que inciden o moldean los cambios en el ordenamiento jurídico.

JURÍDICAS: Pueden ser escritas y no escritas

Fuente escrita: Es aquella que consta por escrito y consiste en actos jurídicos de consecuencias normativas, que voluntaria y conscientemente se orientan a generar la regla del derecho”¹³

Fuente no escrita:

No consta por escrito; se elabora de hechos materiales o de actos jurídicos no encaminados a crear la norma legal (en sentido genérico) por ejemplo, la jurisprudencia y la costumbre. Entendida la jurisprudencia como aquella que está formada por antecedentes producidos por los tribunales. Se trata de

¹³ Romero Pérez Jorge Enrique. Derecho Administrativo General. Editorial Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica. 1999.

reiteración de criterios legales, que no tienen como intención crear una norma jurídica general. Es la interpretación de la Ley (en sentido genérico) hecha por los jueces (en sentido amplio). Esta interpretación forma un conjunto de sentencias o resoluciones que le dan a los casos concretos que se le presentan para fijar la solución que consideren oportuna.

La costumbre:

Es una regla de derecho que funda su valor en la tradición y no en la autoridad del legislador. Se trata de una repetición de actos uniformes que forman una tradición con relevancia jurídica que con el Estado reconoce tácita o expresamente como fuente de una norma acorde con esa repetición. El Estado no puede argumentar la costumbre para perjudicar al administrado. La Administración Pública no puede crearse derechos a partir de la costumbre en perjuicio de los particulares. Es lo *contrario, podría aceptarse que la costumbre es fuente de derechos para los administrados frente a la Administración Pública.*

La Doctrina:

Conjunto de opiniones, comentarios y conclusiones de los juristas que estudian el Derecho (legislación y jurisprudencia) y luego lo explican en sus obras, haciendo observaciones, creando teorías y dando soluciones.

La clasificación de las fuentes formales del Derecho más común es la de Fuentes Directas, Fuentes Directas Subsidiaria, la que distingue las fuentes directas que como ya hemos dicho (encierran en sí la norma) de las fuentes indirectas (que sin llegar a constituir por sí mismas verdaderas normas jurídicas), coadyuvan a su producción y comprensión.

FUENTES FORMALES Y MATERIALES

Fuente formal: Es la que está autorizada y regulada por el propio ordenamiento jurídico y que genera normas de cumplimiento obligatorio. Se trata de la que podríamos llamar la "verdadera fuente de derecho, es decir, lo que se puede indicar esencialmente como tal.

CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES

El maestro Garrido Falla clasifica los tipos de fuentes en el siguiente cuadro:

DIRECTAS ESCRITAS	NO ESCRITAS	INDIRECTAS
Carta Magna	Principios generales del Derecho	Jurisprudencia (administrativa y judicial)
Tratados Internacionales	Costumbre	
Leyes		
Reglamentos		
Decretos		
Circulares		

Otra clasificación que plantea Cermesoni y Cassagne :

DIRECTAS ESCRITAS	NO ESCRITAS
Integran el Derecho aplicable	Se refieren a los hechos sociales, doctrin costumbre.
(Constitución, Tratado, Ley,	

JERARQUÍA DE LAS FUENTES ESCRITAS

Generalmente las fuentes del Derecho tienen un orden jerárquico, como se detalla:

- Constitución Política.
- Tratados y Convenios Internacionales.
- Leyes.
- Reglamentos,
- Decretos.
- Circulares.

A continuación analizaremos cada una de las fuentes en el orden en que se han jerarquizado:

Constitución y Leyes con Rango Constitucional:

La Constitución Política en tanto carta fundamental de la Republica; todas las leyes deberán estar subordinadas a ella y se considera que para complementar el cuerpo normativo constitucional se establecen las leyes constitucionales: Son aquellas normas que de conformidad con la Constitución Política tienen igual rango de jerarquía, en nuestro sistema son tres: Ley Electoral, Ley de Amparo y Ley de Emergencia.

Los Tratados y convenios Internacionales:

Es el acuerdo entre sujetos de Derecho Internacional, destinado a producir determinados efectos jurídicos: crear una obligación, resolver una ya existente o

modificarla. Los tratados internacionales tienen relevancia en el Derecho Administrativo cuando vienen a regular aspectos propios que tengan que ver con la administración. Los mismos deben ser ratificados por los países partes siempre que se cumpla el procedimiento establecido pasando a formar parte del ordenamiento jurídico escrito.

Las Leyes Ordinarias:

Es toda norma jurídica de carácter general que emana del Poder Legislativo a través del procedimiento establecido en la Constitución política para su debida aprobación y entrada en vigor.¹⁴

Reglamentos:

Son normas jurídicas producidas por el Poder Ejecutivo, es un acto unilateral que emite un órgano de la Administración Pública creador de normas jurídicas generales y obligatorias que regula situaciones objetivas e impersonales.

Los Decretos:

Son una norma de carácter excepcional, y presupone la existencia de una necesidad justificadora que no puede entenderse como una necesidad absoluta, sino como una necesidad relativa respecto de situaciones concretas que requieren una acción normativa inmediata.

Las ordenanzas Municipales y Reglamentos y estatutos de entidades públicas:

¹⁴ Romero Pérez Jorge Escorcía. Derecho Administrativo General. Editorial Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica. 1999.

Son normas de carácter especial, esto incluye reglamentos o políticas internas de cada institución así también como aquellas a las que la ley le concede independencia de dictar sus propias normas por ejemplo a las municipalidades.

Circulares: Son disposiciones administrativas que tienden a regular algunas disposiciones asumidas por los entes del Estado pero que en general trastocan las disposiciones legales e incluso violentan los derechos de los administrados.

IV. POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

A partir del constitucionalismo la potestad sancionadora de la administración deja de ser un *monopolio estatal de la represión y se traslada a los jueces y tribunales lo que supone la adopción del Derecho penal legalizado y judicializado, no obstante los Estados que asumieron un sistema de represión mas objetivo no abandonaron su poder sancionatorio lo que conllevó a la existencia de dos sistemas: un sistema policía, represivo y un sistema racionalizado, objetivo.*

En la actualidad es dominante la idea que la administración tiene una potestad punitiva y por otro lado una potestad penal de los tribunales, forma parte de un genérico **ius puniendi** del Estado. Entendido esto como la capacidad de ejercer un control social coercitivo ante lo constituido como ilícito y que se manifiesta no solo en la aplicación de las leyes penales por las instancias jurisdiccionales sino también en la administración pública.

A la Administración Pública le corresponde el ejercicio del control y seguimiento del administrado lo cual es posible a través de una relación del Estado con sus administrados de las térmicas permisivas de control sobre la cual surge la posibilidad de que la administración cumpla con una labor de tutela y por tanto pueda aplicar ante determinados incumplimientos, acciones u omisiones las sanciones administrativas correspondientes.

La potestad sancionadora de la administración se manifiesta en el Poder Jurídico en virtud del cual la administración impone correcciones a los ciudadanos por conductas contrarias al orden jurídico.

De tal potestad podemos inferir que la finalidad del Estado es garantizar el orden general de la sociedad.

Corresponde pues a la administración como instrumento para el cumplimiento de sus fines el poder sancionador sin que este se constituya en un privilegio. Se constituyen como elementos esenciales del poder sancionador:

- a) El poder que ejerce la administración para sancionar derivado del ordenamiento jurídico.
- b) La imposición de una medida de carácter coercitivo para el administrado puede constituirse en la privación de un derecho, como en la imposición de un nuevo deber, como ocurre con una sanción pecuniaria.
- c) El poder punitivo de la administración tiene carácter represor por cuanto castiga una conducta contraria a derecho y redime el orden jurídico quebrantado.

Es necesario destacar el Principio de Legalidad, que está íntimamente relacionado con la Constitución Política, como fuente del derecho administrativo.

Sostiene **Garrido Falla**: Que el principio de la legalidad es una de las consagraciones políticas del Estado de Derecho y, al mismo tiempo, la más importante de las columnas sobre que se asienta el total edificio del Derecho Administrativo. No solamente supone la sumisión de la actuación administrativa a las prescripciones del Poder Legislativo, lo cual viene de suyo postulado por la misma mecánica de la división de poderes y por el mayor valor formal que a los actos del Poder Legislativo se concede, sino, asimismo, al respeto absoluto en la

producción de las normas administrativas al orden escalonado exigido por la jerarquía de las fuentes, y finalmente, la sumisión de los actos concretos de una autoridad administrativa a las disposiciones de carácter general previamente dictadas por esa misma autoridad, o, incluso, por autoridad de grado inferior siempre que actúe en el ámbito de su competencia.¹⁵

Por lo tanto, el ámbito de vigencia del principio de la legalidad de la actividad administrativa, supone:

- 1- La sumisión de los actos administrativos concretos a las disposiciones vigentes de carácter general.
- 2- La sumisión de los órganos que dictan disposiciones generales, al ordenamiento jerárquico de las fuentes escritas del Derecho.

De aquí que puedan formularse las siguientes reglas:

- a) Las disposiciones y resoluciones administrativas no podrán infringir lo dispuesto en leyes dictadas por el Poder Legislativo.
- b) Las disposiciones y resoluciones administrativas no podrán vulnerar los preceptos contenidos en disposiciones dictadas por autoridad de superior jerarquía.
- c) Las autoridades administrativas no podrán dictar resoluciones de carácter concreto que desconozcan, lo que la misma autoridad haya dispuesto por vía general. (Una autoridad administrativa puede, indudablemente, derogar sus propios Reglamentos o dictar otros de contenido contrario. Más, mientras tal derogación no tenga lugar, está vinculada en su actuación concreta a la vigencia de sus prescripciones).

¹⁵ Rizo Oyanguren, Armando. Manual Elemental de Derecho Administración. Pág. 39. León, Nicaragua. 1991.

- d) Las resoluciones administrativas concretas no pueden vulnerar lo establecido en disposiciones de carácter general dictada por autoridades inferiores, dentro del límite de su competencia.

El principio de la legalidad estatal ha sido tradicionalmente establecido en el Derecho Constitucional Nicaragüense, en nuestras diferentes Constituciones, encontramos un precepto que con ligeras variantes dispone: **"Los órganos del Estado y los funcionarios públicos no tienen, ni bajo pretexto de circunstancias extraordinarias, mas autoridad ni competencia que las que expresamente les confiera la ley"** (Arto. 183 Cn)¹⁶. El principio rige para todos los órganos del Estado y, por lo tanto a los órganos de la Administración (Poder Ejecutivo).

No debe confundirse el principio de la legalidad estatal, con el principio de la legalidad que rige las actividades de los particulares (personas naturales y personas jurídicas), también consagrado en nuestro Derecho Constitucional y el cual se enuncia de la siguiente manera:

"Ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no manda, ni impedida de hacer lo que ella no prohíba". (Arto. 32 Cn)¹⁷

Por otra parte tenemos el Principio de subsidiariedad, que al igual que el principio de legalidad, también rige el actuar del estado y establece que el Estado podrá intervenir cuando esté en juego el bien común y siempre que la iniciativa privada no tenga soluciones o sean insuficientes. Es decir, que no adopta ninguno de los extremos: que el Estado intervenga en todo o que directamente no intervenga.

¹⁶ Constitución Política de la Republica de Nicaragua. Publicada en la Gaceta Diario Oficial , No.176 del 16 de Septiembre del 2010.

¹⁷ Ibídem 8.

V. RELACIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO CON OTRAS CIENCIAS

Para tratar el tema de las relaciones del derecho administrativo con las otras disciplinas jurídicas, hay que partir de la premisa de que el derecho es uno y por ello sus partes (las disciplinas jurídicas) están íntimamente entrelazadas. Y esto es así porque existe unidad en el ordenamiento jurídico. La unidad del derecho es intangible y sólo es admisible su división en ramas para facilitar una mayor y mejor adecuación de sus normas a determinadas formas de conducta, en función de fines concretos. Las normas, por tanto, son fruto de relaciones de fundamentación o derivación, lo cual exige la compatibilidad entre ellas. Ahora bien, esta compatibilidad entre normas puede ser vertical (entre una norma superior y otra inferior) u horizontal (normas de igual jerarquía).

De allí que la materia comprendida en cada rama del derecho no puede ser independiente. Una cosa es la independencia y otra muy distinta la especialidad que cada contenido da a cada disciplina jurídica.

Por esto las relaciones entre ellas son intra-ciencia, no inter-ciencia. Así, el Derecho Administrativo no puede ser tratado con abstracción de las otras disciplinas jurídicas, pues todas se relacionan entre sí, todas tienen puntos de contacto, de referencia y de apoyo. Todas son disciplinas del Derecho.

En síntesis, creer que cada rama del Derecho es independiente, es suponer que hay varios derechos, y el derecho es uno. Las relaciones entre las distintas disciplinas jurídicas describen los principios unificadores, capaces de determinar una unidad sistemática y una coherente analogía jurídica entre las varias ramas de un único ordenamiento positivo, que ofrece algunos institutos comunes y fronterizos a más de uno de sus ordenamientos especiales.

Derecho Administrativo y Derecho Constitucional:

La Constitución: contiene todas las normas relativas al Estado, su organización, relación entre poderes públicos, derechos y garantías fundamentales del individuo. El Derecho Administrativo nace en el Derecho Constitucional, ya que en un Estado democrático todos los organismos públicos, las normas que los fundamentan y las funciones y actividades que la administración pública realiza, tienen su origen constitucionalmente.

Derecho Administrativo y Derecho Internacional: A la administración le corresponde mantener en el interior de un país con las obligaciones y compromisos de carácter internacional que asume el Estado para las relaciones exteriores, la diplomacia y creación de organismos internacionales. El Estado ya sea dentro o fuera de su territorio cumple con actividades administrativas para eso contempla sus propios órganos acreditados en el exterior, como ejemplo tenemos las embajadas, consulados, los cuales cumplen también actividades administrativas

Derecho Administrativo y Derecho Civil: Los asuntos económicos o patrimoniales del Estado están sometidos al Derecho Civil, tal es el caso de la propiedad privada, la expropiación, los impuestos, las tasas los aranceles, créditos etc.

Derecho Administrativo y Derecho Procesal Civil: La Administración desarrolla sus actividades mediante procesos y procedimientos para llevar a cabo las demandas administrativas, las resoluciones, las impugnaciones y la ejecución de resoluciones administrativas, las cuales pueden ser cuestionadas en los procesos contenciosos administrativos

Derecho Administrativo y Derecho Penal: En la legislación penal existen normas expresas, referentes a los delitos contra los deberes de función y deberes profesionales y contra la administración Pública (Delitos contra la

Administración Pública). El régimen disciplinario administrativo tiene sanción y se vincula a lo penal.

Derecho Administrativo y Derecho Tributario: El Derecho Tributario tiene cercana vinculación con el Derecho Administrativo, y se está abriendo paso a paso como especialidad en materia tributaria con incidencia en la vida económica del país, los presupuestos y la Administración Pública

Derecho Administrativo y Derecho Registral y Notarial: El Derecho Registral y Notarial forma parte de los entes públicos que constituyen la organización jurídica del Estado al servicio de la colectividad y de la administración pública.

El Registro de Propiedad inmueble, garantiza el Derecho Inmobiliario, registrando los Derechos Reales sobre inmuebles y dando publicidad a los mismos, los cuales tienen uso y finalidad en la Administración Pública.

Derecho Administrativo y Derecho aduanero: Se relaciona por las tarifas y aranceles que se cobran al comercio exterior y que van directamente a las SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), también se establecen procedimientos administrativos que siguen en esta área PAMA (procedimientos administrativos en materia aduanal).

Con el Derecho Financiero: El derecho financiero tiene por finalidad la regulación jurídica de la actividad financiera del Estado; es decir, el cobro, gasto y administración de los recursos hasta el momento de su inversión. Incluimos dentro de esta disciplina al Derecho Fiscal y al Derecho Tributario.

Es evidente la relación entre el Derecho Administrativo y el Derecho Financiero, pues principalmente tienen en común el sujeto, es decir, la Administración Pública. No obstante, la actividad de la Administración Pública tiene distinta

finalidad y se ejerce de manera distinta en ambas disciplinas. El Derecho Financiero es una disciplina jurídica autónoma del Derecho Administrativo.

Sin embargo, la relación entre ambas ramas del derecho es muy estrecha. La actividad financiera se realiza por medio de actos de la Administración Pública, a través de sus agentes y actuando los órganos administrativos. Además, los principios relativos a la descentralización, autarquía, responsabilidad disciplinaria y función pública atinentes a la organización y actividad financiera, son del dominio del Derecho Administrativo.

VI. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

Objeto de los Recursos Administrativos

El Acto Administrativo ***“Es una declaración concreta y unilateral de voluntad de un órgano de la Administración en ejercicio de la potestad administrativa”***¹⁸, o como establece el artículo 39 de la Ley de organización y Competencia del Poder Ejecutivo, publicada en la Gaceta Diario Oficial Nº 102 del 3 de junio de 1998.¹⁹

Artículo 39 Recurso Administrativo ***“Se establece el Recurso de Revisión en la vía administrativa a favor de aquellos ciudadanos cuyos derechos se consideren perjudicados por los actos emanados de los Ministerios y Entes a que se refiere la presente Ley. Este recurso deberá interponerse en el término de quince días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del acto.”***

El Acto Administrativo es la culminación del procedimiento administrativo constitutivo, se haya abierto o no un sumario administrativo, pues la Administración debe proferir una decisión que ponga fin a este procedimiento. Y

¹⁸ Fraga P., 1998)

¹⁹ Ley de organización y Competencia del Poder Ejecutivo, publicada en la Gaceta Diario Oficial Nº 102 del 3 de junio de 1998

contra esta actuación de la Administración, surge como contrapartida a favor del administrado, el derecho a recurrir contra los actos emanados de aquella, pues conforme al artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se faculta a los interesados para “...*interponer los recursos contra todo acto administrativo que ponga fin a un procedimiento, imposibilite su continuación, cause indefensión o lo prejuzgue como definitivo, cuando dicho acto lesione sus derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos*”.

Esta norma de aplicación general para toda la Administración Pública, encuentra desarrollo particular tratándose de la Administración Tributaria al ser consagrado tal derecho en el artículo 94 del Código Tributario en los términos siguientes:

“Los actos y resoluciones que emita la Administración Tributaria por los que se determinen tributos, multas y sanciones, o que afecten en cualquier forma los derechos de los contribuyentes o de los responsables, así como las omisiones, podrán ser impugnados por los afectados en las formas y plazos que establece este Código.”²⁰

Como puede observarse de las transcripciones anteriores, sin perjuicio de la llamada autonomía del Derecho Aduanero sustantivo frente a otras disciplinas, especialmente frente al Derecho Administrativo, nadie pone en duda hoy día que la revisión en vía gubernativa de los actos administrativos.

Llevado al campo del Derecho Aduanero, a la revisión de los actos emanados de la Administración Pública, los Actos Administrativos de contenido aduanero, si bien tienen un régimen impugnativo especial, regulado por la Ley General de Aduanas, el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y el Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, en los que se encuentra previsto la aplicación supletoria en el artículo 133 del CAUCA Y 638 del RECAUCA los que

²⁰ Ley No. 562. Código Tributario de la República de Nicaragua. Aprobada el 28 de Octubre del 2005 y publicada en la Gaceta No. 227 del 23 de Noviembre del 2005.

nos refieren que lo no previsto en dicho código y su reglamento se tomará lo dispuesto en la legislación nacional.

Los interesados en consecuencia, pueden interponer los recursos legales correspondientes contra los actos administrativos emanados de la Administración Aduanera y ante los propios organismos de dicha administración, dirigidos a obtener la revisión, modificación, suspensión o revocatoria de tales actos, bien mediante decisión del propio órgano del cual emana o del órgano jerárquicamente superior.

Para referirnos a este tema debemos comenzar diciendo que el poder Ejecutivo realiza dos tipos de actividades una política y la otra administrativa.

- a) La actividad política: actúa como poder político y realiza actos de gobierno, políticos o institucionales y su responsabilidad por esos actos se efectivizan a través del Juicio político.

Ejemplos de actos de gobierno: declarar el estado de sitio o la intervención de provincias, nombrar o remover ciertos funcionarios, expulsión de extranjeros, declarar la guerra o firmar la paz, promulgar y vetar leyes. No son revisables judicialmente.

- b) La Actividad Administrativa: En este caso actúa como poder administrador y realiza actos administrativos. Dicha actividad está limitada por ley y los administrados tienen recursos para proteger sus derechos de estos actos. Esta actividad, a diferencia de la política está sometida a control jurisdiccional.

La función administrativa se exterioriza de las cinco maneras siguientes:

1. **Reglamentos Administrativos:** Declaración unilateral efectuada en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos de forma directa.

A partir de esta definición hay que establecer la diferencia entre ley y reglamento, ya que ambas son normas escritas de carácter general, y a nuestro entender éstos serían los dos caracteres comunes a ambas figuras. La ley y el reglamento no se diferencian sólo por cuestiones formales, como por ejemplo el procedimiento para su formación y elaboración, sino que existe una diferencia sustancial entre ambos. Diferencia que se sustenta en razones político-institucionales y jurídicas. Mientras que la ley es la expresión de la voluntad soberana del pueblo, el reglamento es expresión de la competencia reglamentaria de la Administración. La diferencia entre estas dos figuras no es de cantidad, sino de cualidad y grado. La ley emana institucionalmente de uno de los poderes del Estado, el Legislativo. El reglamento es dictado por la Administración, que es el aparato instrumental servicial para la ejecución de los fines estatales.

Las formas de exteriorización del reglamento son diversas: decreto, orden ministerial, resolución, ordenanza, circulares, instrucciones, etcétera. El decreto, la orden o resolución no son sino la forma de exteriorización jurídica que asumen los actos de los órganos estatales, independientemente de que sean actos administrativos, reglamentos administrativos, actos generales o individuales, actos normativos o no.

El concepto expuesto es el que prevalece en la doctrina, con diferencias terminológicas más que de fondo. Analíticamente, podemos decir:

2. **Es una declaración**

Una manifestación o declaración de voluntad, conocimiento o juicio. Así, se distingue el reglamento de los hechos administrativos, que conciernen a la actuación material de la Administración. El reglamento importa un *proceso de exteriorización intelectual* en este aspecto.

3. Unilateral

Por oposición a bilateral, ya que falta la declaración de voluntad común, propia de los contratos de la Administración. Es decir, nace y se perfecciona por la sola voluntad de los órganos públicos competentes. No se requiere la conformidad, ni siquiera el asentimiento de las personas a las cuales alcanza.

4. Efectuada en ejercicio de la función administrativa.

La competencia reglamentaria es inherente a la función administrativa y por consiguiente a la propia Administración; ésta tiene a su cargo múltiples cometidos, para cuyo cumplimiento eficiente necesita realizar operaciones materiales, emitir actos administrativos y también dictar normas generales. La competencia reglamentaria radica, pues, en la naturaleza misma de la función administrativa.

5. Produce efectos jurídicos generales directos.

El carácter *normativo* atañe a la esencia misma del reglamento. Este produce efectos jurídicos generales, indeterminados, generando derechos y obligaciones sin consideración a las singularidades o subjetividades. Sus efectos normativos se imponen como acto-regla, tanto a la Administración como a los administrados.

El reglamento es fuente de competencia, jerárquicamente subordinado a la Constitución, a los tratados y a la ley, y con supra ordinación respecto de los actos administrativos.

El reglamento es una norma jurídica de carácter general. Aquí está dada la diferencia respecto del acto administrativo, pues este último produce simplemente efectos jurídicos subjetivos individuales y el reglamento los produce para un número indeterminado de personas o de casos. El carácter jurídico de la norma reglamentaria es también incuestionable.

La nota distintiva del reglamento, respecto de las otras formas jurídicas por las que se manifiesta el obrar administrativo estatal, está dada por su alcance normativo general, abstracto, indeterminado, impersonal. Los reglamentos son actos normativos.

La división entre reglamentos internos, reglamentos de administración o de organización y reglamentos externos, jurídicos y normativos, ha quedado superada por cuestiones político-ideológicas y fundamentalmente por el contenido jurídico de la relación de empleo público.

Las circulares e instrucciones tienen valor normativo en tanto la relación de supraordinación funcional (empleo público) es eminentemente jurídica o de derecho, aunque en principio no sea posible oponer a terceros el reglamento *interno* o *no se requiera* el requisito de publicación.

1) Simple acto de la Administración: El simple acto de la Administración es la declaración unilateral interna o inter orgánica, realizada en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma indirecta. Son simples actos de la Administración las propuestas y los dictámenes.

La propuesta: Es la decisión por la que un órgano indica o sugiere a otro que emita un acto determinado; por ejemplo, a veces en la designación de personal un órgano propone y otro designa.

La propuesta condiciona la voluntad del órgano encargado de la decisión, porque éste no puede, en principio, introducirle modificaciones, aunque sí rechazar la propuesta, obligando al órgano inferior a hacer una nueva proposición.

Los dictámenes: son actos jurídicos de la Administración emitidos por órganos competentes que contienen opiniones e informes técnico-jurídicos preparatorios de la voluntad administrativa.²¹

2) **Hecho Administrativo:** es toda actividad material, traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la función administrativa, productora de efectos jurídicos directos o indirectos.

Objetivamente, el hecho administrativo exterioriza función administrativa, con prescindencia de que sea el efecto ejecutorio de un acto administrativo que le sirva de antecedente, o que se trate simplemente del desarrollo de la actividad que dicha función requiere en el cumplimiento de sus cometidos propios, en cuyo caso la ejecutoriedad viene dada por una norma de alcance general. De cualquier modo, se trata de un hecho jurídico, en tanto y en cuanto tiene la virtualidad de producir consecuencias jurídicas, que proviene de la Administración Pública (estatal o no estatal) e incide en la relación jurídico-administrativa, de lo que resulta su adjetivación.

Se diferencia del acto administrativo puesto que es un acontecer que importa un *hacer material, operación técnica o actuación física* de un ente público en ejercicio de la función administrativa, mientras que el acto administrativo significa siempre una declaración intelectual de voluntad de decisión, de cognición u opinión.

²¹ Dromi, Roberto. Tratado Elemental de Derecho Administrativo. Pág. 248. Buenos Aires, Argentina. 1988. 7ma Edición.

El hecho, no es una exteriorización intelectual sino material. Ahora bien, es posible que el hecho administrativo sea la ejecución de un acto o que simplemente sea una operación material, sin decisión o acto previo. Ordenar la destrucción de una cosa es un acto. Destruir la cosa es un hecho. También es un hecho destruir la cosa directamente, sin previa declaración, en cuyo caso faltará el acto administrativo.

3) Contrato Administrativo: es toda declaración bilateral o de voluntad común, productora de efectos jurídicos entre dos personas, de las cuales una está en ejercicio de la función administrativa.²²

4) El Acto Administrativo: Para Zanobini es Acto Administrativo cualquier declaración de voluntad, de deseo, de conocimiento o de juicio realizada por un órgano de la administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa. Esta definición acogida en España por Garrido Falla, García de Enterría, Santa María Pastor y otros autores.²³

Las decisiones administrativas no se expresan sólo a través de *operaciones materiales*, sino también mediante *declaraciones intelectuales* de origen unilateral o bilateral, de *alcance* individual o general y de *efectos* directos o indirectos.

Tanto el sustantivo *acto* como el adjetivo *administrativo* son términos susceptibles de interpretación diversa. Por ello, no existe un concepto ni doctrinario ni legalmente unitario. Si bien en el derecho privado, los Códigos definen al "acto jurídico" y al "acto de comercio", en el derecho público no ocurre lo mismo, pues no siempre tenemos Códigos y, cuando los tenemos, no siempre

²² Dromi, Roberto. Tratado de Derecho Administrativo. Pág. 297. Buenos Aires, Argentina. 1998. 7ma Edición.

²³ Derecho Constitucional y Administrativo. Centro de Estudios Adams. Ediciones Valbuena. 2005. Pág. 288

definen al acto administrativo, y cuando lo definen, tampoco suelen guardar uniformidad de criterio.

Debido a esta discrepancia en cuanto que no se maneja una sola definición para el acto administrativo, definiremos el acto administrativo de conformidad con diferentes autores:

Según **Marienhoff**: *Acto Administrativo es toda declaración, disposición o decisión de la autoridad estatal en el ejercicio de sus propias funciones administrativas, productoras de efectos jurídicos.*²⁴

En esta definición también son actos administrativos los contratos, reglamentos y actos de la administración (porque no diferencia en efectos jurídicos directos o indirectos).

Los va a diferenciar por las características de cada uno (ej.: el Acto Administrativo bilateral, es un contrato; el Acto Administrativo de alcance general, es un reglamento) y el sujeto que los emite es la autoridad u órgano estatal (los públicos no estatales, no).

Definición de **Cassagne**: *Acto Administrativo es toda declaración de un órgano del Estado, en ejercicio de la función administrativa caracterizada por un régimen jurídico exorbitante del derecho privado, que genere efectos jurídicos individuales directos con relación a terceros.*²⁵

Para este autor son actos administrativos también los contratos (ya que habla de efectos individuales directos) pero no lo son los reglamentos ni los dictámenes y el sujeto que los emite es la autoridad u órgano estatal (los públicos no estatales, no).

²⁴ Varios Autores. Derecho Administrativo. Libro guía de Estudio. Pág. 87. Argentina. Editorial Estudio.

²⁵ Varios Autores. Derecho Administrativo. Libro guía de Estudio. Pág. 88. Editorial Estudio.

Según **Gordillo**: Acto Administrativo es *la declaración unilateral, realizada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos directos e individuales.*

Para él, ni los contratos (por ser bilaterales) ni los dictámenes (por tener efectos indirectos) ni los reglamentos (por tener efectos generales) son actos administrativos y el sujeto emisor debe ser siempre una persona pública.

Bielsa: Acto Administrativo es *la decisión, general o especial, de una autoridad administrativa en ejercicio de sus propias funciones que se refiere a derechos, deberes o intereses de las entidades administrativas o de los particulares respecto de ellas.*

Definición de **Dromi**: Acto Administrativo es *la declaración unilateral efectuada en el ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma directa.*²⁶

*La ley 350, Ley de Regulación de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, define el acto administrativo como “la declaración o manifestación de voluntad, juicio o conocimiento expresada en forma verbal o escrita o por cualquier otro medio que, con carácter general o particular, emitieren los órganos de la Administración Pública y que produjere o pudiese producir efectos jurídicos”.*²⁷

Tomamos la definición de Roberto Dromi y en base a esta definición podemos explicar cada uno de los elementos del acto administrativo a mencionar:

²⁶ Dromi, Roberto. Tratado de Derecho Administrativo. Pág. 137. Buenos Aires, Argentina. 1998. 7ma Edición.

²⁷ Arto.2 nral 1). Ley 350. Aprobada el 18 de Mayo del 2000. Ley de Regulación de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Publicado en la Gaceta 140 y 141 del 25 y 26 de Julio del 200.

1.- Declaración. El Acto Administrativo es una declaración, entendiendo por tal un proceso de exteriorización intelectual no material que toma para su expresión y comprensión datos simbólicos del lenguaje hablado o escrito y signos convencionales. Se atiende principalmente a la *voluntad declarada*, al resultado jurídico *objetivo*, emanado de la Administración con fuerza vinculante por imperio de la ley.

El pronunciamiento declarativo de diverso contenido, puede ser: de *decisión*, cuando va dirigido a un fin, a un deseo o querer de la Administración; p.ej., una orden, permiso, autorización o sanción; de *cognición*, cuando certifica el conocimiento de un hecho de relevancia jurídica; p.ej., certificaciones de nacimiento, defunción e inscripciones en registros públicos, y de *opinión*, cuando valora y emite juicio sobre un estado, situación, acto o hecho; p.ej., certificados de buena conducta, salud o higiene.

2.- Unilateral. En el Acto Administrativo la emanación y contenido de toda declaración depende de la voluntad de un solo sujeto de derecho: el Estado o ente público no estatal, en su caso.

Se excluye del concepto de Acto Administrativo a los contratos, que tienen un régimen jurídico específico. La declaración tiene que ser unilateral. Desestimamos la idea de los actos administrativos bilaterales; de ahí que el contrato administrativo no sea un acto administrativo.

"El Acto Administrativo es una declaración jurídica unilateral y concreta de la Administración Pública, en ejercicio de un poder legal, tendiente a realizar o a producir actos jurídicos, creadores de situaciones jurídicas subjetivas, al par que aplicar el derecho al hecho controvertido"²⁸

²⁸ CNCIV, Sala D, 18/02/81, Ñ Bianchi, Carlos A. C/Municipalidad de la Capital", JA, 1982-I-356.

El acto es unilateral, aunque se necesite de la **"voluntad concurrente o coadyuvante"**. ***El hecho de que ciertos actos unilaterales necesiten de la solicitud, notificación, aceptación, asentimiento o adhesión del particular para producir sus efectos, no les quita su calidad de tales. Tampoco dejan de ser unilaterales por el hecho de que la voluntad administrativa se forme mediante la intervención de dos o más órganos administrativos, en cuyo caso se denominan "actos complejos".***

La voluntad del administrado no interviene en la preparación del acto; puede ser causa de su formación, por ejemplo, una petición, que sólo vale como requisito de eficacia del acto administrativo, pero sin que tal voluntad integre el acto. La voluntad del administrado no es elemento esencial del acto, ni presupuesto básico de él.

Lo mismo ocurre con el permiso de uso del dominio público u otorgamiento de un retiro jubilatorio voluntario. Son actos administrativos unilaterales en sus efectos y también en su formación, pues la voluntad del administrado no integra el acto. El hecho de que el particular solicite, provoque o acepte una declaración de voluntad administrativa, no significa que el administrado integre con su voluntad el acto.

Entre el Acto Administrativo cuya emanación requiere la solicitud, pedido o conformidad del interesado, y el acto, que no los requiere, hay una mera diferencia de forma, que en nada modifica el régimen jurídico aplicable.

Para algunos autores, los actos administrativos pueden ser unilaterales o bilaterales tanto en su *formación* (si concurren al acto las voluntades de uno o más sujetos de derecho) como en *sus efectos* (si acarrear derechos y deberes para una o más partes). En este aspecto, entendemos que el contrato administrativo es un acto bilateral en su formación y en sus efectos.

Para que haya bilateralidad contractual, debe ella ser simultánea en su formación y en sus consecuencias; de lo contrario el acto tendrá siempre algo de unilateral y será, por lo tanto, acto administrativo.

En este sentido, son actos administrativos:

- a) Los *unilaterales en su formación y en sus efectos*, p.ej., la sanción;
- b) Los *unilaterales en su formación, pero de efectos bilaterales*, p.ej., la jubilación.
- c) los *bilaterales en su formación y unilaterales en sus efectos*, p.ej., la solicitud o aceptación.

1. Ejercicio de la función administrativa

La función administrativa constituye la nota calificadora del Derecho Administrativo. Por ello no puede estar ausente del concepto del acto administrativo, que es una de las formas jurídicas por las que se expresa la voluntad estatal y pública no estatal.

El Acto Administrativo es dictado en ejercicio de la función administrativa, sin importar qué órgano la ejerce. El acto puede emanar de cualquier órgano estatal que actúe en ejercicio de la función administrativa (ejecutivo, legislativo y judicial), e incluso de entes públicos no estatales.

2. Produce efectos jurídicos

No toda la actividad administrativa produce efectos jurídicos. Por ello, algunos autores clasifican el ejercicio de la actividad administrativa en actos y hechos no jurídicos, en contraposición a actos y hechos jurídicos.

La actividad administrativa productora de efectos jurídicos no sólo se manifiesta a través de los actos administrativos, sino también por medio de los hechos

administrativos, contratos administrativos, simples actos de la administración y reglamentos administrativos.

En el caso específico del acto administrativo, interesa determinar el alcance y tipo de efecto jurídico que produce, para lo cual previamente tenemos que enumerar y definir el *contenido*.

Directos o indirectos Los efectos jurídicos del acto administrativo son directos; *surgen de él*, no están subordinados a la emanación de un acto posterior. El acto debe producir por sí efectos jurídicos respecto del administrado; por ello los dictámenes, pericias, informes, pareceres, proyectos, etc., no constituyen actos administrativos, sino meros actos preparatorios que se emiten para hacer posible el acto principal posterior; tienen en su caso un efecto jurídico indirecto o mediato.

Cuando los efectos jurídicos se agotan dentro de la propia Administración, se trata de simples actos de administración, que no proyectan *sus efectos jurídicos hacia el exterior*.

Los dictámenes carecen de ese efecto jurídico inmediato, contienen informes y opiniones técnico-jurídicas preparatorias de la voluntad administrativa. Son declaraciones de juicio u opinión que forman parte del procedimiento administrativo en marcha, del procedimiento de conformación de la voluntad estatal. Pero no son actos administrativos por carecer de la señalada *inmediatez*. No extinguen o modifican una relación de derecho con efecto respecto de terceros.

Individuales o generales Característica fundamental del acto es que produce efectos jurídicos subjetivos, concretos, de alcance sólo individual, a diferencia del reglamento, que produce efectos jurídicos generales.

Actuales o potenciales Los efectos jurídicos deben ser *actuales*, aunque sean futuros.

No se trata de una actividad destinada a producir efectos como si éstos pudieran ser potenciales. Los efectos jurídicos no se aprecian exclusivamente con relación a la *voluntad del agente*, sino que pueden llegar a producirse con independencia de ella y tienen que estar contenidos y previstos en la propia emisión del acto.

Internos o externos Los efectos jurídicos pueden ser respecto de particulares, agentes, órganos o entes administrativos. Por lo tanto, los efectos jurídicos, según los casos, se producen fuera o dentro del ámbito de la Administración Pública.

Públicos o privados Los efectos jurídicos resultan primordialmente del derecho público. El derecho privado se aplica a algunos elementos del acto administrativo y sólo por excepción. Es improcedente la distinción entre actos estatales de derecho privado y de derecho público, entre actos civiles y actos administrativos de la Administración, emitidos en ejercicio de una potestad pública. El Derecho Privado es aplicable a la actuación de los órganos administrativos de modo limitado, ya que en todos los casos es invariable la aplicación del Derecho Público en cuanto a la competencia, voluntad y forma del acto; sólo el objeto, y en parte, es regulado por el Derecho Privado. La actividad administrativa es regulada por el derecho civil o comercial por excepción.

El acto no deja de ser administrativo porque sus efectos excepcionalmente puedan estar comprendidos dentro del marco del derecho privado.

Provisionales o definitivos La provisionalidad del efecto jurídico atañe al tiempo, es decir desde cuándo y hasta cuándo. La definitividad del efecto jurídico incumbe al negocio jurídico de fondo, al objeto, al qué del acto; por eso se dice que el acto administrativo definitivo alude al fondo de la cuestión planteada,

diferenciándose del acto interlocutorio o de mero trámite que, como su nombre lo indica, concierne al desenvolvimiento del trámite, posibilitándolo u obstaculizándolo.

No se puede establecer la comparación del acto definitivo y del provisional, pues ambos contemplan dos situaciones distintas. El acto definitivo decide, resuelve o concluye con la cuestión. El acto provisorio, si bien puede encerrar una decisión o una resolución en sí mismo, respecto del particular administrado no concluye con la cuestión de fondo, sino que permite o no encaminarse hacia la misma.

Los actos definitivos y los actos interlocutorios, provisionales o de mero trámite, son siempre impugnables en sede administrativa, mientras que sólo son impugnables en sede judicial los actos definitivos.

Futuros o retroactivos Los efectos jurídicos del acto son por lo común para el futuro, pero pueden ser retroactivos, siempre que no lesionen derechos adquiridos, cuando se los emita en sustitución de otro revocado o cuando favorecieren al administrado

Lícitos o ilícitos Los Actos Administrativos ilícitos no pierden su cualidad de tales. Los vicios jurídicos tornan al acto ilegítimo, inválido, antijurídico, pero no por ello dejan de producir efectos jurídicos ni lo privan de su condición.

Puede tener un vicio impugnable administrativa y judicialmente que engendre responsabilidad extracontractual del Estado por la producción de efectos antijurídicos, sin dejar de ser acto administrativo por esa circunstancia.

Definitivos o finales El Acto Administrativo definitivo o decisión definitiva es el que resuelve sobre el fondo de la cuestión planteada y el que, siendo de trámite, impide totalmente la continuación del reclamo interpuesto. Este último es

asimilado a la decisión de fondo y se le confiere *definitividad* procesal, en tutela de la instancia judicial a la que tienen derecho los administrados.

La existencia del acto administrativo depende del cumplimiento de ciertos *elementos esenciales: competencia, objeto, voluntad y forma*, los cuales deben concurrir simultáneamente de acuerdo con el modo requerido por el ordenamiento jurídico.

Competencia:

La competencia es la esfera de atribuciones de los entes y órganos, determinada por el derecho objetivo o el ordenamiento jurídico positivo. Es decir, el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente. En otros términos, la competencia de los órganos administrativos es el conjunto de atribuciones que, en forma expresa o razonablemente implícita, confieren la Constitución, los tratados, las leyes y los reglamentos. La competencia es irrenunciable e improrrogable. Debe ser ejercida directa y exclusivamente por el órgano que la tiene atribuida como propia, salvo los casos de delegación, sustitución o avocación previstos por las disposiciones normativas pertinentes.

La observancia de la competencia es indispensable para la actuación válida del órgano. La competencia condiciona la validez del acto, pero no su condición propia de acto estatal o no estatal; es decir, puede haber actos estatales cumplidos con incompetencia.

La competencia del acto administrativo reúne los siguientes principios:

- a) Expresa.** Porque debe emanar de la Constitución, tratados, leyes y reglamentos.

b) Improrrogable o indelegable. Porque hallase establecida en interés público y surge de una norma estatal, no de la voluntad de los administrados, ni del órgano-institución, ni del órgano-individuo. El órgano-institución no puede disponer de ella, sino que debe limitarse a su ejercicio, en los términos que la norma respectiva establezca.

c) Irrenunciable. Es decir indeclinable.

Objeto:

El objeto del Acto Administrativo es la materia o contenido sobre el cual se decide, certifica, valora u opina. El objeto tiene que ser cierto, claro, preciso y posible física y jurídicamente. El acto debe decidir, certificar o registrar todas las cuestiones propuestas en el curso del procedimiento.

El objeto comprende: las materias que necesariamente forman parte del acto y sirven para individualizarlo (contenido natural); las cuestiones mandadas a contener por imperio de la ley (contenido implícito), y las cláusulas que la voluntad estatal pueda introducir adicionalmente en forma de condición, término y modo (contenido eventual).

Por su parte, en cuanto a sus requisitos, el objeto tiene que ser lícito, cierto, posible y determinado. El objeto no debe ser prohibido por el orden normativo. La ilegitimidad del objeto puede resultar de la violación a la Constitución, ley, reglamento, circular, contrato, acto administrativo anterior estable, e inclusive a la moral y las buenas costumbres

El objeto debe ser cierto, preciso, determinado y posible. El acto debe ser determinado o determinable. Es decir, que se pueda *precisar* la disposición adoptada por la autoridad administrativa. Es necesario saber de qué especie de

acto se trata, a qué personas o cosas afecta, en qué tiempo y lugar habrán de producirse los efectos queridos.

Voluntad:

Concurren en la voluntad administrativa elementos *subjetivos* (intelectivos de los órganos-individuos) y *objetivos* (normativos procesales). Así, la voluntad del acto administrativo está compuesta por la voluntad subjetiva del funcionario y la voluntad objetiva del legislador. Por ello, los "vicios de la voluntad" pueden aparecer tanto en la misma declaración (formalmente), en el proceso de producción de dicha declaración (objetivamente), como en la voluntad intelectual (subjetivamente) del funcionario que produjo la declaración.

Forma:

Por forma se entiende el modo como se instrumenta y se da a conocer la voluntad administrativa. Es decir, el modo de exteriorización de la voluntad administrativa.

La omisión o incumplimiento parcial de las *formas de instrumentación* (escritura, fecha, firma, etc.) o de las *formas de publicidad* (notificación), puede afectar en distintos grados la validez del acto, según la importancia de la transgresión. Los actos administrativos deben ser notificados al interesado. La publicación no suple la falta de notificación. La falta de publicación no vicia al acto.

Las manifestaciones exteriores tendientes a hacer conocer el objeto del acto administrativo, sea éste definitivo o preparatorio, pueden instrumentarse de distinta manera. Es decir, que las formas de instrumentación del acto administrativo pueden ser escritas, orales o simbólicas. En el acto tácito no hay instrumentación sino sólo ficción legal.

Si bien no existen formas especiales genéricas para los actos administrativos salvo los casos en que están previstas legalmente parece indiscutible, como principio general, que deben constar por escrito. Esta regla admite unas pocas excepciones que han de interpretarse restrictivamente.

a) **Escrito.** El acto administrativo se *manifestará expresamente* y por *escrito* y contendrá:

- 1) lugar y fecha de emisión.
- 2) mención del órgano y entidad de quien emana.
- 3) expresión clara y precisa del contenido de la voluntad administrativa, y 4) individualización y firma del agente interviniente.

En los órganos colegiados se labrará un acta de cada sesión, que deberá contener:

- 1) Tiempo y lugar de sesión.
- 2) Indicación de las personas que hayan intervenido.
- 3) Determinación de los puntos principales de la deliberación.
- 4) forma y resultado de la votación. El acta y los acuerdos se documentarán por separado, debiendo ser firmados por todos los miembros intervinientes.

Cuando hayan de emitirse una serie de actos administrativos (actos plurales) de la misma naturaleza, podrán redactarse en un único documento, especificándose las circunstancias personales y materiales que individualicen cada uno de los actos.

b) **Oral.** Puede admitirse en algunos casos que el acto no se documente por escrito, sino que se lo exprese verbalmente. Por ejemplo, órdenes de agentes de policía, órdenes comunes de los superiores a los funcionarios públicos relativas al desempeño diario de sus tareas, etcétera.

Motivación:

La motivación es la declaración de las circunstancias de hecho y de derecho que han inducido a la emisión del acto. Está contenida dentro de lo que usualmente se denominan "considerandos". La constituyen, por tanto, los "presupuestos" o "razones" del acto. Es la fundamentación fáctica y jurídica de él, con que la Administración sostiene la legitimidad y oportunidad de su decisión.

La motivación del acto, es decir, las razones de hecho y de derecho que dan origen a su emisión, aclaran y facilitan la recta interpretación de su sentido y alcance, por constituir un elemento esencial del mismo

Notificación:

Son formas de publicidad la *publicación* y la *notificación*. La publicación es aplicable a los reglamentos, mientras que la notificación lo es a los actos administrativos.

El acto que no ha sido notificado no produce efectos jurídicos inmediatos. No es acto administrativo en el concepto que hemos señalado. Por lo tanto la *notificación es elemento del acto*, forma parte de él.

El Acto Administrativo carece de eficacia mientras no sea notificado al interesado. La comunicación del acto afecta a la vinculación o sujeción del administrado. La notificación no debe ser imprecisa ni ambigua.

Los *caracteres jurídicos* esenciales del acto administrativo regular son:

Legitimidad. Es la presunción de validez del acto administrativo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente.

Ejecutividad. Es la obligatoriedad, derecho a la exigibilidad y deber de cumplimiento que el acto importa a partir de su notificación.

Ejecutoriedad. Es la atribución que el ordenamiento jurídico, en forma expresa o razonablemente implícita, reconoce a la autoridad con funciones administrativas para obtener el cumplimiento del acto. La *ejecución administrativa* no podrá ser anterior a la notificación del acto. Cuando el acto sea ejecutivo, pero no ejecutorio, se deberá solicitar judicialmente su ejecución coactiva.

Estabilidad. Es la prohibición de revocación en sede administrativa de los actos que crean, reconocen o declaran un derecho subjetivo, una vez que han sido notificados al interesado.

Impugnabilidad. Todo acto administrativo, aun cuando sea regular, es *impugnable* administrativamente por vía de recursos o reclamaciones.

CAPÍTULO II

DERECHO ADUANERO

VIII.- GENERALIDADES DEL DERECHO ADUANERO

I. HISTORIA DEL DERECHO ADUANERO

En términos generales el estudio del Derecho Aduanero; entendido éste como el conjunto de regulaciones concernientes al ingreso o salida de mercancías respecto de un determinado territorio

En el desarrollo y evolución histórica del Derecho en las distintas civilizaciones y naciones la presencia de la "Aduana". Organizada como una institución encargada de controlar la entrada y salida de las mercaderías de determinados territorios, con el fin de impedir esa entrada o salida o de aplicarles tributos relativos a esos hechos de entrar y salir.²⁹

Destacamos como elementos históricos de dicha evolución, los siguientes:

1. Existencia de prohibiciones a la importación y a la exportación de mercaderías
De manera general cada nación ha procurado impedir las salidas de su territorio de los bienes que se consideran necesarios para la supervivencia, particularmente los destinados a su alimentación como cereales, ganado y por otro lado, así como los que están destinados a su seguridad como las armas.

En las civilizaciones más antiguas, la existencia de numerosas prohibiciones a la exportación condujo a la necesidad de contar con una organización de vigilancia para verificar las mercaderías que pretendían salir del territorio e impedir la salida de aquellas prohibidas. Con el objetivo de proteger la agricultura domestica.

²⁹ Ricardo Xavier Basaldua, Introducción al Derecho Aduanero, Argentina. Pág. 24

2. Existencia de tributos que gravaban la introducción y la salida de mercaderías del territorio.

Desde tiempos antiguos, los pueblos cobraron tributos con motivos de la entrada o salida de mercaderías del ámbito que constituía su territorio. Originariamente ello se debió tanto a la necesidad de un acatamiento o reconocimiento a la autoridad establecida o a la soberanía en definitiva, al poder ejercido sobre ese territorio como a la necesidad de contar con recursos para sus economías.

Con el surgimiento del Estado moderno el establecimiento de tributos aduaneros constituyó un instrumento eficaz. Pero cualquiera fuera la finalidad con el establecimiento de tributos aduaneros, tal imposición hacia contra con una organización idónea que controlara las mercaderías que introducían o salían del territorio y exigiera el pago de los mencionados tributos.

3. Existencia de una organización especializada: La Aduana.

Con el propósito de asegurar la observancia de las prohibiciones a la exportación y a la importación, y de hacer efectiva la percepción de los tributos que gravaban la entrada y la salida de mercaderías del territorio, se recurrió a una organización compleja integrada con numerosas personas que conformaron un servicio aduanero, administrativo o privado.

Esta fue organizándose, desarrollándose y perfeccionándose según las exigencias que le imponía el cabal cumplimiento de las funciones encomendadas. Así se configuró la institución "Aduana".

Etimológicamente la palabra Aduana, designa en sus orígenes a registro o libro de cuentas donde se anota el ingreso y la salida de las mercaderías de determinados territorios o jurisdicciones. Poniendo de manifiesto esta función

de registrar, verificar o controlar lo que entra y lo que sale, que precisamente caracteriza las funciones esenciales de la "aduana" cómo oficina, local o establecimiento, es decir como "institución".

4. Existencia de ámbitos económicos delimitados llamados: Territorios aduaneros.

La aplicación de prohibiciones a la importación y a la exportación de mercaderías así como el cobro de tributos que gravan la entrada y salida de la mercadería nos ha puesto de manifiesto la necesaria existencia de ámbitos espaciales con significado económica, que pueden o no coincidir con delimitaciones políticas, y que se consideran como territorios o circunscripciones aduaneras y que están delimitadas por las fronteras aduaneras.

Las líneas fronterizas son las que configuran el fenómeno de la importación o de la exportación de la mercadería entre los diferentes países.

5. Tipificación de un nuevo delito: el contrabando.

El incumplimiento de la obligación de presentar las mercadería ante las aduanas establecidas, de los caminos o rutas habilitados, el transporte clandestino de mercaderías a través de las fronteras, es decir, la violación a las aduanas, determina la tipificación de un nuevo delito denominado contrabando, que será incorporado en las legislaciones aduaneras de cada país.

Los actos ilícito aduanero, se hallan sujeto a penas severas, previéndose según los casos la pérdida por comiso o confiscación de la mercadería involucrada, el pago de multas, prisión, castigos corporales, suplicio e incluso la pena de muerte para el autor.

6. Diferenciación de los tributos aduaneros y los peajes.

Los tributos aduaneros, bajo las numerosas denominaciones que recibieron según las épocas y los lugares considerados, se caracterizan por gravar el paso de mercaderías a través de distintas jurisdicciones.

No siempre ha resultado fácil distinguirlos a través de sus manifestaciones históricas. Esta dificultad se origina en diversas circunstancias. Entre estas, se señala el hecho de que con frecuencia el órgano encargado de percibir los tributos aduaneros era el mismo que debía cobrar otros tributos de diversa naturaleza. Por otra parte, las designaciones que recibieron tampoco ayudaron a diferenciarlos.

En el imperio romano, donde bajo la expresión portoria se hacía tanto referencia a los Derechos de Aduana como a los peajes y arbitrios, o en la Francia medieval con la expresión omnicomprensiva de tonlieux.

La superioridad de una normativa conformada acumulativamente como la costumbre, la vigencia del absolutismo como sistema de gobierno, la inexistencia de la elaboración de un Derecho Constitucional, al menos Administrativo, el desconocimiento del principio de legalidad del impuesto, no favorecían en aquellos tiempos el conocimiento y la diferencia entre las diversas especies de tributos. Tampoco podía contribuir a ello el espíritu pragmático de los romanos o atomización del poder de imposición en la sociedad feudal.

La forma asistemática e imprecisa, con que se presenta la tributación en épocas pasadas, puede advertirse la existencia de tributos a los que les corresponde la calificación de aduaneros.

En efecto, sin perjuicio de reconocer la inexistencia de una teoría tributaria elaborada consiente y orgánicamente en ese entonces, se puede distinguir la existencia de verdaderos Derechos aduaneros.

El Derecho Aduanero constituye un impuesto que grava el hecho de la entrada (importación) o la salida (exportación) de una mercadería a una jurisdicción determinada (territorio aduanero). El quantum de ese Derecho aduanero toma en consideración el valor (derecho aduanero específico: peso, longitud, volumen, etc.).

El peaje es una tasa retributiva de un servicio, que consiste por lo general en la utilización de una obra o una construcción (camino, puente, etc.). No está referido entonces a la entrada o salida de una jurisdicción sino al aprovechamiento de esa obra o construcción. Su pago puede resultar procedente aunque no se transporte mercadería alguna, por el solo paso de una persona o del medio de transporte en lastre. Además, en su caso, el valor o la naturaleza de la mercadería transportada resulta por general irrelevante para la fijación del importe de la tasa a pagar.

El importe del peaje es proporcional con el servicio prestado en forma individualizada. En cambio, el importe del Derecho Aduanero es fijado libremente de acuerdo con la política económica que siga.

El pago del impuesto a la importación, autoriza a introducir la mercadería a un territorio y el pago del impuesto, a la exportación, autoriza la salida de la mercadería de un territorio.

El pago del peaje autoriza a la persona o al medio de transporte a utilizar la obra o la construcción.

7. Evolución conceptual relativa a los Derechos Aduaneros. Los Derechos de tránsito. Distinción actual.

Hoy en día, puede señalarse una tendencia generalizada tanto en la doctrina como en la legislación que implica restringir el concepto de los "Derechos Aduaneros" y que lleva a diferenciarlos de los denominados "Derechos de Tránsito".

Los tributos percibidos por la aduana gravaron ya sea el simple cruce de la mercadería por la frontera o ya sea la entrada de la mercadería a un territorio determinado con la posibilidad de permanecer en el mismo, lo que permite disponer económicamente de ella en ese espacio.

Cuando hablamos del Derecho Aduanero estamos en el ámbito de los derechos que actualmente denominamos de tránsito. Los derechos de tránsito, tal como lo indica la propia denominación, gravan el mero hecho de tránsito y no se interesan por la finalidad o el carácter de la introducción o de la extracción.

Derecho de Tránsito: El Derecho aduanero concebido como un tributo que no grava la mera circulación sino la introducción o la salida de un territorio aduanero con la posibilidad de emplear económicamente y sin límite de tiempo la mercadería dentro del ámbito respectivo.

Así, el Derecho de importación grava la introducción a la plaza de la mercadería que puede incorporarse definitiva y libremente a la circulación económica interna. Es decir, para que proceda el cobro de los derechos aduaneros resulta relevante e que la mercadería objeto de desplazamiento a través de las fronteras aduaneras este destinada a ser utilizada o consumida en sentido económico en el territorio aduanero de que se trate sin límite de tiempo.

Esta especie de importación es denominada "importación para consumo" y se diferencia de otras importaciones realizadas al amparo de regímenes denominados suspensivos, como la importación temporaria, el tránsito y el almacenamiento

Conformación de un Derecho Aduanero

Se ha dado una evolución en el Derecho Aduanero, y con ello una evolución legislativa con el propósito de asegurar mediante un conjunto de normas, la mayor eficacia de la aduana en el cumplimiento de las funciones asignadas.

En Francia bajo el reinado de Luis XIV se dicta la ordenanza de febrero de 1687, que es considerada hoy en día como el primer código aduanero de esa nación.

En los catorce títulos que integran esa ordenanza se desarrolla en forma sistemática la materia que ya en ese entonces se consideraba aduanera.

Aparece en esa regulación la diferencia entre los conceptos de territorio político y territorio aduanero y, en consecuencia, se le atribuye un significado jurídico preciso a los conceptos "importación" y "exportación". Se considera también la existencia de zonas francas. Todo ello hace el desarrollo de la teoría sobre el ámbito espacial de aplicación del Derecho Aduanero.

Se determina en la misma ordenanza las atribuciones del servicio aduanero (abrir bultos, revisar a los pasajeros, visitar a los buques, etc.) y, paralelamente, se establecen las obligaciones de los transportistas y de los pasajeros con respecto a la Aduana, entre las cuales se destaca la obligación de someterse al control de las aduanas (que se manifiesta en las obligaciones de seguir los caminos o las rutas indicadas para entrar y salir del territorio, con el deber de declarar las mercaderías y presentarlas a la verificación). Así mismo se establece la obligación de abonar los tributos aduaneros vigentes al contado con

anterioridad al desaduanamiento de las mercaderías. También se contempla la aplicación de las prohibiciones a la importación y a la exportación por parte del servicio aduanero.

Se establece una jurisdicción especial para los asuntos aduaneros, en la que intervienen jueces aduaneros con competencia específica en la materia.

La introducción o extracción fraudulenta y a veces hasta clandestina de mercadería configura un ilícito especial. También se tipifica como ilícito la declaración aduanera falsa de mercadería. Se prevén penas de comiso y multas.

Esto implica que el legislador, adoptando una cierta perspectiva, ha considerado pertinente regular todo lo relativo a la materia aduanera de modo orgánico y ha dictado por consiguiente un cuerpo armónico y sistemático de normas.

Las normas así sistematizadas de naturaleza diversa atendiendo a otros puntos de vista (administrativas, tributarias, penales, procesales, etc.), se estimó necesario o conveniente el dictado de un ordenamiento propio.

Es entonces en Francia, cuna del proceso de codificación del derecho presidido por el racionalismo, donde se ve por primera vez aparecer ese tratamiento de la materia aduanera, que como las demás obras de codificación allí realizadas va a ejercer una influencia notable en las legislaciones de las demás naciones. En efecto, la materia que en esa ordenanza francesa se consideró aduanera será reproducida básicamente en las legislaciones aduaneras posteriores, tanto de la propia Francia como de muchas otras naciones.

PROCESO DE INTEGRACIÓN EN CENTROAMERICANO

1. Antecedentes.

- El proceso de Integración Centroamericana, constituye un sistema histórico que va desde lo intergubernamental hasta lo comunitario que abarca lo

económico-comercial, lo social, lo político, lo ambiental y lo institucional; además se hace sobre la base de que la región constituya una comunidad de hecho y de derecho.

- En lo económico comercial comienza con el tratado general de integración económica de 1960, sobre el cual y, mediante un largo proceso se crea un mercado común que se consolida hacia 1969 cuando se llega a su fin en virtud de conflictos políticos regionales (Honduras-Salvador). Actualmente el tratado general que crea la secretaria general de integración (SIECA), como su órgano principal, se encuentra reformado por el vigente protocolo de Guatemala de fecha 24 de octubre de 1993, el cual es un tratado fundamental complementario y que esta en vigor en todos los estados parte, a excepción de Panamá. Con el único objetivo es lograr un mercado único en la región.
- En lo social este efecto contemplado en el Tratado General de Integración como un objetivo del mismo al lograrse a través del efectivo funcionamiento de un mercado único, libre, competitivo, que desarrolla efectivamente las economías de los Estados, de tal modo que se satisficiera las exigencias humanas y laborales de los ciudadanos.

Actualmente esta importante área de la integración se encuentra regulada por el Tratado Fundamental Complementario, denominado de Integración Social o Tratado de San Salvador, de fecha 30 de marzo de 1995, en vigor en todos los Estados parte.

- En lo Política esta contenida en el Tratado de la ODECA de 1951, la primera piedra del proceso de integración institucional, sin olvidarnos de que antes existieron Constituciones Federales y Tratados de Unión que no lograron consolidarse, porque considerarse siempre la unión "de arriba hacia abajo" y por la vía política, cuando no por la vía militar, como en algunas ocasiones.

Fue suscrita en San Salvador, por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. En ella se reconoce la comunidad Jurídica de Estados Centroamericanos y entre sus fines está la creación de un mercado común y políticamente que se funda en los principios que rigen la ONU y la OEA, pero no menciona específicamente, por ejemplo, la democracia representativa y pluralista ni los Derechos Humanos.

- En lo institucional, contiene la creación de Órganos del Proceso cuyo distintivo radica en la intergubernamentalidad observando un simple marco de cooperación eventual así se establece en la reunión de presidente, reunión de ministro de relaciones exteriores, reunión de ministro de otras áreas, el consejo económico. En las que se establece la unanimidad como principio de resolución y se crea la secretaria General del Sistema.
- Los acuerdos de Esquipulas de 1986 y 1987 establecen las bases de un esfuerzo común de los estados a fin de unir nuevamente sus voluntades en pro de la integración, mediante la consecución de la paz, el restablecimiento, la democracia, el pluralismo, el respeto a los Derechos Humanos y la creación de sociedades libres de miseria. Establecen la reunión de presidente y el parlamento centroamericano y dieron pie a las reformas constitucionales las que facilitan la supranacionalidad con el objetivo de lograr la unión de las repúblicas que formaron la antigua federación centroamericana en 1824.

II. CARÁCTERÍSTICAS DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN

El protocolo de Tegucigalpa a la carta de la ODECA del 13 de enero de 1991, que tiene como base los acuerdos de Esquipula define un esquema institucional e ideológico del sistema de integración.

El protocolo se caracteriza por sus rasgos constitucionales para la región en tanto que crea órganos con características verdaderamente supranacionales (la Corte Centroamericana de Justicia) y crea órganos mixtos que funcionan intergubernamentalmente (Consejos de Ministro), que son fuente de derecho comunitario ya que crean normas obligatorias que se ubican por encima del derecho nacional de cada uno de los estados parte.

El protocolo de Tegucigalpa es un tratado comunitario definido en el artículo 35 del mismo ***“Este protocolo y sus instrumentos complementarios y derivados prevalecerán sobre cualquier Convenio, Acuerdo o Protocolo suscrito entre los Estados Miembros, bilateral o multilateralmente, sobre las materias relacionadas con la integración centroamericana. No obstante, quedan vigentes entre dichos Estados las disposiciones de aquellos Convenios, Acuerdos o Tratados siempre que las mismas no se opongan al presente instrumento u obstaculicen el logro de sus propósitos y objetivos.***

Toda controversia sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones contenidas en el presente Protocolo y demás instrumentos a que se refiere el párrafo anterior, deberá someterse a la Corte Centroamericana de Justicia.”

Con claridad se puede apreciar que se establece la superioridad de este convenio y de sus instrumentos complementarios y derivados sobre cualquier otro convenio sea anterior, o posterior al mismo, constituyéndose así el sistema comunitario de integración basado en la legítima delegación de la soberanía de los estados a favor de las instituciones que crea y en su correspondiente medida; las que, a su vez, en el ejercicio de sus atribuciones y competencia, van construyendo el andamiaje normativo supranacional.

Particularidades del Proceso de Integración Centroamericana

- Básicamente es un orden político, económico-comercial y social.

- Es un proceso eminentemente evolutivo y progresivo,
- funciona dentro de un marco legítimamente normativo que constituye un sistema institucional jerárquico y mixto (vertical y horizontal).

¿Qué se comprende por norma comunitaria?

Son las disposiciones legales emitidas legítimamente por las instituciones del sistema de integración en sus diferentes grados y niveles. Que conforman el ordenamiento jurídico comunitario.

III. EL DERECHO ADUANERO EN CENTROAMERICA

La importancia de las aduanas es esencial en lo referido a la importación de mercancías, porque en ellos ocurren procedimientos aduaneros complejos, los cuales involucran la clasificación y valoración de las mercancías importadas, el establecimiento de los impuestos por pagar en aduanas y el pago de esos impuestos. Mediante esos procedimientos, los gobiernos hacen efectivas las funciones aduanera que están internacionalmente aceptadas y reconocidas, a las cuales no referiremos con detalle

La OMA estableció los principales ámbitos en los procesos de modernización aduanera, entre los que señalamos:

- Reformas legales
- Incorporación de tecnología de información
- Introducción de nuevos esquemas organizacionales
- Administración de Recursos Humanos
- Integración de las funciones aduaneras con las de tributación
- Los cambios en los procedimientos

Señalaremos los cambios más importantes que corresponden a cada uno de esos aspectos.

REFORMAS LEGALES

En la mayoría de los países, los cambios más importantes para la modernización aduanera, se dieron en el ámbito de las reformas legales con el propósito de sustituir normas obsoletas que coadyuvaran a la modernización.

Así pues los cambios que se produjeron en Centroamérica desde el punto de vista legal se destacan:

- La definición de responsabilidades legales de los diversos actores que participan en el proceso aduanero y de las sanciones de los actos ilegales que han permitido definir el modelo aduanero en Centroamérica.
- La adopción del establecimiento de autodeterminación de tributos, es decir, el procedimiento mediante el cual los dueños de las mercancías declaran ante la aduana cuáles son las características de las mercancías que ingresan al país y cuál es el tributo que corresponde pagar por ellas
- El otorgamiento de potestades a las administraciones aduaneras para aplicar controles a posteriori, es decir, controles sobre la correspondencia entre la naturaleza de la mercancías que ingresan y las características de esas mercancías que son declaradas por sus dueños, con posterioridad a su paso por las aduanas.

LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

En segundo lugar encontramos el ámbito de la administración de tecnología de información. Para la mayoría de los procesos de modernización fue esencial la introducción de nueva tecnología informática. Las aplicaciones de esas tecnologías se pueden clasificar en las siguientes categorías:

- El manejo de grandes cantidades de información.

- El uso de modelos informatizados de análisis de tendencias y riesgos.
- La automatización de los principales procedimientos.
- La eliminación del papel como medio de transmisión de información de realización de trámites.
- La transmisión electrónica de datos.

De aquí la cita de un Ex Director general de Aduanas de España, se expresa con claridad la importancia para los países y las regiones que ese especialista le confiere a la informatización de las aduanas:

“Si la necesidad de una información adecuada es manifestada en una organización aduanera nacional por la proliferación de oficinas de despacho por fronteras terrestres, aéreas y marítimas, y la expansión de recintos aduaneros en el interior del territorio y en las propias factorías de los interesados, piénsese cuan mayor es en una unión aduanera”.³⁰

CAMBIOS EN LOS ESQUEMAS ORGANIZACIONALES

Integración de las funciones Aduaneras con las de recaudación de Impuestos Internos. Con el propósito de fortalecer la capacidad de las aduanas como recaudadoras de impuestos, y de aprovechar la información que obtienen para cobrar mejor ciertos impuestos distintos de los aduaneros.

La transición desde un esquema de control de mercancías basado en su revisión superficial durante el paso de estas por aduanas, hacia un esquema de control basado en la revisión selectiva y profunda con posterioridad a la salida de las mercancías de las aduanas.

³⁰ Barahona Juan Carlos y Monge Guevara Guillermo. Logística Comercial y Modernización Aduanera en Centroamérica. Pág. 27. Editorial EUNED. 1era Edición. San José, Costa Rica. 2006.

La transición desde un esquema de clasificación y declaración de impuestos de las mercancías por parte de los funcionarios aduaneros, hacia un esquema de clasificación y declaración de impuestos por parte de los dueños de las mercancías.³¹

NUEVOS ESTILOS DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

La mayoría de las administraciones aduaneras se han visto en la necesidad de cambiar los perfiles profesionales de sus funciones, como resultado de los fuertes cambios organizacionales que han experimentado y de la incorporación intensa de tecnologías informáticas.³²

Aduanas como la Chilena han experimentado un fuerte cambio en este sentido, y han aumentado sustancialmente el porcentaje de personal profesional. Esta tendencia ha favorecido una mejora de la imagen pública de esas organizaciones, al pasarse de una situación en la que el puesto de funcionario aduanero se ha vuelto prestigioso ante el resto de la sociedad.

INTEGRACION DE LAS FUNCIONES ADUANERAS

Esta integración ha sido producto de la necesidad de fortalecer la capacidad de las aduanas como recaudadoras de impuestos, y de aprovechar la información que obtienen las aduanas para cobrar mejor ciertos impuestos, y de aprovechar la información que obtiene las aduanas para cobrar mejor ciertos

³¹ Barahona Juan Carlos y Monge Guevara Guillermo. Logística Comercial y Modernización Aduanera en Centroamérica. Pág. 29. Editorial EUNED. 1era Edición. San José, Costa Rica. 2006.

³² Barahona Juan Carlos y Monge Guevara Guillermo. Logística Comercial y Modernización Aduanera en Centroamérica. Pág. 30. Editorial EUNED. 1era Edición. San José, Costa Rica. 2006.

impuestos distintos de los aduaneros, además, la vinculación es facilitada por las opciones que ofrece la tecnología de la información para interconectar organizaciones y procesos que hasta hace poco no solo estaban separados, sino que era difícil interconectarlos.

CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS

La Organización Mundial de Aduanas realizó un estudio donde se mencionan con más frecuencia aquellos cambios en procedimientos dirigidos a facilitar un flujo más rápido de mercancías por las aduanas. Sin obviar las funciones de control y recaudación, se busca reducir las obstrucciones innecesarias que pueda provocar la actividad aduanera en el flujo comercial internacional. De esa forma, se aspira a disminuir los costos asociados con los procesos de exportación e importación de mercancías.

Así vemos por ejemplo el servicio de aduanas del Reino Unido que implantó, a partir de 1996, un método de autoevaluación y mejoramiento de la calidad de sus servicios que llamo ***"Benchmarking híbrido"***. Este tipo de benchmarking se define como: ***"Una técnica de eficiencia que permite comparar el desempeño departamental de determinadas áreas con el de áreas similares, tanto en el sector público como en el sector privado, usando la metodología y estructura de pruebas de mercado"***³³

Esta técnica permite utilizar un enfoque estructurado de comparación en pro de mejorar la eficiencia y mejorar la eficiencia y calidad de los productos o servicios que se brindan. Algunas de sus características son las siguientes:

- Es un método que compra precios y calidad mediante la identificación de las mejoras prácticas del mercado.

³³ OMA. *Survey of customs reform and modernization trends and best practices*. <http://www.wcoomd.org> Bruselas, 2000.

- Logra un fuerte involucramiento con el sector privado con ayuda de consultores.
- Logra una alta participación de los empleados del servicio aduanero.

PLAN ESTRATÉGICO DE LA OMA1999-2000

FUNCIÓN	ACTIVIDADES PRINCIPALES
Desarrollar y promover los instrumentos Internacionales aduaneros y de comercio	<ul style="list-style-type: none"> • Implantar el Acuerdo de Reglas de origen de la OMC • Actualizar, promover y uniformar la aplicación del sistema armonizado. • Implantar el acuerdo de Valoración de la OMC
Guiar y asistir a sus miembros en las áreas De procedimiento y facilitación	<ul style="list-style-type: none"> • Aceptar, implementar y mantener la versión revisada del Convenio de Kioto • Examinar todo lo referente a procedimientos
Guiar y asistir a los miembros en el Cumplimiento del control	<ul style="list-style-type: none"> • Implantar un programa de fortalecimiento de control en las áreas de fraude comercial, contrabando e inteligencia.
Posicionar internacionalmente a la OMA Como líder técnico y autoridad en materia aduanera	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajar en conjunto con organizaciones Internacionales

+ FUENTE: OMA WORD CUSTOMS ORGANIZATION.STRATEGIC PLAN 1999-200
<http://www.wcoomd.org>. Bruselas, 2000

IV. LA CONVENCIÓN DE KIOTO:

La Convención Internacional de la OMA sobre Simplificación y Armonización de Procedimientos de Aduanas entró en vigor en 1974. Esa Convención es la que guía para el desarrollo de los procedimientos aduaneros

La Convención recomienda los siguientes principios rectores de una organización aduanera moderna:

- Procedimientos estandarizados y simplificados
- Mejora y desarrollo continuo de las técnicas de control aduanero
- Uso intenso de las tecnologías de información
- Un enfoque de alianzas estratégicas entre las aduanas y las empresas que participan en el comercio internacional

V. SISTEMA ARMONIZADO

Formalmente se ha avanzado en armonizar a nivel centroamericano los aranceles aplicados por cada país frente a terceros, de manera que se cuenta con aranceles comunes para la mayor parte de productos. En el año 2002 solamente había 472 rubros arancelarios no armonizados, con más del 85% en total de rubros arancelarios existentes habiendo sido armonizados. De éstos el 31% correspondía a productos agrícolas, el 12% a metales y otro 12% a productos derivados del petróleo, 8% a medicamentos y el resto incluía productos misceláneos.

Es la existencia de tratados bilaterales de comercio, así como los compromisos arancelarios asumidos por cada país como parte de su ingreso al GATT/OMC ha dado lugar a tasas arancelarias diferentes en relación a ciertos socios comerciales específicos. En particular, la suscripción de tratados de libre comercio bilaterales, iniciados con el acuerdo suscrito por Costa Rica y México en 1995 han dado lugar a otros compromisos en materia arancelaria, erosionando la dimensión común de la protección arancelaria que originalmente aseguraba el AEC.

TRATADOS BILATERALES

ACUERDOS	VIGENCIA
Mercado Común Centroamericano: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua Costa Rica	1960 1963
Tratado de Libre Comercio México/Costa Rica	1995
Tratado de Libre Comercio México/Nicaragua	1998
Tratado de Libre Comercio México, Guatemala, El Salvador y Honduras	2001
Tratado de Libre Comercio Panamá/ El Salvador	2002
Tratado de Libre Comercio Panamá/Honduras	2002
Tratado de Libre Comercio República Dominicana/Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua Costa Rica	2001 2002
Tratado de Libre Comercio Chile /El Salvador	2002
Tratado de Libre comercio Chile /Costa Rica	2002
Tratado de Libre Comercio Canadá/Costa Rica	2002

†Fuente: Informe Centroamérica SIECA 2004

El Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías, referido usualmente como el “sistema armonizado”, es un sistema internacional de nomenclatura de productos desarrollado por la OMA. Abarca cerca de cinco mil grupos de mercancías.

Reglas de origen

En el Comercio Internacional, el origen de una mercancía importada no es un asunto obvio. No basta con que la mercancía proceda del último país que la

exportó, Es necesario, además, que esa mercancía sea el resultado de cierto proceso de transformación productiva, a partir de materias primas preexistentes.

En los acuerdos comerciales entre países, se incluyen reglas de origen específicas mediante las cuales se define cuáles mercancías están cubiertas por los beneficios arancelarios contemplados en el tratado. En esos casos, se habla de reglas de origen preferenciales.

En otros caso las mercancías importadas pueden verse afectadas por subsidios, salvaguardas o normas contra competencia desleal, dependiendo de su denominación de origen; para los cuales la OMC, trabaja en la elaboración de un conjunto comprensivo de normas y disposiciones administrativas de aplicación general por parte de los países de esa organización, para determinar el país de origen de los bienes importados.

En la Ronda de Uruguay de la OMC; los países participantes reconocieron la necesidad de que se de mayor transparencia en las regulaciones y prácticas relacionadas con reglas de origen, con el propósito de evitar obstáculos innecesarios en el comercio internacional. Surgió entonces, el programa de trabajo para armonizar las normas de origen no preferenciales, el cual continúa en labores.

Las reglas de origen armonizadas: Son aquellas que se espera implantar mediante esfuerzos cooperativos entre los países miembros de la OMC. Para ser aplicadas en instrumentos de política comercial no preferencial, tales como los relacionados con el trato a la "nación más favorecida", la competencia desleal, las medidas de salvaguarda y las marcas de origen. Se espera que cuando se terminen de elaborar, se incluyan en el Acuerdo sobre Reglas de Origen.

El acuerdo sobre valoración

El acuerdo de la OMC sobre Valoración Aduanera establece un sistema internacional de valoración de bienes importados con el propósito de aplicar impuestos ad valorem. El valor aduanero se basa en primera instancia en el valor de transacción del bien importado. En los caso que no se pueda establecer el valor de transacción, el acuerdo prevé otros criterios, tales como el valor de transacción de bienes idénticos o similares.

Con ese acuerdo se pretende ofrecer un método único que sea justo, uniforme y neutral para valorar bienes importados con fines aduaneros; evitando con ello el uso de valores aduaneros arbitrarios o ficticios, tratando de facilitar el comercio internacional mientras se respetan las leyes aduaneras de cada país

VI. CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO MODELO ADUANERO:

Facilitación: Las Aduanas deben cumplir sus funciones de control de mercancías y recaudación de impuestos, sin entorpecer el flujo comercial entre las naciones, y más bien, facilitándolo.

Control: Avanzar hacia métodos que permitan una función de control que sean más efectivos que los métodos tradicionales y no entorpezcan el intercambio comercial

Nuevos métodos de recaudación:

Información: Las aduanas modernas basan su funcionamiento en el uso y el intercambio de grandes volúmenes de información, los cuales continúan creciendo con el aumento del intercambio comercial.

VII. UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA

Desde la firma del Tratado general de Integración Económica en 1960 existe un compromiso de conformar una unión aduanera en Centroamérica por cuanto en el artículo I de dicho instrumento se lee: ***“constituir una unión aduanera entre sus territorios” sin embargo en los próximos años el esfuerzo de los países se dirigió al perfeccionamiento de la zona de libre comercio.***

Es hasta en 1993 que los países centroamericanos al suscribir el protocolo de Guatemala en el cual se readecuan las normas del tratado general con forme a las realidades y necesidades de los países, se establece nuevamente en el artículo 15, el compromiso de constituir una Unión Aduanera entre sus territorios en forma gradual y progresiva conforme a programas que deberían se aprobados por consenso.

El protocolo de Guatemala faculta a los estados contratantes para que dos o más estados avancen en el proceso de integración económica centroamericana, Guatemala y el Salvador decidieron avanzar en el proceso de unión Aduanera suscribiendo para tal efecto un convenio marco en el año 2000. mediante resolución del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMECO-2000)

Posteriormente se adhieren los gobiernos de Nicaragua y Honduras

Los presidentes de la región centroamericana en Marzo del 2002 aprueban un plan de acción con el objetivo de acelerar el proceso de unión aduanera y se procede a la conformación de los diferentes grupos de trabajo.

El 20 de junio el 2002 durante la XXI reunión ordinaria de jefes de estado y gobierno, los presidentes Centroamericanos, Costa Rica se incorpora plenamente al proceso de Unión Aduanera.

En el año 2004 los Presidentes Centroamericanos impulsan decididamente la conformación de la Unión Aduanera Centroamericana con la aprobación del marco general para la negociación de la Unión Aduanera en Centroamérica con el interés que sirviera de base en las negociaciones.

El 12 de diciembre de 2007, los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, suscribieron el Convenio Marco para el establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana, siendo este de gran trascendencia para guiar los esfuerzos que deben de ser realizados por los países de la región para profundizar la integración económica del mismo

El mismo, dispone el establecimiento de la Unión Aduanera de forma gradual y progresiva, mediante 3 etapas: a) Promoción de la libre circulación de bienes y facilitación de comercio. b) Modernización y convergencia normativa, c) Desarrollo institucional.

VIII. ADMINISTRACION ADUANERA COMUN

Mediante las resoluciones 223-2008 y 224-2008 el consejo de ministros de integración económica aprobó las reformas al CAUCA y su reglamento.

El reglamento sobre régimen de transito aduanero internacional fue aprobado por el comité aduanero y se creó el El manual único de procedimiento aduanero aprobado en el año 2004

IX. ARMONIZACIÓN ARANCELARIA:

En marzo del 2006 en reunión extraordinaria de los presidentes centroamericanos acuerdan iniciar la armonización arancelaria a través de la fijación de plazo para alcanzar un arancel meta.

En la declaración del 16 de Diciembre del 2006 se instruyo a los ministros de integración económica identificar los mecanismos provisionales para administrar los aranceles no armonizados en la zona aduanera siendo esto fundamentalmente medicamentos, metales petróleo, productos agropecuarios entre otros.

En tal sentido el COMIECO ha emitido varias resoluciones entre ellas la 180-2006 en la cual se incorpora la cuarta enmienda del sistema armonizado de clasificación y codificación de las mercancías y la versión única en español al sistema arancelario centroamericano.

Así mismo se ha diseñado y puesto en vigencia un sistema denominado arancel informatizado centroamericano que incluye todas las medidas e impuestos, las desgravaciones arancelarias que se desprenden de los TLC. En dicho sistema los exportadores de terceros países pueden ingresar y consultar la cantidad probable a pagar por la importación de un producto así como cualquier disposición a la que se este sujeto en el área.

X. LIBRE COMERCIO

Los presidentes centroamericanos en marzo del 2006, acordaron incorporar al libre comercio los productos originarios que estaban pendientes y que estaban contenidos en el anexo A del Tratado General de Integración económica Centroamericano.

XI. SISTEMA DE LA AUTODETERMINACION ADUANERA EN NICARAGUA

Los establecieron con el Código Aduanero Centroamericano de 1963 conocido como cauca I, un sistema administrativo para la determinación de la obligación tributaria tal como se desprende en su artículo 93, según el cual el aforo aduanero era practicado por el contador vista (funcionario de la aduana). El 1993 se aprueba una modificación conocida como cauca II, si bien se conservó el mismo sistema tal como lo expresa su artículo 72 ***“la determinación de obligación tributaria aduanera o acto único del aforo será realizado por los funcionarios aduaneros autorizados para ello....”***;

También se estableció por primera vez, la posibilidad de aplicar un sistema de determinación, tal como lo expresa claramente el artículo 72 “el aforo de las mercancías pueda efectuarse por los agentes de aduana bajo la modalidad de autodeterminación y liquidación de los tributos aduaneros y otros cargos fiscales...”.

Este código si bien estuvo poco tiempo en vigor podemos afirmar que sirvió de transición para establecer definitivamente el sistema de autodeterminación en todos los países centroamericanos. Tal afirmación queda en evidencia al efectuarse la modificación del cauca en el 2012 conocido entonces como Cauca III que estableció en el artículo 32 que ***“como regla general, corresponderá al declarante o a su representante, bajo el sistema de autodeterminación, realizar la determinación de la obligación tributaria aduanera...”*** En el año 2008 se consolida la autodeterminación conocido como CAUCA IV- actualmente en vigor el que reafirma en el artículo 50 ***“como regla general corresponderá al declarante o a su representante, bajo el sistema de autodeterminación realizar la determinación de la obligación tributaria aduanera...”***

Con base el artículo 75 el CAUCAII el gobierno de Nicaragua promulgó en 1997 la ley que establece el Autodespacho para la importación, exportación y otros regímenes.³⁴

Esta Ley generalizó en Nicaragua, antes que el CAUCA III, el Sistema de Autodeterminación “que se caracteriza porque en ella los interesados, por medio de su agente aduanero, determinan y cumplen ellos mismos, sus obligaciones tributarias.”³⁵

XII. ALCANCE DE LA AUTODETERMINACIÓN ADUANERA

La autodeterminación aduanera, alcanza no sólo los tributos aduaneros tal como la define el CAUCA en su artículo 4 ***“autodeterminación: es la determinación de la obligación aduanera efectuada por el declarante por las que éste fija, acepta y paga los tributos exigibles y se cumplen las demás obligaciones necesaria para la autorización de un régimen aduanero”.***

Es decir la autodeterminación aduanera alcanza también las obligaciones no tributarias así lo expresa el artículo 45 del CAUCA ***“constitución de las obligaciones aduaneras. La obligación aduanera esta constituida por el conjunto de acciones tributarias y no tributarias que surgen entre el ESTADO Y LOS `particulares, como consecuencia del ingreso o salida de mercancías del territorio aduanero.***

La obligación tributaria aduanera esta constituida por los tributos exigibles en la importación o exportación de mercancías.

³⁴ Ley No.265 Publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” No.219 del 17 de Noviembre de 1997.

³⁵ Las Cien principales Preguntas y Respuestas Entorno al Autodespecho y su Ley-Pregunta No. 1

Las obligaciones no tributarias comprenden las restricciones y regulaciones no arancelarias cuyo cumplimiento sea legalmente exigible.

XIII. INFRACCIONES ADUANERAS

Las Infracciones Aduaneras a como lo establece el artículo 122 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano las define: “**Constituye infracción aduanera toda transgresión o tentativa de transgresión de la legislación aduanera. Las infracciones aduaneras pueden ser: Administrativas, Tributarias o Penales**”.

Tales infracciones se encuentran definidas en los artículos 123,124 y 125 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano de la siguiente manera:

- Artículo 123: “**Las infracciones administrativas constituyen toda acción u omisión que signifique transgresión a la legislación aduanera, que no cause perjuicio fiscal, ni constituya delito**”.
- Artículo 124: “**Infracción tributaria es toda acción u omisión que signifique transgresión o tentativa de transgresión de la legislación aduanera, que cause o pueda causar perjuicio fiscal**”.
- Artículo 125: “**Sera infracción aduanera penal toda acción u omisión que signifique transgresión o tentativa de transgresión de la legislación aduanera, constitutiva de delito**”.

En el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y en su reglamentación, y de la Ley 265 Ley que Establece el Autodespacho Para la Importación, Exportación y otros Regímenes se establecen las disposiciones que nos dicen cómo se debe hacer una importación, cómo se debe hacer una exportación, cómo hay que

hacer un tránsito y cómo se deben realizar una serie de destinaciones y operaciones.

Entonces, infracción aduanera es transgredir esa forma y modalidad, prescripta por el CAUCA, el RECAUCA, la Ley 265 Ley de Autodespacho y su Reglamento para realizar tales procedimientos u operaciones, y se encuentran tipificadas, en el artículo 64 reformado de la Ley 265 de la siguiente manera:

Artículo 64: *"Siempre que nos cause perjuicio fiscal, las infracciones administrativas se sancionaran de la forma siguiente:*

1. Romper o violar sellos, cerraduras o marchamos aduaneros antes de que estos cumplan con su cometido ya sea en bultos, bodegas o vehículos, con una multa de un mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.
2. No acompañar a las declaraciones de importación o exportación, los documentos exigidos por la presente Ley, en su Reglamento u otras normas jurídicas, con una multa de cien pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.
3. Presentar los documentos a que se refiere el numeral anterior en forma tardía; con una multa de cincuenta pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.
4. Presentar los documentos indicados en el numeral segundo con anotaciones erróneas, omisiones, o con falta de ejemplares u otras condiciones exigidas con una multa de cincuenta pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional

.

5. Oponerse a que se lleve a cabo el cotejo o examen de las mercancías con motivo de operación maniobra en que deba intervenir la autoridad aduanera con una multa de quinientos pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.
6. Amarrar, atracar o fondear embarcaciones de cualquier clase o aterrizar naves aéreas sin la correspondiente autorización de la aduana en los casos en que se requiera dicha autorización con una multa de mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.
7. Movilizar mercancías dentro de la oficina en vehículos no registrado ante la aduana o cuyos dueños no tengan permiso para realizar dicha operación con una multa de cincuenta pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.
8. Penetrar a los recintos fiscales sin portar el gafete o carnet que lo identifique como empleado de la aduana, Agente Aduanero, Apoderado, gestor Autorizado, Empleado de Almacenadora Privada o Usuario en gestión de desaduanaje con una multa de cien pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.
9. Usar un gafete o carnet de identificación del que no sea titular o permitir que un tercero utilice el propio con una multa de doscientos cincuenta pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.
10. Falsificar o alterar el contenido de algún gafete o carnet de identificación, con una multa de quinientos pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.
11. Presentar a las autoridades aduanera la información estadística de las declaraciones que formulen, grabada en un medio magnético, con

información inexacta, incompleta o falsa, siempre que no implique la comisión de otra infracción prevista en esta Ley, con una multa de doscientos cincuenta pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.

12. Omitir la declaración en la aduana de entrada al país, del dinero en efectivo o en cheque o una combinación de ambas que lleven consigo, superiores al equivalente en moneda nacional de diez mil dólares de los Estados Unidos de América, con una multa de quinientos pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.
13. Las empresas que prestan el servicio de transporte internacional de pasajeros omitir, la distribución entre ellos de los formularios para la declaración de aduanas con una multa de cien pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.
14. Utilizar una clave confidencial de identidad equivocada en el acceso al sistema informativo de la aduana, con una multa de cien pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.
15. Utilizar en las áreas expresamente señaladas por las autoridades aduaneras como restringidas, aparatos de telefonía celular y cualquier otro medio de comunicación o aparato que pueda interferir con los sistemas de cómputo de la aduana con una multa de cincuenta pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.
16. Dañar los edificios, equipos y otros bienes que se utilicen en la operación aduanera por las autoridades aduaneras o por empresas que los auxilien, en los términos de la presente Ley, sin perjuicio de reparar los daños ocasionados, con una multa de quinientos pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.

17. Cualquier otra acción que contravenga las disposiciones de la presente Ley o su Reglamento que no causen perjuicio tributario, con una multa de cinco pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional: cuando la acción cause perjuicio tributario además del pago del daño fiscal causado, deberá pagar un tanto igual al mismo en concepto de multa”.

XIV. DERECHO ADUANERO

Resulta apropiada la definición del Derecho Aduanero esbozada por Moya (2006), para quien: El Derecho Aduanero es la rama del Derecho Público que regula el funcionamiento, organización y régimen de las aduanas ...constituye el conjunto de normas legales y reglamentarias que determinan el régimen fiscal al cual han de someterse los importadores, exportadores, agentes navieros y en general quienes realizan operaciones con mercancías a través de las fronteras de la República, sean estas terrestres, marítimas, aéreas, lacustres, fluviales o postales.³⁶

El doctrinario Pedro Fernandez Lalane define: ***“El derecho aduanero, son las normas legales y reglamentarias que determinan el régimen fiscal al cual deban someterse los importadores, exportadores, agentes marítimos, despachantes de aduana y en general quienes realicen operaciones con mercancías a través de las fronteras de la república, por las vías marítimas, aéreas, terrestres y postales.”***

Para Carlos Ramírez Anabalón, doctrinólogo Latinoamericano el concepto de Derecho Aduanero lo establece a partir de su naturaleza, el mismo lo define: ***“Rama del Derecho público que estudia las normas legales, reglamentaria y administrativas, aplicable a los regímenes, formalidades, tramitaciones y operaciones aduaneras a que deben someterse las personas, mercancías y***

³⁶ Moya Vargas, Manuel Fernando. El Sistema de Seguridad Social, los Fondos de Pensiones y Cesantías, Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas. 2006. Universidad Santo Tomas

medios de transporte con motivo de su paso a través de las fronteras aduaneras para la fiscalización y aplicación de los eventuales gravámenes que pudieran afectarles o las franquicias aduaneras que le favorezcan, la ejecución de las medidas adoptadas por el Estado, para la regulación de su comercio exterior y el estudio de la investigación de todas las materias que tienen relación con la técnica aduanera y los factores económicos por ella afectados.”

XV. DERECHO ADUANERO Y SUS CARACTERÍSTICA TRIBUTARIA

El Derecho Tributario para Dino Jarach es ***“El conjunto de las normas y principios jurídicos que se refieren a los tributos. La ciencia del Derecho Tributario tiene por objeto el conocimiento de esas normas y esos principios”***³⁷

Por su parte el Derecho Aduanero regula las relaciones que surgen entre los particulares y el Estado “dado que hoy en día las aduanas están encargadas de desarrollar una variada gama de funciones, señaladas en sus leyes orgánica y demás complementarias ellas se han transformado en el cauce natural a través del cual el Estado, como el instrumento aduanero (arancel de aduana).

La intervención de las aduanas con respecto al Derecho Tributario da lugar a diversas situaciones vinculadas con el derecho tributario, derecho tributario administrativo aduanero, derecho penal tributario aduanero y derecho tributario aduanero procesal y derecho tributario aduanero internacional.

Por lo tanto el Derecho Tributario Aduanero en términos generales se conforma por el conjunto de normas jurídicas que regula la relación tributaria aduanera al igual que los elementos esenciales que conforman los tributos aduanales.

³⁷ Fraga Gabino, Derecho Administrativo, Pág. 13

XVI. RELACIÓN DEL DERECHO ADUANERO CON OTRAS Y OTRAS DISCIPLINAS JURÍDICAS

El doctrinario Carlos Anabalón Ramírez: afirma: *“Hay que reconocer que el desarrollo alcanzado hoy día por el derecho aduanero, gracias a su ordenamiento jurídico (Código de Aduanas), jurisprudencia administrativa y judicial , la doctrina de los autores, estudios e investigaciones de instituciones y organismos tales como: El Consejo de Corporación Aduanera, ALALC, ICAP, INTAL, etc.; han proporcionado elemento necesario para el análisis y un enfoque de la elaboración teórica que nos permiten afirmar, respetuosos de las fundadas opiniones en contrario que estamos frente a una rama de derecho que a alcanzado autonomía...”* y sigue... *“nadie puede desconocer el amplio campo de la actividad aduanera, organización administrativa, territorio aduanero, sujeto y objeto de las prestaciones tributarias, condición jurídica de las mercaderías, potestad aduanera, responsabilidad fiscal en el depósito aduanero, figuras delictivas como el Contrabando, fraude aduanero, etc., todas las relaciones y situaciones jurídicas muy distintas de las categorías usuales del derecho tributario, administrativo, penal y comercial”*, etc.

De tales afirmaciones y el estudio de la doctrina podemos discriminar que la relación del Derecho Aduanero con otras disciplinas jurídicas es similar a la de otras ramas del Derecho, entre las que destacamos:

Administrativo. Regula la organización y las atribuciones de las diversas dependencias y entidades que conforman la Administración Pública así como las prescripciones sobre la presentación de los servicios públicos. El Derecho aduanero recurre a él para el conocimiento de las atribuciones que le competen al órgano administrativo encargado de ejercer las funciones aduaneras, porque los procedimientos son por excelencia diligencias administrativas, dando dicho derecho el camino a seguir para la consecución de determinada cuestión

aduanera. Son normas de Derecho Administrativo que al aportar los servicios propios de la actividad de la Administración Pública, hacen que se materialicen las funciones aduaneras.

El Derecho Aduanero se relaciona con el Derecho Constitucional por la aplicación del principio de legalidad, y por los preceptos que en ella se establezcan en materia de impuestos .y toma los conceptos fundamentales de competencia entre los diversos poderes.

Con el Derecho Tributario se relaciona, porque forma el proceso llamado hecho generador para causar el impuesto aduanero, guardando de esta manera, que los impuestos que se encuentren taxativamente plasmados en una ley, dando así seguridad jurídica, tanto en el cálculo, como en el pago de los impuestos.

Con el Derecho Mercantil se vincula en tanto que regula los títulos valores, dentro de los cuales se encuentran el conocimiento de embarque, así como el derecho de retención para mercadería, ya sea para exportación, los seguros por daños y fletes.

Con el Derecho de Integración Público se relaciona, porque éste derecho regula la configuración de la ley en materia de tratado, entendiendo este por aquellas estipulaciones formales entre los sujetos de Derecho Internacional.

Con el Derecho Económico, se relaciona en tanto que recoge la información económica financiera que el Estado recauda en materia de importaciones, y exportaciones así como las incidencias que en la economía de éste producen económicamente los tributos aduaneros.

Con el **Derecho Penal**: El Derecho Aduanero toma del Derecho Penal la tipificación y sanción de los delitos aduaneros, por lo que se establece una relación indiscutible entre ambos.

Con el **Derecho Procesal**: Provee al Derecho Aduanero de instituciones y figuras jurídicas para fines propios en los procedimientos administrativos aduaneros, como las representaciones, notificación, ofrecimientos, y valoración de probanzas y otros requisitos.

XVII. FUENTES DEL DERECHO ADUANERO

Con el termino fuente directamente de Derecho entendemos dos aspectos: el acto concreto (autoridad o ente) creador del derecho y la forma de expresión de la norma jurídica creada.

Cada rama del Derecho, (sea civil, constitucional, administrativo, etc.) tiene sus fuentes especiales y específicas. Sin embargo, tales expresiones son sólo un aspecto de lo que constituye el ordenamiento jurídico nacional.

Así podemos ver las fuentes del Derecho Aduanero:

- 1) La Ley
- 2) La costumbre
- 3) La doctrina
- 4) La jurisprudencia
- 5) Los tratados internacionales

1) La ley desde el punto de vista formal, el Derecho Aduanero, se alimenta de la legislación que existe en el país.

Entendemos que la ley es aquella que a seguido para su formación todos los procedimientos establecidos por la Constitución Política

En el Derecho común las leyes arcaicas son Problemáticas, pero en cuestiones de derecho público la dificultad es mayor, llegando a tocar el problema sobre si es conveniente o no la codificación de las leyes aduaneras, pero bien, codificar las leyes aduaneras es muy conveniente, debido a que las leyes estarían contenidas en un solo cuerpo legal, sistemático y orgánico.

Esta se observa en su aplicación por el absolutismo de las leyes y por la interpretación de algunos empleados de la administración aduanera, que tradicionalmente desempeñan su papel en el desaduanamiento de las mercaderías, debido a que la legislación aduanera, presenta muchos vacíos, por lo que la costumbre en algunos casos se ha constituido en fuente de este derecho.

Definiremos la costumbre, como la observancia constante y uniforme de una regla de conducta llevada a cabo por los miembros de una comunidad social con la convicción de que responde a una necesidad jurídica.

Algunos tratadistas opinan que la costumbre solo tienen un valor útil en cuanto a la interpretación, pero no como fuente formal principal del Derecho, en términos generales esto puede aceptarse, el estado en que se encuentra nuestra legislación a obligado al órgano a crear distintos procedimientos siempre dentro del ordenamiento jurídico, los cuales no están regulados por ninguna ley.

Estas situaciones si a caso están regulados mínimamente por circulares, pero su origen se debe a las necesidades prácticas del comercio internacional.

La doctrina, se hacen algunas observaciones, es producto de la extensa doctrina que existe y en una forma más aproximada a nuestro entender, es lo que se recogía como Código Aduanero Uniforme Centroamericano, no obstante ser parte de nuestro derecho positivo vigente, según la opinión del experto en esta disciplina Doctor Salvador Guillermo Mónico Díaz.

Entenderemos por doctrina, los estudios de carácter científico jurídico, realizados por los estudios de esta ciencia, para sistematizar este derecho, debemos recordar que la doctrina no tienen un efecto vinculatorio, pero sí, sirve como base para sustentar posiciones que el litigante aduanero desea fundamentar ante la Administración aduanera.

Jurisprudencia Se puede decir que en materia aduanera, existe alguna jurisprudencia que puede ser invocada por los particulares como el aplicador del Derecho Aduanero, señalando concretamente a las clasificaciones arancelarias de las mercancías, teniendo también implicaciones en las resoluciones dadas en otro sentido, tales como las solicitudes de cambios de régimen, las devoluciones de malas clasificaciones

Otra fuente importante son los tratados internacionales porque estos instrumentos recogen en sus normas, tratamientos, definiciones y conceptualizaciones del Derecho Aduanero moderno y el marco jurídico que sustenta especialmente cuando se trata de las integraciones de países a través del Derecho Aduanero de integración.

XVIII. PRINCIPIOS DEL DERECHO ADUANERO

Toda sanción administrativa para que sea constitucional y legalmente válida debe respetar los principios que la misma Constitución establece, además del respeto a los derechos y garantías de los administrados. Por tal motivo el

ejercicio del *ius puniendi* estatal a cargo de los entes administrativos se encuentran limitado por la propia Constitución.³⁸

El Principio de Legalidad:

El principio de legalidad o Primacía de la ley es un principio fundamental del Derecho público conforme al cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. De esta forma el principio de legalidad establece la seguridad jurídica.

El principio de legalidad es la regla de oro del Derecho Público y en tal carácter actúa como parámetro para decir que un Estado es un Estado de Derecho, pues en él el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas.

El Marco constitucional del Principio de Legalidad. En Nicaragua lo encontramos en la Constitución Política de la Republica de Nicaragua en los siguientes artículos:

Artículo 32: ***"Ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe"***.

Artículo 130: ***"La nación nicaragüense se constituye en un Estado Social de Derecho. Ningún cargo concede, a quien lo ejerce, más funciones que las que le confieren la Constitución y las leyes"***.

Artículo 183: ***"Ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República"***.

³⁸ Joe Henry Thompson Arguello. Recursos Administrativos Aduaneros. UAM 2011.

Estos preceptos nos indican que la Administración Pública no podría actuar por autoridad propia, sino que ejecutando el contenido de la ley. Es decir, el funcionario público solo puede actuar de conformidad a lo que le ordena la ley. A diferencia de los administrados que podemos hacer todo aquello que la ley no mande ni prohíba, el funcionario público solo puede desenvolverse en su actividad dentro del marco rígido que le ordena la ley.

Principio de Tipicidad:

La legalidad desde el punto de vista formal y material:

1. En sentido Formal: implica en primer termino, la reserva total y substancial de la ley, es decir, en materia penal solo se puede regular mediante una ley los delitos y las penas, no se pueden dejar a otras disposiciones normativas esta regulación, ni por la costumbre, ni por el poder ejecutivo ni por el poder judicial pueden crearse normas penales tan solo por el poder legislativo y por medio de leyes que han de ser Orgánicas en los casos en que se desarrollen Derechos Fundamentales y libertades públicas.
2. En sentido material: implica una serie de exigencias, que son:

La Taxatividad de la ley que deben ser precisas, ésta exigencia comporta 5 consecuencias:

1. La prohibición de la retroactividad de las leyes penales, como regla general las normas penales son irretroactivas, excepto cuando sea más favorable para el reo.
2. La prohibición de que el Ejecutivo/Administración dicte normas penales.

3. La prohibición de la analogía en materia penal (generar razonamientos y conductas basándose en la existencia de semejanza con otra situación parecida)
4. La prohibición de creación judicial de normas penales.
5. La prohibición de que la materia penal se regule por normas consuetudinarias

Principio de Proporcionalidad:

Este principio establece la correspondencia entre la infracción y la sanción, con interdicción de medidas innecesarias o excesivas.

El principio de proporcionalidad sostiene: La doctrina procesal exige que en las intervenciones del Estado en la esfera privada, defendida por los derechos fundamentales, los medios utilizados se mantengan en proporción adecuada a los fines perseguidos. La proporcionalidad de una regulación o acto ha de establecerse, pues, con referencia al objeto de protección y ordenación intentado en cada supuesto, con referencia al derecho fundamental que resulte o pudiere resultar lesionado.

Principio de Culpabilidad:

La aplicación al Derecho Administrativo Sancionador del principio de culpabilidad que rige en el ámbito penal, ha erradicado del campo de las infracciones administrativas la aplicación de la responsabilidad objetiva.

El principio de culpabilidad en materia administrativa sancionatoria supone dolo o culpa en la acción sancionable. Bajo la perspectiva del principio de culpabilidad, ***sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción***

administrativa las personas físicas que resulten responsables de las mismas, Principio Constitucional contenido en el artículo 37 de nuestra Constitución Política, por tanto, la existencia de un nexo de culpabilidad constituye un requisito sine qua non para la configuración de la conducta sancionable. Es decir, que debe existir un ligamen del autor con su hecho y las consecuencias de éste; ligamen que doctrinariamente recibe el nombre de "imputación objetiva", que se refiere a algo más que a la simple relación causal y que tiene su sede en el injusto típico; y, un nexo de culpabilidad al que se llama "imputación subjetiva del injusto típico objetivo a la voluntad del autor", lo que permite sostener que no puede haber sanción sin la existencia de tales imputaciones.

En materia administrativa sancionatoria es aplicable el principio *nulla poena sine culpa*; lo que excluye cualquier forma de responsabilidad objetiva, pues el dolo o la culpa constituyen un elemento básico de la infracción

Principio del Debido Proceso:

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente a su juzgador.

El Debido proceso es el conjunto de etapas formales secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro un proceso por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada no corran el riesgo de ser desconocidos; también tiene como finalidad obtener de los órganos juzgadores un proceso justo, pronto y transparente, sin poder inventar trámites a su gusto, con los cuales pudiera crear un juicio amañado que en definitiva sea una farsa.

Nuestra constitución Política establece una serie de garantías que se consideran pertenecientes al debido proceso, en el artículo 34:

‘Todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a las siguientes garantías mínimas:

- 1) A que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme la ley.*
- 2) A ser juzgado sin dilaciones por tribunal competente establecido por la ley. No hay fuero atractivo. Nadie puede ser sustraído de su juez competente ni llevado a jurisdicción de excepción.*
- 3) A ser sometido al juicio por jurados en los casos determinados por la ley. Se establece el recurso de revisión.*
- 4) A que se garantice su intervención y defensa desde el inicio del proceso y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa.*
- 5) A que se le nombre defensor de oficio cuando en la primera intervención no hubiera designado defensor; o cuando no fuere habido, previo llamamiento por edicto.*

El procesado tiene derecho a comunicarse libre y privadamente con su defensor.

- 6) A ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado por el tribunal.*

- 7) *A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge o compañero en unión de hecho estable, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni a confesarse culpable.*
- 8) *A que se le dicte sentencia dentro de los términos legales en cada una de las instancias del proceso.*
- 9) *A recurrir ante un tribunal superior, a fin de que su caso sea revisado cuando hubiese sido condenado por cualquier delito.*
- 10) *A no ser procesado nuevamente por el delito por el cual fue condenado o absuelto mediante sentencia firme.*
- 11) *A no ser procesado ni condenado por acto u omisión que, al tiempo de cometerse, no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. Se prohíbe dictar leyes prescriptivas o aplicar al reo penas o tratos infamantes.*

El proceso penal deberá ser público. El acceso de la prensa y el público en general podrá ser limitado, por consideraciones de moral y orden público.

El ofendido será tenido como parte en los juicios, desde el inicio de los mismos y en todas sus instancias.

Dentro de este principio están contenidos una serie de derechos de vital importancia para el resguardo de las garantías constitucionales, podemos enumerar los siguientes:

1. Derecho de Presunción de Inocencia
2. Derecho a juez predeterminado por la ley
3. Derecho a ser oído, o derecho de defensa

4. Derecho a que se le dicte sentencia en los términos legales previstos por la ley
5. Derecho a recurrir ante una instancia superior
6. Derecho a no ser procesado nuevamente por un delito por el que haya sido previamente condenado o absuelto mediante sentencia firme
7. Derecho a no ser procesado ni condenado por acto u omisión que, al tiempo de cometerse, no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley (Tipicidad)

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN GENERAL

I. DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Según el **Dr. Armando Rizo Oyanguren** el Procedimiento administrativo es el cauce legal que los órganos de la Administración se ven obligados a seguir en la realización de sus funciones y dentro de su competencia respectiva, Para producir los Actos Administrativos y su posterior revisión por medio de los recursos administrativos.³⁹

De modo que el procedimiento administrativo es la forma jurídica en que actúa la Administración. Es la vía que conduce al Acto Administrativo.

Alessi: nos da el concepto de procedimiento administrativo diciendo: *"El procedimiento administrativo viene a representar el desarrollo del conjunto de actividades que desembocan en una manifestación. Se trata por ello de una noción esencialmente formal, referente al aspecto dinámico del fenómeno mencionado y que, por lo tanto, se resuelve en una sucesión de momentos en el tiempo. Esta noción de procedimiento administrativo referida al desarrollo de una serie de actividades funcionalmente unitarias por estar dirigidas a la realización de un único interés sustancial mediante el ejercicio de un poder, es la noción mas estricta y técnicamente precisa de procedimiento administrativo"*⁴⁰. De esto podemos decir, que el procedimiento administrativo comprende la regulación de las formalidades para la formación, ejecución y revisión, dentro de la esfera administrativa, de los actos de la Administración.

En nuestra legislación se define como procedimiento gubernativo como aquel que se da en las instancias del ejecutivo sin formas, ni figura de juicio, a verdad

³⁹ Derecho Administrativo, Escorcia, Jorge Flavio. Pag. 120.

⁴⁰ Elementos del Derecho Administrativo y Procesal Administrativo. Picone, F. pag. 232.

sabia y buena fe guardada. Esto quiere decir, que con una gran potestad discrecional del ejecutivo por ninguna manera implica indefensión, siempre se deberá respetar el derecho a la defensa.

De todo lo antes mencionado llegamos a una definición más sintetizada, la cual expresamos de la siguiente manera: "procedimiento administrativo es el conjunto de formalidades, de etapas, y actos necesarios para que se dicte una resolución o acto administrativo, de una instancia del poder ejecutivo facultada por la ley o en virtud de su potestad discrecional".

II. NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Sobre la naturaleza jurídica del procedimiento administrativo, encontramos en la doctrina dos posiciones diferentes, una que considera que el procedimiento administrativo es una parte del proceso en general, y que el Derecho Procesal Administrativo es una especie del Derecho Procesal en general. Los que sostienen esta posición, afirman que la finalidad de todo proceso es la actuación o aplicación concreta de la voluntad de la ley, la aplicación de la norma general y abstracta a un caso particular, una individualización de la norma para reintegrar el derecho perturbado (proceso criminal judicial y proceso sancionador administrativo), bien para reconocer, declarar, modificar o negar derechos discutidos (procesos judiciales: civil y contencioso administrativo y proceso administrativo propiamente dicho). Y dicen que, siendo la finalidad de todos estos procesos la aplicación concreta de la voluntad de la ley, no existe sino una distinción formal, a saber, primero que los órganos de instrucción y decisión varían (Tribunales Judiciales o Autoridades Administrativas) y, segundo, que en el proceso judicial el órgano que resuelve no se haya afectado por la decisión misma⁴¹.

⁴¹ Derecho Procesal Administrativo. Díez Manuel María. Pag. 323

La otra posición sostiene que el Procedimiento Administrativo es diferente del Procedimiento Judicial. Manifiestan que la circunstancia de que sean distintos los funcionarios que desarrollan la actividad judicial de los que desarrollan la administrativa no es puramente formal, sino esencial, decisiva. Afirman que la actuación Jurisdiccional

Obedece a principios radicalmente distintos, si no contrarios de la administrativa y resaltan las dos cualidades o notas diferenciadoras: los jueces y tribunales son **independientes** frente a los demás órganos del Estado y sus resoluciones adquieren, en determinado momento, el carácter de inmutables por virtud de la institución de **la cosa juzgada**; ambas cosas no acontecen en la Administración.

La corriente doctrinal mas generalmente aceptada, es la que sostiene que ambos procesos son diferentes. Realmente, la idea de proceso o procedimiento es una noción que pertenece a la Teoría General del Derecho, dado que todo proceso tiende directa o indirectamente a la realización de aquel. Producto de ello es que todos los órganos del Estado, cualesquiera que sea la, función que realicen, se ven obligados, como hemos visto y por imperativo del Estado de Derecho, a ajustar su actuación y conducta a normas preestablecidas. Ello no prejuzga, sin embargo, que todos los procesos o procedimientos hayan de ser iguales.⁴²

III. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

1. Se da en el seno del poder ejecutivo, en su ámbito. Esto nos quiere decir que quien conoce y decide es el ejecutivo a diferencia del procedimiento judicial que se da en el seno del poder judicial.

⁴² Derecho Administrativo. Escorcia, Jorge Flavio. Pág. 155.

2. Se dilucidan o discuten estrictamente aspectos relacionados directamente con la administración pública a diferencia del procedimiento judicial donde se resuelven , procesos penales, civiles, mercantiles, etc... esto nos deja más que claros que lo que es objeto del procedimiento judicial no puede ser objeto de un procedimiento administrativo y viceversa.
3. El procedimiento administrativo es ágil y rápido esto constituye una característica relevante del procedimiento administrativo para tomar decisiones, resoluciones o actos (así es en la práctica). A diferencia de este procedimiento el judicial es muy lento, existen muchas problemática de retardación de justicia por lo cual ese procedimiento es poco ágil.
4. El procedimiento administrativo es anti formalista, lo contrario del procedimiento judicial que esta revestido de formalidades, solemnidades, requisitos que presenten teóricamente garantizar justicia (el cual es objeto del procedimiento).

En lo general, el procedimiento administrativo en teoría y práctica se ha caracterizado por ser anti formalista permitiéndole ser un ágil y rápido procedimiento; ya que la forma pasa a un plano secundario. No existen muchos requisitos formales y no hay rigidez en los términos ni en otros requisitos técnicos – jurídicos.

En términos específicos ese antiformalismo se expresa en los siguientes aspectos:

1. Los plazos son cortos, flexibles y muchas veces no están establecidos.
2. Las expresiones e incidentes dilatorios generalmente se resuelven al final sin suspender el procedimiento o se suple inmediatamente la omisión.
3. Se usa papel común y no papel sellado.

4. Tiene fuertes influencias el procedimiento verbal, oral, aunque se levante acta de los actuados o discutidos (a diferencia del judicial que todo tiene que ser por escrito).
5. No existe riguridad en cuanto a los requisitos técnico – jurídicos de los escritos, en tanto el procedimiento judicial si.
6. Puede suplirse los hechos y el derecho.
7. En el típico procedimiento administrativo el estado es juez y parte porque el dicto un acto o resolución contra un particular y este recurre en contra de el. Que es el que conoce la revisión administrativa. Puede ser que el conflicto se de entre dos particulares y la institución sea quien lo resuelva. También existe como antes lo mencionábamos, entre particular y estado.

En Nicaragua al hablarse de procedimiento gubernativo o administrativo se dice que es aquel que se da sin forma ni figura de juicio, este se da a verdad sabia de buena fe y voluntad. Esto nos dice dos cosas;

- A. Que es un procedimiento sin formalidades en donde el ejecutivo tiene una gran potestad discrecional dictando resoluciones a su leal saber y entender.

El procedimiento administrativo más rápido que se conoce es el de la sanción de infracciones de tránsito, es un verdadero procedimiento gubernativo.

- B. Que el procedimiento administrativo sea ágil y anti formalista no significa que no exista derecho a la defensa o que exista indefensión y abuso de autoridad del ejecutivo, es por eso que sea ha creado el recurso de amparo administrativo.

IV. PRINCIPALES TIPOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

1. Generales.
2. Especiales o particulares “alternativas mixtas”.
3. Discrecionales, reglados o normados.

Generales:

En los países de mayor desarrollo del Derecho, existe una ley general de los procedimientos administrativos que regula los aspectos fundamentales de los principales procedimientos que se dan en la administración pública. Esta ley y su procedimiento son válida para todos los organismos del ejecutivo, válida para todo el estado.

La gran limitante que tiene esta ley es que con las situaciones que se presentan son casuística y variadas, en cada ministerio u organismo hay procedimientos, entonces es difícil el encontrar una ley que regule a todos esos procedimientos como existen en lo civil y lo mas que puede regular esa ley son cuestiones fundamentales quedando los otros aspectos sujetos a procedimientos especiales, esa es la razón por la cual muy pocos países tienen una ley general del procedimiento administrativo.

Especiales o particulares.

En este caso existen procedimientos especiales o particulares para cada situación administrativa y no existen procedimientos especiales o particulares para cada situación administrativa y no existe una ley general de procedimientos administrativos, si no que cada situación tiene su procedimiento escrito o verbal según el organismo; de tal manera que existen tantos procedimientos administrativos como situaciones administrativas se presentan, cada organismo tiene su propio procedimiento.

“ALTERNATIVA MIXTA”: Es la existencia de una ley general para aspectos globales que supla lo que no contenga los procedimientos especiales o que el procedimiento especial solo contenga lo que no esta regulado en la ley general.

Reglados o Normados: Según existe un procedimiento jurídico definido con forma jurídica; es decir un procedimiento normado establecido escrito.

Discrecionales: Es la alternativa de procedimientos discrecionales que no están normados jurídicamente; sino que con flexibilidad en cada situación que se presenta se sigue el procedimiento de acuerdo a los principios generales del derecho.(El ministerio decide administrativamente y no jurídicamente cual será el procedimiento).

Solo los procedimientos mas importantes se encuentran normados jurídicamente, el resto de los procedimientos no lo están, estas alternativas no son excluyentes, pueden combinarse.

V. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

El procedimiento administrativo puede iniciarse:

1. De oficio: a instancia de un organismo del estado.
2. Por solicitud, petición o queja; que es el nombre con que se designa la iniciación de un procedimiento administrativo. Es decir en lo civil se habla de la demanda, en lo penal de la denuncia o acusación y en el campo administrativo se habla de solicitud petición o queja.

Teoría del silencio administrativo:

La doctrina clásica de la teoría del silencio administrativo plantea que el silencio de la administración pública que una solicitud, petición o queja presume rechazo o negativa.

La doctrina moderna, incluyendo la legislación nacional, rechaza esta teoría clásica del silencio administrativo y establece que es un derecho del ciudadano obtener una respuesta, una obligación del funcionario o institución de responderla. Incluso nuestra ley de amparo establece que si se guarda silencio administrativo sostiene que existe derecho de solicitar y la obligación del funcionario o de la institución a responder de tal manera que el silencio es inconstitucional, y por eso los ciudadanos que están en su derecho de recurrir de amparo. Silencio e incumplimiento del deber legal de resolver.⁴³

De la prueba:

El procedimiento administrativo normalmente sigue el procedimiento verbal, aun cuando se escriban sus diligencias y se arme expediente, para que no se pueda alegar indefensión ante un probable recurso de amparo administrativo.

Normalmente 24 – 26 es el término, salvo que el procedimiento especial norme otro procedimiento, en todo no previsto se aplica el procedimiento civil o la doctrina.

De la resolución administrativa:

Es la que dicta una instancia del poder ejecutivo en su ámbito de competencia de conformidad con el procedimiento establecido en la ley. El poder judicial dicta sentencia, en derecho administrativo las instancias administrativas no dictan sentencia si no que resoluciones administrativas.

⁴³ Derecho Procesal Administrativo. Díez Manuel María. Pag. 345.

VI. MECANISMOS DE IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS DEL EJECUTIVO

1. Mecanismos de impugnación de los actos del ejecutivo.

Recursos administrativos: Es el medio legal de impugnación de una resolución administrativa por un particular afectado en sus derechos o intereses a efectos de que la misma autoridad administrativa revise su propio acto.⁴⁴

Ese estricto derecho no es un verdadero recurso porque lo que se da es una revisión de lo actuado por parte del mismo ejecutivo que actúa como juez y parte y no es una instancia diferente al ejecutivo. Estos son recursos horizontales.

En cuanto a los requisitos de validez, el recurso sigue todas las teorías del proceso y de los recursos, debe recurrirse en tiempo, o sea, el que señala la ley, pero el recurso administrativo no es exigente en cuanto a sus formalidades.

Existen dos posibilidades:

1. Recursos de reproducción o reforma ante el mismo funcionario.
2. Recurso de revisión ante el funcionario superior.

Algunos organismos tienen instancias especiales para conocer de estos recursos, así lo establece la ley de cada organismo.

Normalmente la interposición del recurso suspende la ejecución del acto reclamando, pues aun no está firme. En cuanto al resultado del recurso de revisión rige todas las teorías del proceso, se confirma, se reforma, se revoca,

⁴⁴ Derecho Administrativo. Escorcia, Jorge Flavio. Pág. 127.

(cuando no están de acuerdo a las normas sustantivas) o se anula (cuando no están de acuerdo a las normas procesales). O es inconstitucional.⁴⁵

Control jurisdiccional del ejecutivo:

En el recurso administrativo, hay una revisión de sus actos que realiza el ejecutivo. No hay control jurisdiccional, es decir, un control por parte de una instancia externa al que dictó la resolución. Se ha desarrollado la tendencia a controlar los actos del ejecutivo jurisdiccionalmente. Este control se realiza por medio de un recurso vertical.

Recurso contencioso administrativo:

En este se encuentra contenido el abuso de poder, ilegalidad o injusticias, se ha establecido el control jurisdiccional del acto administrativo que es el recurso de los particulares contra los actos del ejecutivo y le ocasionan perjuicios y es el conocido por una instancia especializada diferente del órgano que lo dictó, en contencioso porque es contradictorio y la administración pública comparece como parte.

Modalidades para el contencioso administrativo:

1. Construir un tribunal contencioso administrativo en el seno del poder ejecutivo que conoce una vez que se ha agotado la vía administrativa. Los integrantes, o los nombra el presidente del ejecutivo o el poder legislativo, este modelo está inspirado en una marcada división e independencia de los poderes del estado y bajo este criterio no debe conocer el poder judicial en los actos del ejecutivo y si lo hace, está interfiriendo en los asuntos de la administración pública.

⁴⁵ Elementos de Derecho Administrativo. Villagra Gutierrez, William. Pag.133.

2. Que el tribunal contencioso administrativo este ubicado en el poder judicial y que se recurra cuando se ha agotado la vía administrativa. Y en esta modalidad, puede recurrirse por violaciones constitucionales o por violentar una ley secundaria.

Control de los actos administrativos por medio del recurso de amparo administrativo.

En América Latina no ha tomado fuerza el establecimiento de un tribunal contencioso administrativo, ni en el ejecutivo, ni en el judicial, esto se ha sustentado en el principio de unidad de jurisdicción. En el hecho de que el ejecutivo no pueda ser juez y parte. Y en el principio de que solo un verdadero poder puede detener el actuar arbitrario e ilegal del poder ejecutivo, en ese sentido el control de los actos del ejecutivo se realiza por medio del recurso de amparo administrativo que es el mecanismo del control constitucional de los recursos o de los actos del ejecutivo.

La única variante que se ha dado en el seno del poder judicial es dividir la corte en salas y en que la sala de lo constitucional sea la instancia especializada en conocer de estos recursos.⁴⁶

VII. Principios fundamentales de recursos de amparo administrativo.

1. Es un mecanismo de control constitucional de los actos del ejecutivo.
2. Esta regulado por la ley de amparo.
3. Se interpone ante el tribunal de apelaciones, pero quien conoce y decide es la corte suprema de justicia.
4. Se interpone en contra de una resolución administrativa que es inconstitucional.

⁴⁶ Elementos del Derecho Administrativo y Procesal Administrativo. Picone, F. pag. 288.

5. Debe de haberse agotado la vía administrativa. Es decir, haber recurrido anteriormente ante las instancias administrativas superiores del ejecutivo que indica la ley.
6. Debe especificarse cuáles son las disposiciones constitucionales lesionadas.
7. El recurso debe de ser interpuesto en tiempo y forma. Ósea el tiempo estipulado por la ley, lo normal es de 30 días, y en cuanto a la forma el recurso deberá de contener lo siguiente:
 - Nombre del funcionario contra el que se esta recurriendo.
 - Resolución administrativa contra la que se recurre.
 - Disposiciones constitucionales violadas.
 - Informe de haber agotado la vía administrativa.
 - La razón del porque la resolución violenta nuestros derechos.
 - Lugar para recibir notificaciones.
 - Lugar y fecha.
8. De oficina o a solicitud de parte puede suspenderse el acto administrativo, cuando ocasionan daños irreparables de ejecutarse el acto.
9. Una vez interpuesto y admitido el recurso en el término de las 72 hrs, se apersonan las partes y se pide a la autoridad contra la que se recurre que informa y remita todo lo actuado a la corte suprema de justicia en el termino de diez días quien resolverá en el termino de 45 días.
10. Solo puede ser objeto de recurso, actos que provengan de una autoridad del estado, que sean inconstitucionales, que nos causen perjuicios, que se haya agotado la vía administrativa y que no pueda resolverse por otro procedimiento judicial este conflicto legal. Lo que pueda discutirse en la vía civil, penal o laboral no puede ser objeto de recurso de amparo.

Recursos de constitucionalidad de las leyes.

Normas jurídicas y resoluciones, reglamentos, decretos emitidos por cualquier instancia del ejecutivo y que sean inconstitucionales. Es un recurso formalista, se interpone, conoce, y resuelve la corte suprema de justicia.⁴⁷

Recurso de habeas corpus, exhibición personal o de la libertad y seguridad personal.

Es un recurso anti formalista puede hacerse en papel corriente o por telegrama. Se interpone ante el tribunal de apelaciones quien nombra un juez ejecutor del recurso.

El recurso se interpone en caso de detención ilegal o amenaza de detención y entre otro aspecto el juez ejecutor revisa:

- Si es la autoridad competente.
- Si el término de la detención es ilegal.
- Si hubo orden legal de detención.
- Si existe expediente.
- La situación física del detenido.

Y en base a lo anterior resuelve lo que en derecho corresponda.

Acciones civiles, mercantiles y laborales.

En las situaciones legales en que el estado no actúa como autoridad, como gobierno y las disposiciones legales incumplidas no son de orden constitucional no cabe el recurso de amparo sino como con cualquier persona, acciones civiles, mercantiles, laborales o penales.

Nulidad, inexistencia y revocación de los actos administrativos.

⁴⁷ Derecho Administrativo. Escorcia, Jorge Flavio. Pag. 155

Hay nulidad del acto administrativo cuando es inconstitucional o ilegal. Esa nulidad la puede declarar la misma autonomía administrativa o en caso de recurso de amparo la corte suprema de justicia.

Un acto administrativo es inexistente cuando no cumple los requisitos mínimos o fundamentales de legalidad, de tal manera que el acto ni siquiera es nulo por vacíos de forma o inconstitucionalidad sino que jurídicamente ni siquiera existe.

El ejecutivo de oficio o a instancia de parte puede revocarse un acto administrativo. Por tener una acción legal sustancial. Por ser inconstitucional. O por no cumplir el cuidado con los requisitos y condiciones establecidas. La revocación es un acto administrativo unilateral.

CAPÍTULO IV

TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS ADUANEROS

TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA ADUANERA

I. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA DGA

Durante la Colonia, al crearse el puerto de El Realejo en la costa del océano Pacífico, la Corona Española estableció allí la casa de la Aduana, para cobrar el quinto Real de los embarques de las mercancías que por dicho puerto salían hacia España. Al inicio de la vida Republicana se crearon nuevas aduanas marítimas. A partir del año 1909 se crea la Recaudación General de Aduanas, institución que funcionó bajo administración de personal extranjero hasta 1958.

Al firmarse el Tratado de Integración Económica Centroamericano en 1960, se establece la creación de la Unión Aduanera y la obligación de elaborar un Código Aduanero Uniforme Centroamericano, en el cual el Servicio Aduanero se constituye como órgano rector de las aduanas en cada país de Centroamérica. A partir del año 2000, mediante la Ley creadora de la Dirección General de servicios Aduaneros y de Reforma a la ley Creadora de la Dirección General de Ingresos, nuestra institución se denomina Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA)⁴⁸

II. DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

En el artículo 6 de la Ley creadora de la Dirección General del Servicio Aduanero y de Reforma a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos, establece las funciones que tiene dicha institución.

Artículo 6:

⁴⁸ www.DGA.com.ni . 08 de Junio de 2013.

III. Funciones de la Dirección General de Aduanas

- 1) Definir las políticas, directrices y disposiciones que regulan el sistema aduanero, de conformidad con lo que establece la legislación vigente y velar porque se apliquen rigurosamente.
- 2) Dictar las disposiciones necesarias para el eficiente control, recaudación y fiscalización de los impuestos al comercio exterior y demás ingresos cuya recaudación está encomendada por ley.
- 3) Realizar las gestiones administrativas y judiciales para exigir el pago de los impuestos bajo su control e imponer, en su caso, las sanciones correspondientes.
- 4) Normar y administrar la política aduanera, fortalecerla y consolidarla bajo los criterios de modernización.
- 5) Brindar la asistencia que le soliciten las instancias que correspondan en el marco de la reciprocidad del Convenio Multilateral de Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal y otros Convenios relativos a la materia.
- 6) Planificar, dirigir, controlar, supervisar el servicio aduanero, así como el flujo de mercancías que ingresan y salen del país.
- 7) Brindar servicios aduaneros ágiles que faciliten el comercio internacional y asesorar a los usuarios sobre sus deberes y derechos ante la administración aduanera.
- 8) Verificar la correcta aplicación del valor aduanero de mercancías.

9) Ejercer controles sobre mercancías que están amparadas bajo Regímenes Aduaneros Especiales: Almacenes Generales de Depósito, Depósitos Aduaneros, Zonas Francas, Tiendas Libres, regímenes temporales y otros.

10) Requerir el auxilio judicial y policial cuando hubiere impedimento en el desempeño de las funciones y facultades que le confieren las leyes.

11) Delimitar y administrar la zona de jurisdicción aduanera de los perímetros fronterizos especiales y de las vías habilitadas, así como el establecimiento o supresiones de Aduanas y oficinas aduaneras.

12) Conforme las leyes respectivas, someter a subasta pública la mercadería en abandono y la decomisada por defraudación y contrabando aduanero.

13) Perseguir las infracciones y aplicar las sanciones correspondientes en el ámbito aduanero, de conformidad a la ley de la materia.

14) Las demás funciones que le asigne la Ley 265, Ley que Establece el Autodespacho para la Importación, Exportación y Otros Regímenes.

Las demás que le asignen otros cuerpos legales.

De igual forma el artículo 12 del Código Aduanero Uniforma Centroamericano establece de manera general las atribuciones aduaneras.

Artículo 12: ***"Para supervisar y fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones aduaneras, la Autoridad Aduanera está autorizada para visitar empresas, establecimientos industriales, comerciales o de servicios, efectuar auditorias, requerir y examinar la información de sujetos pasivos, auxiliares y terceros, necesaria para comprobar la veracidad del contenido***

de las declaraciones aduaneras, de conformidad con los procedimientos legales establecidos”.⁴⁹

Y demás atribuciones que le confiere el reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano en su artículo 5.

IV. CONCEPTO DE ADUANA

Las Aduanas son las unidades administrativas de la administración pública centralizada que depende de la Dirección General de Aduanas y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Consejo de Cooperación Aduanero define a la aduana como:

“Los servicios administrativos especialmente encargados de la aplicación de la legislación relativa a la importación y a la exportación de las mercancías y a la percepción de los ingresos públicos provenientes de los derechos e impuestos que se aplican a las mercancías”⁵⁰

Es aquel lugar establecido generalmente en las áreas fronterizas, puertos y ciudades importadoras/exportadoras cuyo propósito principal es controlar todas las entradas y salidas de mercancía, los medios en los que son transportadas y los trámites necesarios para llevarlos a cabo. Su función recae en hacer cumplir las leyes y recaudar impuestos, derechos y aprovechamientos aplicables en materia de comercio exterior.⁵¹

El Diccionario de la Real Academia Española lo define como:

⁴⁹ Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Resolución 223-2008 (COMIECO-XLIX), 25 Agosto 2008.

⁵⁰ Acosta Roca, Felipe. Trámites y Documentos en Materia Aduanera. ISEF empresa líder. 3era Ed., Enero 2005.

⁵¹ comercioyaduanas.com.mx/aduanas/aduana/62-aduana/107-que-es-una-aduana, 04 de junio de 2013.

“Oficina pública, establecida generalmente en las costas y fronteras, para registrar, en el tráfico internacional, los géneros y mercaderías que se importan o exportan, y cobrar los derechos que adeudan.”⁵²

Aduana: son los servicios administrativos responsables de la aplicación de la legislación aduanera y de la percepción de los tributos a la importación y a la exportación y que están encargados también de la aplicación de otras leyes y reglamentos relativos, entre otros, a la importación, al tránsito y a la exportación de mercancías.⁵³

V. COMPONENTES DE LA ADUANA

VI. EL GATT

GATT es la sigla que corresponde a General Agreement on Tariffs and Trade (en español, conocido como Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles).

Se trata de un convenio que fue ideado en el marco de la Conferencia de La Habana que se llevó a cabo en el año 1947 y que fue firmado un año después por 23 países, con el objetivo de fijar un conjunto de pautas de alcance comercial y concesiones arancelarias.

Como el Banco Mundial, el GATT es otra de las iniciativas que se impulsaron al término de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de regular la economía global. Según los expertos, se trata del precursor de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

La primera versión de este acuerdo es conocida como GATT 1947. En las décadas del '50 y del '60, los economistas llegaron a la conclusión de que el

⁵² Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 21 Ed. ED Espasa Calpesa, S.A., Madrid 1992, Tomo I. Pág., 47.

⁵³ Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Resolución No. 223-2008 (COMIECO-XLIX), 25 de Agosto 2008.

GATT contribuyó al crecimiento mundial gracias a las continuas reducciones de aranceles. Sin embargo, en las dos décadas siguientes ('70 y '80), el convenio sufrió una crisis ya que, ante la mayor competencia, Europa y Estados Unidos fijaron altas tasas de interés y se volcaron hacia el proteccionismo.

De todas formas, es importante destacar que el GATT y la OMC no son lo mismo. El GATT consiste en un sistema de reglas establecidas entre las naciones que forman parte de él, mientras que la OMC está valorado como una entidad de alcance internacional que se encarga, además de regular el comercio de todo el mundo, de reglar otros aspectos relacionados con los servicios y los derechos de la propiedad intelectual a nivel internacional.

En 1994, el GATT fue actualizado y se creó la OMC. Las 75 naciones nucleadas en torno al GATT y la Comunidad Europea (CE) fueron los integrantes que fundaron esta organización, que nació el primer día de enero de 1995.

La creación del GATT tenía unos objetivos claros: elevar el nivel de bienestar en todo el mundo, controlar que se optimizaran y aprovecharan adecuadamente los recursos productivos y liberar el comercio internacional.

A diferencia del BM, el GATT no se constituyó como una institución, sino como un foro de reunión entre varios países que contaba con una serie de principios básicos para su funcionamiento los cuales se basan en la unión en las políticas de los diferentes Estados y la ruptura total del bilateralismo que había sido uno de los responsables de la II Guerra Mundial.

Entre alguna de sus políticas están la de prohibir las restricciones cuantitativas y aquellas formas de subvención a la exportación como el dumping o las rebajas arancelarias. Además, obliga a los Estados miembro a mantener sus acuerdos y cumplir con los pactos internacionales en lo referente a política económica.

El GATT tiene su sede en Ginebra y se rige por un órgano llamado Asamblea, la cual a su vez cuenta con un Consejo de Representantes (resuelven las cuestiones urgentes). Desde sus orígenes las conferencias y rondas de negociación más importantes han sido la Ronda Dillon (realizada en Ginebra entre 1960 y 1962), la Ronda Kennedy (en Ginebra durante los años 1964 y 1967) y la Ronda Tokio (en Tokio en los años 1973 y 1978).⁵⁴

Naturaleza Jurídica del GATT:

El GATT es un tratado internacional que establece un conjunto de obligaciones y derechos para los países que lo han suscrito.

Los convenios comerciales no son algo nuevo en la historia. Por el contrario constituyen, una de las primeras manifestaciones de la voluntad del ser humano de colaborar para satisfacer sus necesidades. Son también un ejemplo de solución pacífica para las controversias.

Hay diversas clases de convenios comerciales. Una clasificación importante es aquella que distingue entre bilaterales y multilaterales. Igualmente se clasifican en cuanto a la materia que regulan. Dentro de los convenios comerciales más importantes, encontramos los relativos a productos básicos.⁵⁵

El GATT es el más importante de los convenios comerciales, pues cuenta en la actualidad con más de 90 países miembros que representan el 85% del comercio mundial.

Principios que rigen al GATT:

⁵⁴ Jaime Álvarez soberani. El GATT: Antecedentes y Propósitos.

⁵⁵ Víctor Álvarez de la torre. El Derecho internacional y la regulación de Productos Básicos. 2da Edición. Mexico. 1977.

Los principios que rigen la estructura normativa del Acuerdo son el de la no discriminación, el de tratamiento nacional y el de reciprocidad.

- Principio de la no discriminación: en materia de comercio internacional se traduce: "tratamiento igualitario" tratado a la entrada, salida o tránsito de productos en un territorio aduanero determinado, cualquiera que sea su origen o destino.
- Principio de tratamiento nacional: busca o persigue la "igualdad" en lo que respecta, concretamente, a nacionales y extranjeros.

No es un principio privativo del GATT, una de sus primeras formulaciones es la que se da en el convenio de París que regula la actividad industrial.

- Principio de reciprocidad: se expresa desde el preámbulo mismo del Acuerdo, al establecerse que las partes contratantes, están entrando en acuerdos recíprocos y mutuamente ventajosos.⁵⁶

VII. EL DESPACHO

Es una modalidad para el trámite de importación y exportación, en la que los interesados, a través de su agente aduanero, determinan y cumplen sus obligaciones tributarias: pago de impuestos; y no tributarias: requisitos extra fiscales.

"El Código Uniforme Centroamericano define en el Artículo 76: "El despacho aduanero de las mercancías, es el conjunto de actos necesarios para

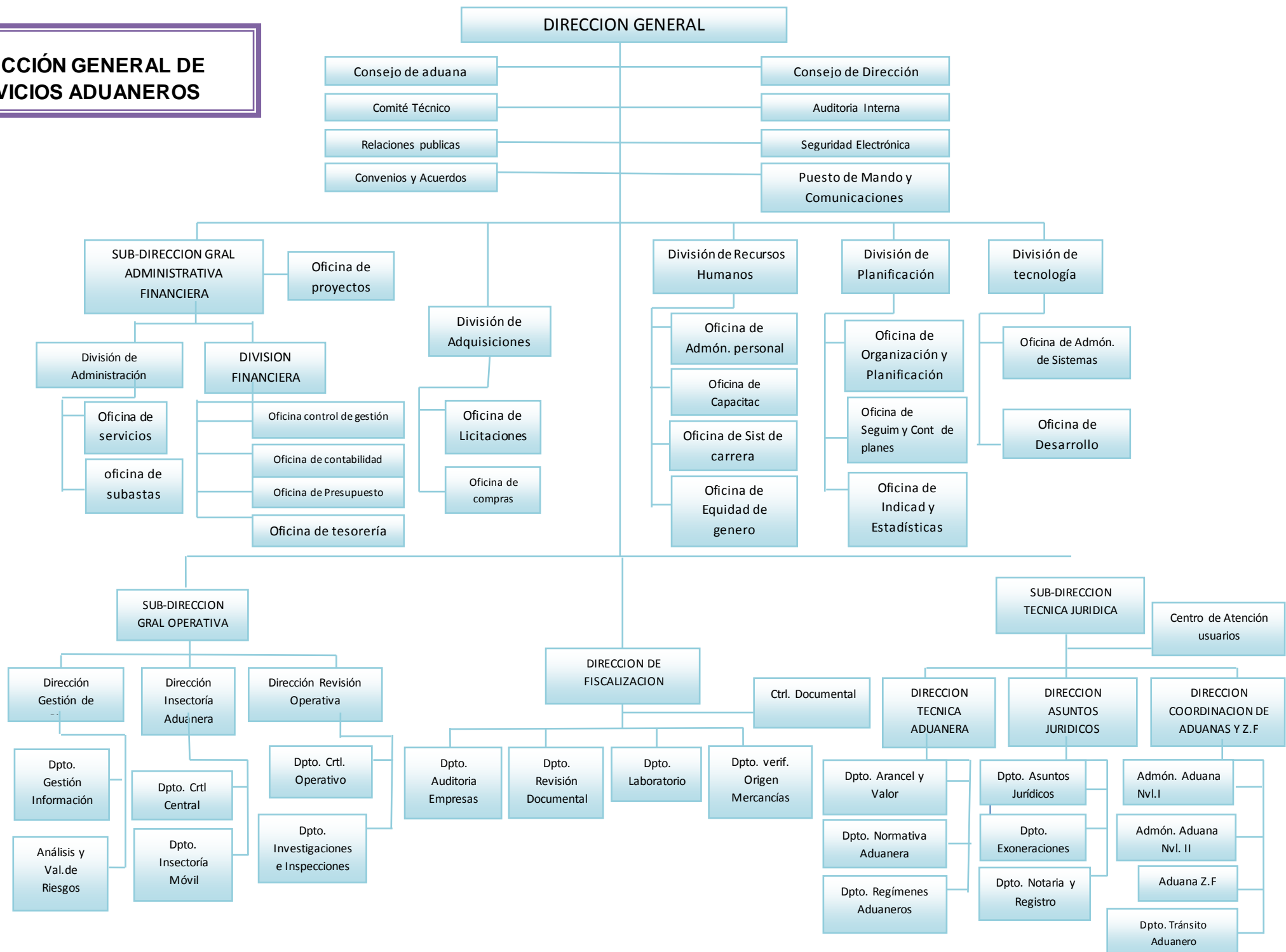
⁵⁶ Jaime Álvarez soberani. El GATT: Antecedentes y Propósitos

someterlas a un régimen aduanero, que concluye con el levante de las mismas”

En Nicaragua, el artículo 2 de **LEY No. 265**, Aprobado el 04 de Septiembre de 1997 y publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 219 del 17 de Noviembre de 1997. Define:

“En el sistema de autodespacho, los interesados deben cumplir con las obligaciones arancelarias y tributarias y no tributarias que genera la entrada o salida de la mercancía. La presente Ley indicará los casos en que las autoridades aduaneras determinarán las obligaciones de los contribuyentes.

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS



VIII. PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA ADUANERA

La coherencia con el que están planteados los recursos en el CAUCA y el RECAUCA constituyen el sistema de recursos aduaneros que presupone un derecho cuyo fundamento constitucional se sustenta en el derecho de petición establecido en el artículo 52 de la Constitución Política de la Republica de Nicaragua.

La legislación aduanera en Nicaragua establece los Recursos de Revisión y Apelación como mecanismos de impugnación en contra de las resoluciones, sanciones y cualquier otra disposición emitida por la administración aduanera que ponen en riesgo los derechos de los administrados, así se establece en el artículo 623 y 625 del reglamento de aplicación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano.

En el Capítulo II Título VII del Código Aduanero Uniforme Centro Americano, de las reclamaciones y los Recursos Aduaneros y el capítulo I, Recursos del Título VII impugnación y resoluciones del acto del servicio aduanero, del reglamento al Código Uniforme Centro Americano encontramos los procedimientos a seguir para la tramitación de los recursos administrativos en materia aduanera.

El artículo 127 del CAUCA y 623 al 628 del RECAUCA establecen la base legal sobre la cual debemos regirnos para la reclamación siempre que las impugnaciones que se interpongan sean cuando se ha agraviado a una persona por resoluciones o actos finales de las autoridades del servicio aduanero. Al respecto el artículo 127 señala: “... ***Toda persona que se considere agraviada por las resoluciones o actos finales de las autoridades del servicio aduanero en la forma y tiempo que señala el reglamento.***”

El artículo 623 del RECAUCA establece que solamente serán impugnables los actos finales de la autoridad aduanera que determinen tributos o sancione

y que las mismas deben hacerse ante la autoridad superior del servicio aduanero, es decir el Director General de Servicios Aduaneros. Así mismo el artículo 624 señala las mismas condiciones para aquellas resoluciones que emita la autoridad superior de servicios aduaneros para que se eleve a la autoridad superior para su resolución.

La Ley 265 Ley de Auto despacho en su artículo 75 asume todos los actos que en cualquier forma afecte los derechos de los contribuyentes, es decir trasciende los tributos o sanciones que especifica la norma comunitaria: ***“los actos y resoluciones que emita la Dirección General de Aduanas por los que se determinen tributos, intereses moratorios, sanciones o afecten en cualquier forma los Derechos de los contribuyentes, podrán ser impugnados...”***

La forma y tramitación de los recursos se establecen en el artículo 627 del RECAUCA cuyos requisitos son de obligatorio cumplimiento pues la falta de ello sea por error u omisión deberán ser subsanadas al tenor del artículo 628 del RECAUCA: ***“Presentado el recurso y cumplidas las formalidades establecidas al órgano que compete resolver continuará con el trámite que corresponde o mandará a subsanar los errores u omisiones de cualquiera de los requisitos señalados en el artículo 27 de este reglamento dentro del plazo de 3 días posteriores a su interposición”.***

La ley 339 “Ley Creadora de la Dirección de Servicio Aduaneros y de Reforma a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos” en su artículo 67 establece que: ***“Toda persona que se considere agraviada por las resoluciones o actuaciones de las autoridades fiscales o aduaneras, podrá interponer los recursos administrativos establecidos en las leyes de la materia.”***

En caso de recursos contra la autoridad aduanera se estará lo establecido en el Código Aduanero Uniforme Centro Americano y su reglamento (CAUCA-RECAUCA) vigente.

Como ya hemos señalado en el desarrollo de nuestro trabajo y tal como lo establece la Doctrina, el recurso es el medio procesal concedido por el Estado mismo a cualquiera de las partes procesales, que se considere agraviada o perjudicada por una resolución. Pudiendo acudir ante el órgano competente superior con el propósito de volver a discutir la situación específica que el agraviado o perjudicado aduce, con el objeto de que la resolución objeto del recurso sea rectificadora en todo o en parte a su favor. Al respecto, nuestra Constitución Política establece en el artículo 34, numeral 9 lo siguiente: ***“Todo procesado tiene Derecho, en igualdad de condiciones a las siguientes garantías mínimas....9 A recurrir ante un tribunal superior, a fin de que su caso sea revisado cuando hubiese sido condenado por cualquier delito”***

IX.Elementos Generales del Recurso

EL OBJETO DEL RECURSO. Se debe establecer con claridad el acto que se recurre, alegando las infracciones del ordenamiento jurídico en que se supone se ha incurrido, que son los motivos del recurso, solicitando a su vez la declaración de nulidad o anulación del acto o la revocación del mismo.

LUGAR. El Recurso deberá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna como ante el funcionario superior, en tanto que la ley establece que es el único competente para resolverlo.

TIEMPO. Será computado de conformidad a lo establecido por la ley, misma que en forma taxativa establece un plazo de diez días siguientes a la notificación de la resolución o acto impugnado. Así lo establece el artículo 623 y 624 del RECAUCA.

FORMA. El Recurso deberá cumplir con los requisitos y formalidades establecidas por la ley, por tanto, éste debe ser presentado por escrito y cumplir con los requisitos que establece el artículo 627 del RECAUCA.

“ Los recursos se interpondrán por escrito en papel común y deberán contener al menos lo siguiente:

- a) Designación de la autoridad, funcionario o dependencia a que se dirija.***
- b) Nombres, apellidos, calidades o generales de ley del recurrente; cuando no actúe en nombre propio debe además acreditar su representación.***
- c) Dirección o medios para recibir notificaciones***
- d) Identificación del acto o disposición recurrida y las razones en que se***
- e) fundamenta la inconformidad con el mismo, haciendo relación circunstanciada de los hechos y de las disposiciones legales en que sustenta su petición.***
- f) Petición que se formula.***
- g) Fecha y firma.”***

El incumplimiento, sea este por error u omisión de cualesquiera de los requisitos no es causal para la inadmisibilidad del mismo, debiendo el órgano o funcionario competente conceder en el plazo de tres días para subsanar el defecto, de conformidad a lo establecido en el Artículo 628 RECAUCA, para lo cual deberá emitir un auto en el que concede al recurrente el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de su notificación para evacuar las prevenciones.

X. DE LAS DILIGENCIAS

Con el propósito de que la instancia administrativa dé el trámite correspondiente y por tanto resuelva con agilidad y certeza, el RECAUCA establece las diligencias para mejor resolver en el artículo 626, que señala:

El plazo para emitir resolución definitiva, será suspendido, cuando la autoridad que conozca de un recurso, ordene de oficio o a petición de parte, la práctica de alguna diligencia tendiente a obtener elementos que coadyuven

a resolver la cuestión puesta a su conocimiento, hasta que tal diligencia se hubiera efectuado.

Se establece un plazo de diez días para la práctica de las diligencias, pudiendo éste ser prorrogado por otro plazo igual (10 días) por una sola vez; a solicitud del recurrente siempre que sea debidamente justificado por el mismo. Contra la providencia que ordene las diligencias para mejor resolver, no cabe recurso alguno.

La legislación nacional en el artículo 30 de la Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingreso establece: ***“Recursos ante la DGA: Toda persona que se considere agraviada por las resoluciones o actuaciones de las autoridades aduaneras, podrá interponer los Recursos Administrativos establecidos en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano CAUCA y su Reglamento y en la Ley número 265, Ley que establece el Autodespacho para la Importación, Exportación y otros regímenes....”***

“El Artículo 127 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano señala: ***Toda persona que se considere agraviada por las resoluciones o actos finales de las autoridades del servicio aduanero, podrá impugnarlas en la forma y tiempo que señale el Reglamento.”***

El Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano establece los tipos de Recursos Administrativos Aduaneros y su tramitación de los cuales nos referimos:

XI. DEL RECURSO DE REVISIÓN

El artículo 623 del RECAUCA establece el procedimiento para la tramitación del Recurso de Revisión ante la Autoridad del Servicio Aduanero.

El Recurso de Revisión se podrá interponer contra las Resoluciones o actos finales dictados por la autoridad aduanera que determinen tributos o sanciones. El mismo podrá ser interpuesto por el consignatario o persona destinataria del acto. El plazo para interponer el recurso de revisión es de **diez días hábiles** siguientes a la notificación de la resolución respectiva. Deberá interponerse ante la autoridad que emitió el acto o resolución impugnada o ante la autoridad superior del servicio aduanero. En ambos casos, se deberá remitir el expediente ante el Director General de Servicios Aduaneros en el plazo de cinco días, posteriores a la recepción del recurso,, el que resolverá dentro del plazo de veinte (20) días siguientes a la recepción del Expediente.

La tramitación del Recurso de Revisión requiere de formalidades que claramente se establecen en el artículo 627 del RECAUCA literal "d" : ***"...Identificación de la resolución o acto recurrido y las razones en que se fundamenta la inconformidad con el mismo, haciendo relación circunstanciada de los hechos y de las disposiciones legales en que sustenta su petición..."***

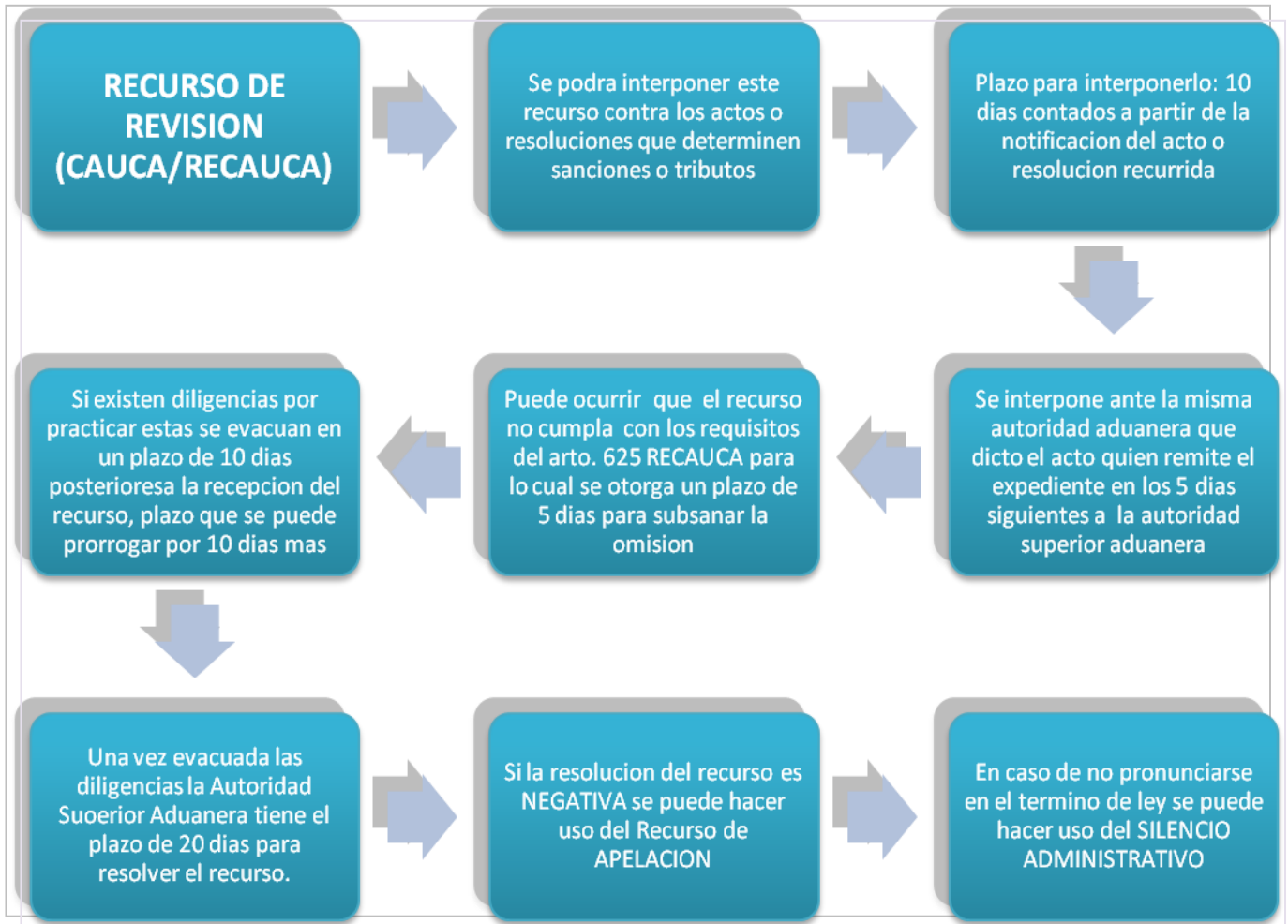
La falta de resolución y notificación de la misma al recurrente en el plazo establecido, produce el silencio administrativo positivo, es decir, a favor del recurrente, conforme a lo establecido en el artículo 79 de la ley que establece el Autodespacho para la Importación, Exportación y otros Regímenes, la que establece ***"....Transcurrido este plazo sin pronunciamiento escrito de la autoridad recurrida debidamente notificado al recurrente, se entenderá que la resolución es favorable al reclamante."***

Siendo que la autoridad competente para resolver el Recurso de Revisión es el Director General de Servicios Aduaneros, es necesario destacar, que cuando el recurrente lo interpone ante la autoridad que emitió la resolución o acto impugnado , este no tiene facultad para rechazarlo o declararlo improcedente, Es obligación de éste, remitir el expediente ante la autoridad superior para que resuelva de conformidad al Artículo 628 del RECAUCA.

“...El órgano al que compete resolver continuará con el trámite que corresponda o mandará a subsanar los errores u omisiones de cualquiera de los requisitos señalados en el Artículo 627 de este Reglamento, dentro del plazo de tres días posteriores a su interposición. En este caso, se emitirá el correspondiente auto de prevención el cual deberá notificarse al recurrente, quien tendrá un plazo de cinco días contados desde el día siguiente a la notificación para evacuar las prevenciones. Si las prevenciones formuladas no fueran evacuadas en la forma requerida y dentro del plazo antes señalado, el recurso será declarado inadmisibile.

La admisión del recurso suspende la ejecución de la resolución recurrida y no se exigirá garantía ni pago alguno como requisito para admitir los recursos.”

XII. FLUJOGRAMA PARA LA TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN



XIII. DEL RECURSO DE APELACIÓN

El artículo 625 del RECAUCA, establece el Recurso de Apelación, el que se interpone ante la autoridad superior del Servicio Aduanero, la que se limitará a elevar las actuaciones en el término de tres días siguientes a la interposición del Recurso al órgano de decisión señalado en el Artículo 128 del CAUCA y que refiere al Tribunal Aduanero en cada uno de los Estados Parte, el que se constituye como un órgano de decisión y es el que deberá conocer en última instancia de los Recursos Administrativos Aduaneros

Al respecto, es necesario destacar; que nuestro trabajo se hace en el contexto en el que aún no existía en nuestro País Tribunal Aduanero, pero por disposición del CAUCA IV en el artículo 128 expresa: **“Se crea el Tribunal Aduanero en los estados partes como órgano de decisión autónomo a los Servicios Aduaneros, el que conocerá en última instancia en la vía administrativa de los Recursos en materia aduanera, conforme lo señale el Reglamento.”**, El lunes 9 de julio del año dos mil doce se publicó en la Gaceta Diario Oficial número 128 la Ley 802 Ley Creadora del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo.

De tal forma que antes de la existencia del Tribunal Aduanero los órganos de decisión que fungían en Nicaragua: eran:

1. La Comisión Nacional Arancelaria y Aduanera, CNAA, para conocer de los Recursos de Apelación por diferencias en la clasificación arancelaria o de valoración aduanera.
2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público: Para cualquier otra reclamación diferente de las señaladas en el numeral anterior.

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

Son recurribles de Apelación, las resoluciones o actos finales de la autoridad superior o cualquier acto o resolución que determine efectos jurídicos lesivos a los intereses, derechos y garantías del administrado del Servicio Aduanero.

Son objeto de impugnación en el Recurso de Apelación los tributos, sanciones o cualquier otro que cause agravio al administrado siempre que estén en relación con regímenes, trámites, operaciones y procedimientos aduaneros.

La inadmisibilidad de un recurso de revisión por parte del Director General de Servicios Aduaneros., conforme el artículo 624 del RECAUCA que señala: :

“Contra las resoluciones o actos finales que emita la autoridad superior del Servicio Aduanero, por los que se determinen tributos, sanciones o que causen agravio al destinatario de la resolución o acto, en relación con los regímenes, trámites, operaciones y procedimientos regulados en el Código y este Reglamento, o que denieguen total o parcialmente el recurso de revisión, cabrá el recurso de apelación, el que deberá interponerse dentro del plazo de diez días siguientes a la notificación de la resolución o acto final respectivo.”

La interposición del Recurso deberá hacerse dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación del acto o resolución que se impugna ante la Comisión Nacional Arancelaria y Aduanera, en materia de Clasificación y Valor o ante el Ministro de Hacienda y Crédito Público, cuando se trate de otras materias. De conformidad con el artículo 625 RECAUCA:

“ El Recurso de Apelación se interpondrá ante la autoridad superior del servicio aduanero, la que se limitará a elevar las actuaciones al órgano de decisión que refiere el artículo 128 del Código, en los tres días siguientes a la interposición del Recurso.

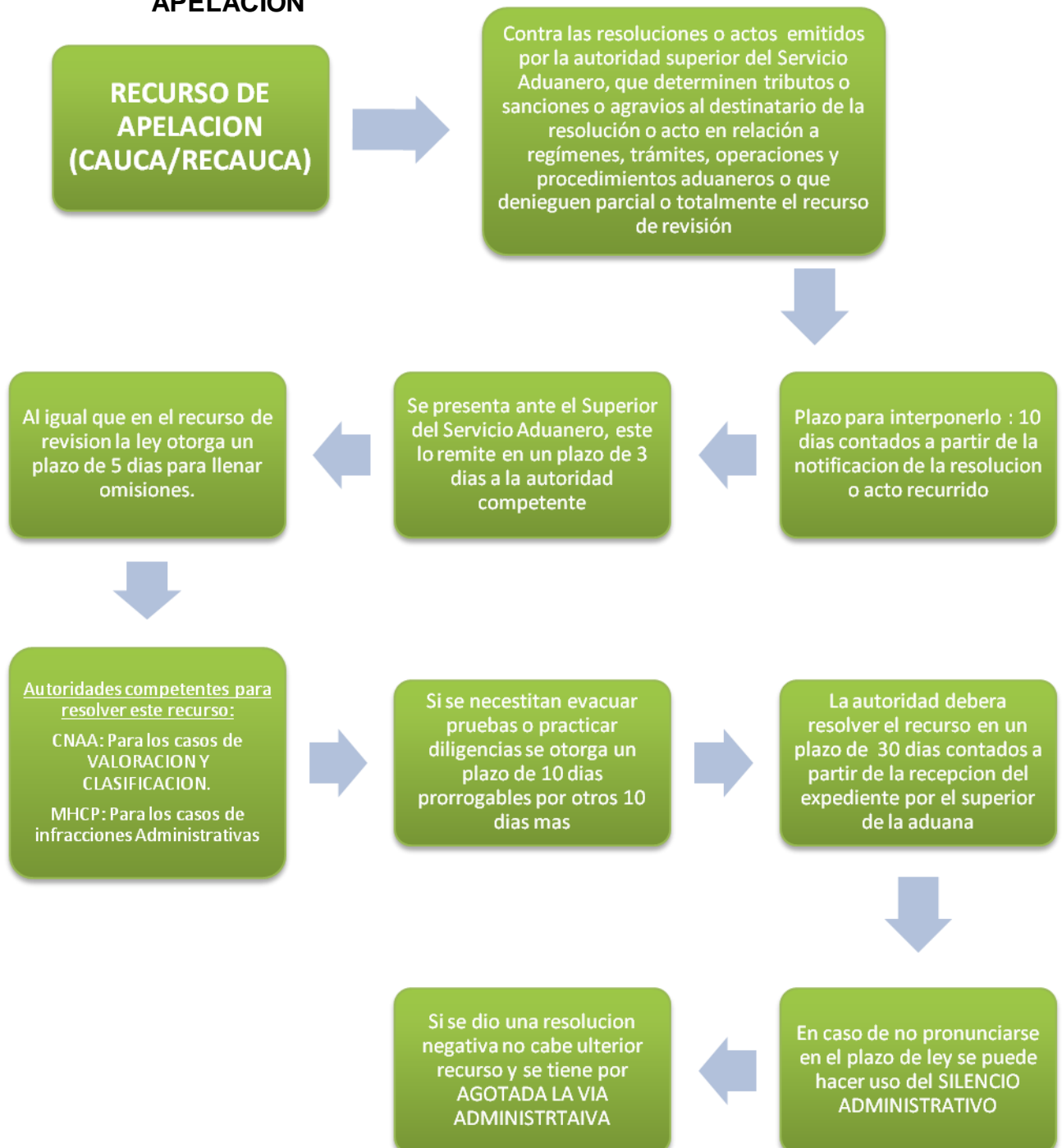
Interpuesto el Recurso el órgano competente deberá resolver en un plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la recepción del Recurso. El órgano competente que resuelva dará por agotada la vía administrativa.”

Las formalidades para la interposición del Recurso de Apelación son las establecidas en el artículo 627 del RECAUCA..

El órgano competente deberá resolver en un plazo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción del recurso.

Una vez que el órgano competente emite resolución, se dará por agotada la vía administrativa.

XIV. FLUJOGRAMA PARA LA TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN



XV. SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO

El CAUCA regula como norma supletoria en el artículo 133:

“En lo no previsto en el presente Código y su reglamento, se estará lo dispuesto por la legislación nacional”

En tal sentido la legislación nacional en la Ley que Establece el Autodespacho para la Importación, Exportación y otros Regímenes en los artículos 79 y 82 dispone que habiendo transcurrido el plazo sin pronunciamiento escrito debidamente notificado el recurrente se deberá entender que la resolución es favorable al reclamante, es decir opera el silencio administrativo positivo.

CAPÍTULO V

DERECHO COMPARADO

TABLA DE MARCO LEGAL EN CENTROAMERICA

PAIS	MARCO LEGAL
Guatemala	<ul style="list-style-type: none"> • Constitución Política de la República de Guatemala 1985, • Código Aduanero Uniforme Centroamericano CAUCA IV y RECAUCA. Arto.1 Del Tratado General de integración Económica Centroamericana. • Resolución de Directorio 128-2013. • Acuerdo Gubernativo 317-2013, • Ley Nacional de Aduanas. • Código de Aduana Guatemalteco. • Régimen de transito internacional.
El Salvador	<ul style="list-style-type: none"> • Constitución Política de 1983. • Ley orgánica de la Dirección General de Aduana, • Ley de almacenaje, • Ley de equipaje de viajeros procedentes del exterior. • Reglamento funcional orgánico de la Dirección General de Rentas de aduana, • Reglamento Nacional del código aduanero uniforme Centroamericano. • Ley de Registros de importadores, • Ley de simplificación aduanera. • El Cauca y Recauca.
Honduras	<ul style="list-style-type: none"> • Constitución Política, • Ley de Aduanas de Honduras • Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento.

PAIS	MARCO LEGAL
Nicaragua	<ul style="list-style-type: none"> • Constitución Política de 1987 capitulo IX, • Ley de valoración en Aduana y de reforma a la • Ley numero 265 Ley que Establece el Autodespacho para la Importación, Exportación y Otros Regímenes. • Ley numero 339 Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos, Ley numero 382 Ley de Admisión Temporal Para Perfeccionamiento Activo y de Facilitación de las Exportaciones, CAUCA IV Y SU REGLAMENTO • Ley sobre defraudación y contrabando aduanero • Ley numero 42.
Costa Rica.	<ul style="list-style-type: none"> • Constitución Política de 1949 Titulo XII, • Ley General De aduanas Y Reglamento a la Ley General de Aduanas, • Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Ley 8373 Ley de modificación a la Ley General de Aduana. • Reglamento a la Ley General de Aduanas. Modificación al Reglamento de la Ley General de Aduanas.
Panamá	<ul style="list-style-type: none"> • Constitución Política de 1972 reformada en 1978 y 1903, • Decreto Ley No. 1 del 13 de febrero del 2008, • decreto Ley que crea la autoridad Nacional de Aduana. • Resolución No.5 del 24 de Diciembre del 2008. Gaceta No 26269, que adopta el Manual de Organización y Funciones de la autoridad Nacional de Aduanas.

PROCEDIMIENTO CENTROAMERICANO DE LOS RECURSOS ADUANEROS

País	Tipo de Recurso	Plazo para interponerlo	Autoridad competente	Resolución
Guatemala	Recurso de Reconsideración	3 días siguientes a la notificación de la resolución respectiva	Administración Aduanera que emitió el acto o resolución.	10 Días
	Recurso de Revisión	3 días siguientes a la notificación de la resolución respectiva	Se presenta ante la autoridad que dictó el acto y este lo remite al Superior del Servicio Aduanero	15 días
	Recurso de Apelación	10 días posteriores a la notificación de la resolución respectiva.	Autoridad Superior del Servicio Aduanero	30 días contados desde la recepción del recurso.
	Recurso de Revocatoria	10 días posteriores a la notificación de la resolución respectiva.	Funcionario que dictó la resolución, este lo remite al superior.	30 días

El Salvador	Ocurso	3 días. Procede cuando la autoridad no resolvió dentro de los 15 días siguientes a la interposición del Recurso de Revocatoria.	Director del SAT	15 días
	Recurso de Reconsideración	10 días hábiles posteriores a la notificación de la resolución aludida.	Administrador de Aduana	20 días Hábiles
	Recurso de Revisión	10 días hábiles posteriores a la notificación de la resolución del recurso de Reconsideración	Director General de Aduanas	20 días Hábiles
	Recurso de Apelación	10 días hábiles posteriores a la notificación denegatoria de recurso de Reconsideración y de revisión	Se presenta ante el Director General de Aduana, este lo remite al Tribunal de Apelaciones de los Impuestos internos.	30 días.
Honduras	Recurso de Reposición	10 días siguientes a la notificación de la resolución impugnada	Órgano o autoridad que dicto el acto o resolución.	10 días

Nicaragua	Recurso de Apelación	15 días	Se presenta ante el órgano o autoridad que dictó la resolución recurrida y este lo remite al Superior.	30 días
	Recurso de Revisión	Es un recurso extraordinario que se interpone dentro de los dos años siguientes a la notificación de la resolución recurrida	Secretario de Estado competente	2 meses contados desde su interposición.
	Recurso de Reposición (Ley 265)	24 horas siguientes a la resolución impugnada	Funcionario que dictó la resolución	5 días
	Recurso de Apelación (Ley 265)	Inmediatamente denegado el Recurso reposición.	Director General de Aduanas	30 días hábiles
	Recurso de Revisión	10 días siguientes a la notificación de la resolución impugnada	Autoridad que dictó el acto o ante la autoridad superior del Servicio	20 días

Costa Rica			Aduanero		
	Recurso de Apelación	10 días posteriores a la notificación de la resolución respectiva.	Superior del Servicio Aduanero		30 días
	Recurso de Reconsideración	3 días posteriores a la notificación de la resolución que se impugna	Autoridad aduanera competente		3 días
	Recurso de Apelación	3 días posteriores a la notificación de la resolución que se impugna o de la que deniega el Recurso de Reconsideración.	Se presenta ante la Aduana competente y este la remite al Tribunal Aduanero Nacional		15 días prorrogables por un plazo igual.
Panamá	La legislación panameña no	El afectado puede hacer sus reclamos o	Administración Regional, Comisión		

contempla con exactitud los tipos de recursos que se interponen contra las decisiones de la autoridad aduanera, solamente otorga el derecho a recurrir o impugnar dichas decisiones.

impugnaciones ante la el Administrador Regional respectivo en un plazo de 5 días hábiles siguientes al registro de la discrepancia. Una vez transcurrido este plazo la Administración Regional deberá resolver una vez transcurridos los 5 días. Contra las decisiones de la Administración Regional cabe recursos dentro de los 8 días hábiles siguientes ante el pleno de la Comisión Arancelarias

Arancelaria

I. DERECHO COMPARADO LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN CHILE

Históricamente las aduanas tuvieron su origen en la necesidad de controlar el paso de mercancías y personas por las fronteras de los países. Otro de los objetivos fue el recaudar recursos para el Estado, principalmente en la importación aunque también existieron casos de derechos en la exportación (caso del Salitre en Chile).

La aduana en Chile y América existen desde la época colonial, con distintos nombres, siendo lo más relevante la creación de la Real Aduana en el año 1770, y a la reorganización de esta producida en Santiago en 1774 y posteriormente el la aduana de Valparaíso en 1795.

En la Ordenanza de Aduana de 1811 se aprecia la importancia que tenía la aduana, ya que la primera legislación que dicta la naciente República está vinculada con el comercio exterior y a las facultades que se le asignan a aduanas.

La Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas establece en su artículo No. 1: ***“Vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las costas, fronteras y aeropuertos de la República, de intervenir en el tráfico internacional para los efectos de la recaudación de los impuestos a la importación y exportación y de generar las estadísticas de ese tráfico, sin perjuicio de las demás funciones que le encomienden las leyes”.***

La complejidad y sofisticación de los procedimientos aduaneros hizo necesaria la participación de agentes externos con intermediarios entre la aduana y los particulares.

El paso del tiempo, el avance tecnológico, las nuevas orientaciones, necesidades y tendencias determinaron que el agente de aduana asumiera el rol de auxiliar de la función pública aduanera investido del principio de buena fe.

La actual Ordenanza de Aduanas, en su artículo 220, define al agente de aduanas como: ***"Un profesional auxiliar de la función pública aduanera, cuya licencia lo habilita ante la aduana para prestar servicios a terceros como gestor en el despacho de las mercancías"***.

El agente de aduana hace de la actividad del despacho aduanero su profesión habitual, se prepara para ello, crea una empresa de servicio, tiene una oficina destinada a esta actividad y una infraestructura física y técnica importante, además de profesionales y auxiliares altamente especializados en la materia.

El agente de aduanas y sus empleados están obligados a tener conocimientos especializados en diversas materias:

1. Merciología
2. Legislación Aduanera
3. Arancel Aduanero
4. Valoración de Mercancías
5. Tratados Internacionales de Comercio
6. Otras Materias Vinculadas con Comercio Exterior

Este Ministerio de fe se extiende a otras materias, por cuanto hace fe en lo declarado en los documentos de destinación aduanera, por lo que se transforma en el certificador real de la legalidad de la mayor parte de las operaciones aduaneras.

El agente de aduana es mandatario:

Así lo establece expresamente la Ordenanza de Aduanas que señala que su licencia, le habilita para prestar servicios a terceros como gestor del despacho de mercancías. La actividad o función específica es actuar como mandatario de terceros ante el servicio de aduanas y demás servicios y organismos que intervienen en el comercio exterior.

Responsabilidad solidaria: responde del valor de los gravámenes aduaneros hasta tres años de efectuada la operación, ampliable a cinco años cuando se acredita dolo o mala fe.

Este cumple un triple rol: auxiliar publico, ministro de fe y mandatario, esto es, por una parte cumple funciones de interés publico y por otra parte representa a los dueños, consignantes o consignatarios de mercancías, que son objeto de destinaciones aduaneras, es el intermediario obligado entre estos y el servicio de aduanas .

Los agentes de aduanas y sus colaboradores, permiten al Estado cumplir su función pública fiscalizadora y paralelamente, garantizan a los particulares un trato justo, igualitario y no discriminatorio.

Siendo el agente de aduana un auxiliar de la función publica, ministro de fe, y al mismo tiempo mandatario debe gozar de independencia en el ejercicio de sus funciones, a fin de poder ejercer correctamente tanto su función fiscalizadora, el ministerio de fe como el resguardo a los intereses de sus clientes.

Acto Administrativo

La ley número 19.880 "Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado" en el artículo 3 define: el acto administrativo como las ***"decisiones formales que emitan los órganos de la administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública"***.

En el ordenamiento jurídico chileno, existen vías administrativas y judiciales de impugnación de los Actos Administrativos, los que son denominados Recursos. Estos Recursos son los ordinarios de reposición y jerárquicos, ambos mecanismos establecidos para impugnar el acto ante la misma autoridad que los dictó o ante el superior jerárquico, a través de los cuales se puede revisar no solo la legalidad de la actuación legislativa sino también la oportunidad o conveniencia de la misma. Conforme lo establecido en los artículos uno y once de la ley orgánica constitucional, de bases generales de la administración del Estado y el artículo 59 de la ley 19.880: Sobre bases de los procedimientos administrativos.

La legislación contempla el Recurso extraordinario de Revisión, procedimiento administrativo excepcional establecido en el ordenamiento jurídico que permite la revisión de la decisión Administrativa.

Encontramos las denominadas vías judiciales de impugnación que las leyes chilenas denominan Acciones o Acciones jurisdiccionales, y corresponden a los procesos administrativos, conforme los artículos 2 y 10 de la Ley número 18.575 Ley orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y artículos 15 y 54 de la Ley de bases de los procedimientos administrativos.

Las principales fuentes legales del Derecho Aduanero en Chile son, entre otros:

- a) La Ordenanza de Aduana con las denominadas Tasas.
- b) La Ley 18525 con Derechos Compensatorios, Sobretasas transitorias, medidas Salvaguardias, etc.
- c) La Ley 828/74 y sus modificaciones, con los impuestos aplicables a los tabacos manufacturados.
- d) El D.L.825/74 con impuestos como el IVA y los Adicionales (también llamados impuestos al lujo) Impuestos, gravámenes, derechos, tasas, etc.,

Es interés nuestro efectuar un análisis del Derecho Aduanero y sus Recursos Administrativos, con el propósito de efectuar un análisis comparado de recursos administrativos en materia aduanera. Que nos permita conocer el desarrollo de nuestra legislación, con relación a los otros países Latinoamericanos.

En la legislación Chilena, no es ajeno hablar de los Recursos Administrativos en materia Aduanera, ya que en todos los países del mundo se realizan intercambios comerciales, principalmente en países mas desarrollados que el nuestro.

Un dato importante es la ley N 20.322, "LEY ORGÁNICA DE TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANERO. El artículo tercero de esta ley introduce modificaciones a la Ordenanza de Aduanas, que en lo principal reemplaza el Título VI del Libro II, relativo a las reclamaciones, las cuales entrarán gradualmente en vigencia conforme a lo señalado en el artículo 1 transitorio de dicha ley.

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 131 de la misma ley sobre devolución administrativa de derechos aduaneros, intercalado a la Ordenanza de Aduanas por el artículo tercero N 7 de la citada ley, rige a contar de la fecha de publicación del texto legal en el Diario Oficial, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 transitorio.

En Chile la base legal de los Recursos Aduaneros se encuentra en la ordenanza de aduanas y la Ley Orgánica de Aduanas, pero en ellas solamente se mencionan los recursos y nos remiten a esta nueva ley 20.322, que se denomina Ley que Fortalece y Perfecciona la Jurisdicción Tributaria y Aduanera, conocida también como "Ley Orgánica de tribunales tributarios y Aduaneros".

Regula los recursos en su TÍTULO VI: De las materias de competencia de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, de la Reposición Administrativa, del Procedimiento de Reclamación y del Procedimiento Especial de Reclamo por Vulneración de Derechos.

En dicho título se encuentra todo lo relacionado a los tipos de reclamaciones que el ciudadano puede hacer, además se establecen los distintos procedimientos y plazos, podemos afirmar con toda seguridad que la Legislación Chilena en materia de Recursos Aduaneros es más compleja que de Nicaragua, pero más completa, ya que en este país existen tribunales especiales para asuntos que tienen que ver directamente con la Aduana.

A diferencia de nuestro país en Chile existen órganos especializados en materia aduanera, partiendo que existen diferentes órganos que conocen de los Recursos y que son independientes entre sí, a diferencia de nuestro país, que la misma autoridad que dicta el acto recurrido, este conoce y resuelve el Recurso.

Dichos órganos están regulados en el Ordenanza Aduanera en sus artículos 117, 118 y 119, esto es un indicativo de la importancia que se le da al quehacer aduanero en ese país y del gran avance que existe en materia legal y en especial las garantías que se brindan a la población al momento que sus derechos son violentados por una autoridad.

II. TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS

En primer orden están los tribunales tributarios y aduaneros quienes tendrán competencia para conocer de los reclamos en materia de:

- a. Liquidaciones, cargos y actuaciones que sirvan de base para la fijación del monto o determinación de diferencias de derechos, impuestos, tasas o gravámenes.
- b. Clasificación y/o valoración aduanera de las declaraciones de exportación, practicada por el Servicio de Aduanas.
- c. Actos o resoluciones que denieguen total o parcialmente las solicitudes efectuadas en conformidad al Título VII del Libro II.
- d. Las demás que establezca la ley.

Será competente para conocer de las reclamaciones señaladas en el inciso anterior, el Tribunal en cuyo territorio jurisdiccional se encuentre la autoridad aduanera que hubiere practicado la actuación que se reclama.

III. CORTE DE APELACIONES:

En segundo orden están las Cortes de Apelaciones de conformidad con el artículo 118, se establece que conocerán en segunda instancia de los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los tribunales tributarios y aduaneros.

IV. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

Un último órgano que conoce de los reclamos lo contempla el artículo 119 de la Ordenanza de Aduanas, en él se establece que la Corte Suprema conocerá de los Recursos de Casación, que se den contra las resoluciones dictadas por las Cortes de Apelaciones.

V. LA TRAMITACION DE LOS RECURSOS ADUANEROS EN CHILE:

Será procedente el recurso de reposición administrativa, en conformidad a las normas del Capítulo IV de la ley N° 19.880, con las siguientes modificaciones:

- a. El plazo para presentar la reposición será de quince días.
- b. La reposición se entenderá rechazada en caso de no encontrarse notificada la resolución que se pronuncia sobre ella dentro del plazo de cincuenta días contado desde su presentación.
- c. La presentación de la reposición no interrumpirá el plazo para la interposición de la reclamación judicial contemplada en el Párrafo siguiente.

No serán procedentes en contra de las actuaciones a que se refiere el inciso primero los recursos jerárquico y extraordinario de revisión.

VI. DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN

Toda persona podrá reclamar de las actuaciones, la reclamación deberá deducirse dentro del plazo de noventa días contado desde la notificación del acto que se reclama, sólo podrán actuar las partes por sí o por medio de sus representantes legales o mandatarios.

La reclamación deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Consignar el nombre o razón social, número de Rol Único Tributario, domicilio, profesión u oficio del reclamante, y, en su caso, de la o las personas que lo representan y la naturaleza de la representación.
2. Precisar sus fundamentos.
3. Presentarse acompañada de los documentos en que se funde, excepto aquellos que por su volumen, naturaleza, ubicación u otras circunstancias, no puedan agregarse a la solicitud.
4. Contener, en forma precisa y clara, las peticiones que se someten a la consideración del Tribunal.

Si no se cumpliere con los requisitos antes enumerados, el Juez Tributario y Aduanero dictará una resolución, ordenando que se subsanen las omisiones en que se hubiere incurrido, dentro del plazo que señale el tribunal, el cual no podrá ser inferior a tres días, bajo apercibimiento de tener por no presentada la reclamación. Respecto de aquellas causas en que se permita la litigación sin patrocinio de abogado, dicho plazo no podrá ser inferior a quince días.

La representación del Fisco en los procesos jurisdiccionales seguidos en conformidad a este Título corresponderá exclusivamente al Servicio que para todos los efectos legales tendrá la calidad de parte.

Los plazos de días que se establecen comprenderán sólo días hábiles.

Las resoluciones que dicte el Tribunal Tributario y Aduanero se notificarán a las partes mediante la publicación de su texto íntegro en el sitio en Internet del Tribunal.

Se dejará testimonio en el expediente y en el sitio en Internet de haberse efectuado la publicación y de su fecha. Los errores u omisiones en dichos testimonios no invalidarán la notificación.

Las notificaciones al reclamante de las sentencias definitivas, de las resoluciones que reciben la causa a prueba y de aquellas que declaren inadmisibile un reclamo, pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, serán efectuadas por carta certificada.

Del mismo modo, aquellas que se dirijan a terceros ajenos al juicio. En estos casos, la notificación se entenderá practicada al tercer día contado desde aquél en que la carta fue expedida por el tribunal.

Para efectos de las notificaciones el reclamante deberá designar, en la primera gestión que realice ante el Tribunal, un domicilio dentro del radio urbano de una localidad ubicada en alguna de las comunas de la Región sobre cuyo territorio aquél ejerce competencia, y esta designación se considerará subsistente mientras no haga otra, aun cuando de hecho cambie su morada. Si se omite efectuar esta designación, el Tribunal dispondrá que ella se realice en un plazo de cinco días.

La notificación al Servicio de la resolución que le confiere traslado del reclamo se efectuará por correo electrónico, a la dirección que el Director Nacional, los Directores Regionales y los Administradores de Aduanas deberán registrar ante el Tribunal Tributario y Aduanero de su jurisdicción.

Del reclamo se conferirá traslado al Servicio por el término de veinte días. La contestación del Servicio deberá contener una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya, y las peticiones concretas que se someten a la decisión del Tribunal Tributario y Aduanero.

Vencido el plazo, haya o no contestado el Servicio, el Tribunal Tributario y Aduanero, de oficio o a petición de parte, deberá recibir la causa a prueba si hubiere controversia sobre algún hecho substancial y pertinente. La resolución que se dicte al efecto señalará los puntos sobre los cuales deberá recaer la prueba. En su contra sólo procederán los recursos de reposición y de apelación, dentro del plazo de cinco días, contado desde la notificación. De interponerse apelación, deberá hacerse siempre en subsidio de la reposición y procederá en el solo efecto devolutivo. El recurso de apelación se tramitará en cuenta y en forma preferente. El término probatorio será de veinte días y dentro de él se deberá rendir toda la prueba

En los primeros dos días del probatorio cada parte deberá acompañar una nómina de los testigos de que piensa valerse, con expresión de su nombre y

apellido, domicilio y profesión u oficio. Sólo se examinarán testigos que figuren en dicha nómina. En el procedimiento no existirán testigos inhábiles, sin perjuicio de lo cual el tribunal podrá desechar de oficio a los que notoriamente aparezcan comprendidos en alguna de las situaciones del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. Se podrán dirigir a cualquier testigo preguntas tendientes a demostrar su credibilidad o falta de ella.

Se admitirá a declarar hasta un máximo de cuatro testigos por punto de prueba.

En todo caso, no podrán probarse por testigos los elementos que sirven de base para la determinación de la obligación tributaria aduanera.

Tratándose de solicitudes de oficios a las que acceda el Tribunal Tributario y Aduanero, éste deberá disponer su despacho inmediato a las personas o entidades requeridas, quienes estarán obligadas a evacuar la respuesta dentro del plazo que al efecto fije el tribunal, el que en todo caso no podrá exceder de quince días. A petición de la parte que lo solicita o de la persona o entidad requerida, el plazo para evacuar el oficio podrá ser ampliado por el tribunal, por una sola vez y hasta por quince días más, cuando existan antecedentes fundados que lo aconsejen.

Cuando hayan de practicarse diligencias probatorias fuera del lugar en que se sigue el juicio, o si durante el término de prueba ocurren entorpecimientos que imposibiliten la recepción de ésta, el Tribunal Tributario y Aduanero podrá ampliar, por una sola vez, el término probatorio por el número de días que estime necesarios, no excediendo en ningún caso de diez días, contados desde la fecha de notificación de la resolución que ordena la ampliación.

La prueba será apreciada por el Juez Tributario y Aduanero de conformidad con las reglas de la sana crítica. Al apreciar las pruebas de esta manera, el tribunal deberá expresar en la sentencia las razones jurídicas y las

simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en virtud de las cuales les asigna valor o las desestima. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.

No obstante lo anterior, los actos o contratos solemnes sólo podrán ser acreditados por medio de la solemnidad prevista por la ley. En aquellos casos en que la ley requiera probar mediante contabilidad fidedigna, el juez deberá ponderar preferentemente dicha contabilidad.

El Tribunal Tributario y Aduanero tendrá el plazo de sesenta días para dictar sentencia, contado desde el vencimiento del término probatorio.

Las resoluciones que se dicten durante la tramitación del reclamo sólo serán susceptibles del recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro del término de cinco días contado desde la notificación correspondiente.

El Juez Tributario y Aduanero declarará de oficio la nulidad de las actuaciones reclamadas que hubieren sido formuladas fuera de los plazos de prescripción establecidos en la ley.

Cuando las facultades del reclamante no ofrezcan suficiente garantía o haya motivo racional para creer que procederá a ocultar sus bienes, el Servicio podrá impetrar en los procesos de reclamación a que se refiere este Título, la medida cautelar de prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes o derechos específicos de aquél. La solicitud de medida cautelar deberá ser fundada.

Esta medida cautelar se limitará a los bienes y derechos suficientes para responder de los resultados del proceso y se decretará, preferentemente, sobre bienes y derechos cuyo gravamen no afecte el normal desenvolvimiento

del giro del reclamante. Ella será esencialmente provisional y deberá hacerse cesar siempre que desaparezca el peligro que se ha procurado evitar o se otorgue caución suficiente.

La solicitud de medida cautelar se tramitará incidentalmente por el Tribunal, en cuaderno separado. En contra de la resolución que se pronuncie sobre la medida sólo procederán los recursos de reposición y de apelación, dentro del plazo de cinco días, contado desde la notificación. Si se interpusieran ambos, deberán serlo conjuntamente, entendiéndose la apelación en subsidio de la reposición. El recurso de apelación se concederá en el solo efecto devolutivo y será tramitado por la Corte de Apelaciones respectiva en cuenta y en forma preferente.

Notificada que sea la sentencia que falle el reclamo no podrá modificarse o alterarse, salvo en cuanto se deba, de oficio o a petición de parte, aclarar los puntos oscuros o dudosos, salvar las omisiones o rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparezcan en ella.

Contra la sentencia que falle un reclamo sólo podrá interponerse el recurso de apelación, dentro del plazo de quince días contados desde la fecha de su notificación.

Respecto de la resolución que declare inadmisibile un reclamo o haga imposible su continuación, podrán interponerse los recursos de reposición y de apelación, en el plazo de quince días contado desde la respectiva notificación. De interponerse apelación, deberá hacerse siempre en subsidio de la reposición y procederá en el sólo efecto devolutivo. El recurso de apelación se tramitará en cuenta y en forma preferente.

El término para apelar no se suspende por la solicitud de aclaración, agregación o rectificación que se deduzca de acuerdo con el artículo anterior.

En contra de la sentencia de primera instancia no procederá el recurso de casación en la forma ni su anulación de oficio. Los vicios en que se hubiere incurrido deberán ser corregidos por la Corte de Apelaciones que corresponda.

El Tribunal deberá elevar los autos para el conocimiento de la apelación dentro de los quince días siguientes a aquél en que se notifique la concesión del recurso.

El recurso de apelación contra la sentencia definitiva se tramitará en cuenta, a menos que cualquiera de las partes, dentro del plazo de cinco días contado desde el ingreso de los autos en la secretaría de la Corte de Apelaciones, solicite alegatos.

Vencido ese plazo, el tribunal de alzada ordenará traer los autos en relación, si se hubiere solicitado oportunamente alegatos. De lo contrario, el Presidente de la Corte ordenará dar cuenta.

En las apelaciones a que se refiere esta Ordenanza no será necesaria la comparecencia de las partes en segunda instancia.

Los fallos pronunciados por el Tribunal Tributario y Aduanero deberán ser fundados. La omisión de este requisito, así como de los establecidos en el inciso décimo quinto del artículo 128, será corregida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 E.

El reclamante o el Servicio podrán interponer los recursos de casación en contra de los fallos de segunda instancia.

Los recursos de casación que se interpongan en contra de las sentencias de segunda instancia, se sujetarán a las reglas contenidas en el Título XIX del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil.

La interposición de la reclamación suspenderá la prescripción del artículo 2521 del Código Civil, hasta que la resolución que le pone término o hace imposible su prosecución quede ejecutoria.

VII. TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVO EN CHILE Y NICARAGUA

RECURSOS ADUANEROS EN CHILE		RECURSOS ADUANEROS EN NICARAGUA	
TIPO DE RECURSO	PROCEDIMIENTO	TIPO DE RECURSO	PROCEDIMIENTO
Recurso de Reposición Administrativo	El órgano facultado para resolver este recurso son los tribunales tributarios y aduaneros. El plazo para la interposición es de 15 días posteriores a la notificación de la resolución, la reposición se entiende por rechazada si la autoridad no se pronuncia dentro de los 50 días contados a partir de su recepción.	Recurso de Reposición	Se interpone ante la autoridad aduanera que realizó el acto o que dictó la resolución, dentro de las 24 hrs siguientes a la notificación, esta resuelve dentro de los 5 días siguientes
Procedimiento de Reclamación	Este tipo de impugnación se presenta dentro de los 90 días siguientes a la notificación del acto que se recurre, la autoridad competente son los tribunales tributarios aduaneros, se otorga un plazo de 20 días al Servicio Aduanero para que este conteste lo que	No posee este tipo de recurso	No posee este tipo de procedimiento

	tenga a bien, se abre a pruebas por 20 días, prorrogables por 10 días mas, el plazo para resolver es de 60 días, contados desde el vencimiento del periodo probatorio.		
Recurso de Apelación	Cabe contra la sentencia que resuelve un reclamo, se interpone dentro de una plazo de 15 días contados a partir de la notificación de la resolución aludida, se interpone ante el Tribunal tributario aduanero, quien lo remite a la Corte de Apelaciones dentro de los 15 días siguientes a su recepción, contra la sentencia que resuelva la apelación cabra recurso de casación.	Recurso de Apelación	Se interpone ante la autoridad aduanera que realizo el acto o que dicto la resolución, dentro de los 15 días siguientes a la notificación, la autoridad que dicto la resolución remite el expediente al superior del Servicio Aduanero (Director General de la DGA), quien resolverá en un plazo de 30 días. Este Recurso da por agotada la vía administrativa.
Procedimiento especial de reclamo por vulneración de	Este tipo de reclamo lo presenta un particular que haya sido afectado en sus derechos constitucionales en virtud de cualquier acto u omisión del servicio, puede recurrir ante el Tribunal tributario Aduanero. El ciudadano	No posee este tipo de recurso	No posee este tipo de

derechos	tiene el plazo fatal de 15 días para la interposición del reclamo, se corre traslado por 10 días al Servicio, se abre a pruebas por 10 días, una vez evacuadas las pruebas se dicta sentencia en un plazo de 10 días.		procedimiento
----------	---	--	---------------

DISEÑO METODOLÓGICO

- A. Tipo de Investigación: Nuestra investigación es descriptiva cualitativa ya que a través de ella tratamos de explicar y demostrar mediante el análisis de la información que se acumule en relación a la seguridad jurídica de los administrados del Departamento de Managua en la tramitación de los recursos administrativos en materia aduanera con sus particularidades que presentan cada uno de ellos.
- B. Enfoque: Nuestro enfoque es cualitativo ya que mediante el proceso de investigación que se lleva a cabo, tratamos de analizar la figura Administrativa de los Recursos Aduaneros de la información obtenida sobre lo concerniente al régimen jurídico de los administrados del departamento de Managua en la tramitación de los recursos administrativos aduaneros.
- C. Tiempo: Transversal ya que a través estudiamos un fenómeno en un determinado momento en cierta población para averiguar la incidencia de los recursos administrativos en materia aduanera. Solo se estudio este fenómeno en el 2012.

MÉTODOS

- A. Entrevistas: Realizamos entrevistas a los Funcionarios de Aduanas y a los Agentes Aduaneros para conocer sobre el procedimiento administrativo en la institución aduanera y su efectividad.
- B. Revisión Documental: Estos nos facilitaran el análisis de la situación que acontece en materia de recursos administrativos aduaneros en la institución de aduana, así como también el alcance que tiene esta materia a nivel internacional.

POBLACIÓN:

Como población tomaremos los ciudadanos que hayan interpuesto Recursos Administrativos Aduaneros en el segundo semestre del año 2012 como parte de revisión documental, también entrevistas a Agentes Aduaneros y a Funcionarios de la Aduana.

MUESTRA:

Para la correcta obtención de la información tomaremos como muestra cincuenta (50) Recursos Administrativos Aduaneros y sus respectivas resoluciones.

La muestra será por criterio, ya que entrevistaremos a personas que están en el ramo de la aduana y a través de su criterio valoraremos la comprobación de la hipótesis y cumplimiento de los objetivos.

FORMAS DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

A. Confiabilidad: Los instrumentos utilizados en nuestra investigación serán de confiabilidad ya que se realizaron revisión de documentos a recursos dictados y resueltos por Funcionarios altamente capacitados en materia aduanera y entrevistas a los mismos de los cuales recibiremos información válida.

INFORME DE RESULTADOS

La recopilación de información relacionada con los Recursos Administrativos que en Materia Aduanera interponen los ciudadanos de Managua ante las instancias de la Dirección General de Aduanas con el objetivo de redimir sus derechos, se realizó mediante la aplicación de dos instrumentos:

- 1) Revisión Documental de cincuenta (50) recursos que los ciudadanos interpusieron en el período segundo semestre del año 2012 en la DGA.

- 2) Entrevistas realizadas a veinte personas entre: ciudadanos que interpusieron recursos, agentes aduaneros y funcionarios de la DGA

De los cincuenta recursos que se estudiaron once (11) de ellos se interpusieron en primera instancia como Recursos de Revisión ante la Dirección General de Aduanas.

Es decir, los ciudadanos a los cuales no se les dio lugar al Recurso de Revisión hicieron uso de la segunda instancia al interponer Recurso de Apelación. Se logró determinar que las causales que se recurren con mayor frecuencia en contra de los actos de las Autoridades Administrativas de la Dirección General de Aduanas son:

- a) Por Multas por declaración incorrecta de mercancía emitidos por la Dirección General de Aduanas, las cuales representan 30 % del universo de los recursos revisados, de los cuales once (11) son revisión en primera instancia y cuatro (04) en apelación en segunda instancia, los mismos fueron interpuestos en tiempo y cumpliendo con las formalidades establecidas.
- b) La Incorrecta clasificación de la mercancía representa el 26 % con relación a la muestra.
- c) Pago Indebido de las obligaciones arancelarias tributarias representan 20% de los cuales siete (07) son de revisión y tres (03) fueron de apelación.
- d) Sustitución de Mercancías se presentaron cuatro (04) recursos de revisión, de los cuales tres (03) fueron resueltos en apelación y aceptaron la negativa del órgano administrativo.

Los fundamentos jurídicos invocados por los recurrentes en los Recursos interpuestos son: Artículo 34; 11; 183; 25; 27: de la Constitución Política. Artículos 26; inciso 3, 65 y 75.

Causas frecuentes por las cuales se recurre

Actos recurridos	Tipo de recurso		Cumplimiento de formalidades		Instancia recurrida	
	Revisión	Apelación	En tiempo	Extemporáneo	Primera	Segunda
Multas por declaración incorrecta de mercancía	11	4	12	3	11	4
Pago Indebido de las obligaciones arancelarias tributarias	7	3	10	0	7	3
Sustitución de Mercancías	4	3	6	1	4	3
Incorrecta clasificación de la mercancía	9	4	11	2	9	4
Rechazo por valor declarado	1	0	1	0	1	0
Suspensión de la Licencia	3	1	1	3	3	1
TOTAL	35	15	41	9	35	15

FUNDAMENTO PARA INTERPONER LOS RECURSOS POR LOS RECURRENTES

Actos Recurridos			Constitución Política	CAUCA/ RECAUCA	Ley de Valoración de la Mercancía y de Reforma a la Ley 265 (LEY 421)	Código Tributario	SAC
Multas por declaración incorrecta de mercancía					11		
Pago	Indebido	de las	5	2	5	7	
obligaciones		arancelarias					
tributarias							
Sustitución de Mercancías				4			
Incorrecta clasificación de la mercancía				14			14
Rechazo por valor declarado					1		
Otros Actos Administrativos			6	7	3		
TOTAL			11	27	20	7	14

De las resoluciones

Actos Recurridos	Ha lugar	No ha Lugar	Sin pronunciamiento	Desistimiento	Total
Multas por declaración incorrecta de mercancía	5	6	3	1	15
Pago Indebido de las obligaciones arancelarias tributarias	3	4	2	1	10
Sustitución de Mercancías	2	4	1	0	7
Incorrecta clasificación de la mercancía	4	7	1	1	13
Rechazo por valor declarado	0	1	0	0	1
Otros Actos Administrativos	1	2	1	0	4
TOTAL	15	24	8	3	50

XIII.- CONCLUSIONES

En el Derecho Aduanero nuestra legislación cuenta con un cuerpo normativo vigente que regula lo relacionado con los recursos administrativos en materia aduanera, con el propósito de brindar a los ciudadanos los medios de impugnación restablecer un derecho que se supone violentado en la relación entre el Estado y el particular.

Las instancias Administrativas Aduaneras en Nicaragua han tenido en los últimos años un gran avance en su gestión administrativa, motivado por el proceso de modernización que se ha impulsado a partir de la conformación del SICA, la gestión del Autodespacho, los establecimientos del CAUCA y El RECAUCA. Este proceso también ha tenido su influencia en la tramitación de los Recursos Administrativos, particularmente lo referido al cumplimiento de los plazos establecidos por la ley.

Existe conocimiento de la población de su derecho a reclamar, pero paradójicamente no sabe cómo hacerlo porque aduce desconocer los procedimientos requeridos para interponer los recursos administrativos ante las autoridades Aduaneras lo que se agrava por la ausencia de publicidad en las instalaciones físicas de las Aduanas.

Existe desconfianza de los administrados hacia los funcionarios de la DGA, que les impide la interposición de recursos administrativos ante las autoridades competentes para restablecer sus derechos en tanto que se presume que sus reclamos serán resueltos en sentido negativo y el hecho de no contar hasta el momento en que realizamos nuestro trabajo con una instancia superior jerárquica que conozca y resuelva de su reclamo. Existiendo en este momento una gran expectativa al respecto ante el surgimiento del Tribunal Aduanero como instancia superior jerárquica.

En Nicaragua, la ausencia de un régimen administrativo único que rija para la distinta instancia y dependencias del Estado, generan y fortalece la confusión y la incertidumbre que la población percibe al momento de recurrir para reclamar lo que se presume un Derecho.

Existe la tendencia por las autoridades Aduaneras de resolver de manera negativa los recursos interpuestos, que deja en evidencia la urgente necesidad de establecer la vía de lo contencioso administrativo para dirimir conflictos surgidos entre la administración y el ciudadano.

XIV.- RECOMENDACIONES

1. Mantener una campaña publicitaria que permita mantener informado a los administrados acerca de la forma y tramitación de los recursos administrativos en materia aduanera que le permita reclamar los derechos que se presumen violentados sea por disposiciones administrativas o por valoración de mercancías.
2. Fortalecer la función del Estado en relación a la responsabilidad de éste en garantizar la igualdad de derechos de los ciudadanos frente al Estado mismo, para ello creemos que es necesario que el funcionario público, responsable de la tramitación de los recursos tenga no solo la calificación técnica necesaria, sino también conciencia de la jerarquización de la ley para otorgar el derecho a quien corresponda.
3. Consideramos de vital importancia la implementación de una materia llamada Legislación Aduanera para ser impartida a los estudiantes del departamento de Derecho de nuestra Alma Mater Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-Managua.

BIBLIOGRAFÍA

1. Cabanellas, Guillermo. (1979) *Diccionario Jurídico Elemental*, (1ra. Ed.). Buenos Aires: Heliasta, 1979.
2. Carrillo Cruz, Bolívar. (1997) *Compendio de Derecho Administrativo*. Nicaragua: UPONIC: Autor
3. Cassagne, Juan Carlos. (2000) *Derecho Administrativo. Tomo I.* (7ma.ed). Argentina: Lexis Nexis. Abeledo-Perrot..
4. Cassagne, Juan Carlos. *Derecho (2002) Administrativo. Tomo II.* (7ma. Ed.). Argentina: Lexis Nexis. Abeledo-Perrot.
5. Centro de Estudios Adams (1997) *Derecho Constitucional y Administrativo*. Madrid: Valbuenas
6. Colectivo de Autores. (2005) *Derecho Constitucional y Administrativo*, Ediciones Valbuenas.
7. Diez, Manuel María. *Manual de Derecho Administrativo*. (1994), (2da. Ed.) Buenos Aires, Argentina: Plus Ultra, 1994.
8. Dromi, José Roberto (1998), *Derecho Administrativo*, (7ma. Ed.)Argentina: Reviews.
9. Elizur Artiaga Nava, (1999) *Derecho Constitucional*. Editorial Oxford.
10. Escorcía, Jorge Flavio. (2002), *Derecho Administrativo*. (Primera Edición) León, Nicaragua: Editorial Universitaria.
11. Gordillo, Agustín (1974). *Tratado de Derecho Administrativo*. Tomo I. (1ra... Ed.), Buenos Aires, Macchi, 1974.
12. Granja Galindo, Nicolás (1984), *Fundamentos de Derecho Administrativo*, (3ra.Ed), Argentina: Astrea de A. y R. De palma, 2001.
13. Martínez, Morales. Rafael I. (1994) *Derecho Administrativo*. (2da. Ed.). Colección Textos Jurídicos Universitarios: México: Harla
14. Muñoz García, Fernando. (2002). *Fundamentos y Reguaciones de la Actividad Aduanera*. (1era.Ed). Mexico.
15. Palacio, Noel Rafael y Barahona, Juan Carlos. (1996). *Sistema Aduanero Nacional de Nicaragua*. (1era.Ed). Nicaragua.

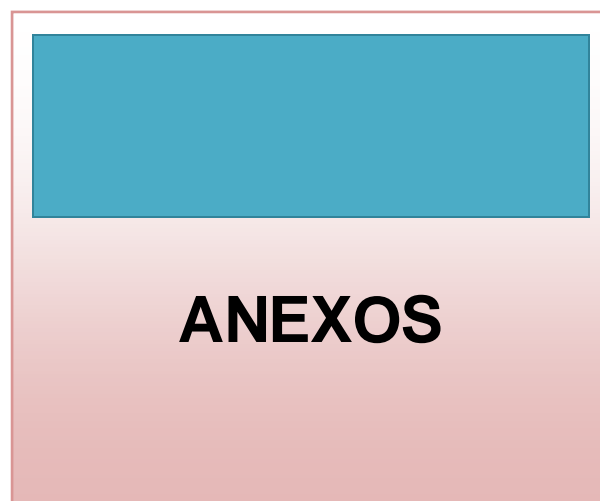
16. Picone F. *Elementos del Derecho Administrativo y Procesal Administrativo*.
17. Rizo Oyanguren, Armando. (1991). *Manual Elemental de Derecho Administrativo*. León, Nicaragua: UNAN-León.
18. Ricardo Xavier Basaldua. (2002); *Introducción al Derecho Aduanero*; (2da.Ed). Argentina.
19. Santamaría De Paredes, Vicente. (1984) *Curso de Derecho Administrativo*, (4ª Ed.), Madrid, 1984.
20. Thompson Arguello, Henry Joe. (2009) *Derecho Procesal Administrativo Aduanero*. (1era.Ed). Nicaragua.
21. Varios Autores, (1975), *Acto y procedimiento Administrativo*; Editorial Plus Ultra. Argentina, 1975.
22. Villagra Gutiérrez, William. (1993) *Elementos de Derecho Administrativo*. (1ra. Ed.). Managua, Nicaragua: La Universal. 1993.
23. Zelaya, Simón F. (1975) *Forma del Acto Administrativo en Acto y Procedimiento Administrativo*; Buenos Aires, 1975.

LEYES.

1. Constitución Política de la República de Nicaragua. (4ta. Ed.) Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No.176 del 16 de Septiembre del 2010.
2. Código Tributario de la Republica de Nicaragua. Ley No. 562. Publicada en la Gaceta No.227 del 23 de Noviembre de 2005.
3. Código Aduanero Uniforme Centro Americano (CAUCA IV), Resolución 223-2008; Del 25 de Agosto de 2008.
4. Ley que Establece el Autodespacho para la Importación, Exportación y Otros Regímenes.
5. Ley de Equidad Fiscal. Ley No.453, publicada en la Gaceta No.82 del 6 de Mayo de 2003.

PAGINAS WEB.

1. García, J Blog Archivador. Recuperado el 26 de febrero 2013, de www.bibliojuridica.org/libros/1/316/12.
2. www.ni.vlex.com/.../fuentes-derecho-administrativo-nicaragua-710259.
3. www.todoelderecho.com/.../Administrativo/apuntesadministrativo.htm.
4. www.uaime.edu.mx/.../derecho/.../DERECHO%20ADMINISTRATIVO



Guía de Revisión Documental.

I.- Recursos:

a.- Tipo de Recurso interpuesto: _____

b.- Instancia a la que se recurre: _____

II.- De la interposición del Recurso:

a.- Formalidad:

Fecha de interposición _____

Generales de Ley _____

Actúa en nombre propio o por medio de un poder _____

III.- Fondo:

-Petición: _____

-Fundamento Legal: _____

IV.- De la Resolución del Recurso:

¿Qué se Resolvió? _____

¿En qué tiempo Resolvió? _____

Base legal sobre el que sustenta su resolución: _____

Cuántas resoluciones fueron resueltas por Silencio Administrativo: _____

Cuántos recurrieron de Amparo y cuáles fueron las razones: _____

Cuántos Recursos de Amparo se resolvieron y a favor de quién

ENTREVISTAS

De las entrevistas efectuadas a los funcionarios de la Dirección General de Aduanas podemos destacar lo expresado por la directora de dicha institución Azucena Obregón se pudo determinar que existe claridad de los procedimientos administrativos que tienen los administrados para recurrir ante la autoridad correspondiente a reclamar sus derechos.

En relación a los plazos para interponer los recursos es necesario señalar que se produce como constantes en primer lugar, el hecho que no se le dé lugar al recurso siendo que de los cincuenta (50) actos recurridos solo quince (15) se le dieron lugar.

En cuanto a la tramitación pudimos constatar que a pesar de existir conocimiento de los plazos, se hacen esfuerzos por cumplir a cabalidad los mismos aunque en varias ocasiones el no pronunciarse produce el silencio administrativo, tal es el caso de nuestra muestra en las que el órgano administrativo en ocho (08) no se pronunció.

Los funcionarios manifestaron que los recurrentes de manera general conocen de las formalidades para la tramitación de los recursos no obstante, incurrir en errores que se les manda a subsanar para darle el trámite correspondiente.

El señor Dennis Martínez que habiendo recurrido ante la autoridad aduanera y que les fue resuelto el sentido negativo, manifiestan no solo desacuerdo con su resolución sino también desconfianza porque consideran que reclamar su derecho ante las mismas autoridades que han dictado o resuelto en forma negativa no podrán nunca resolverle positivamente.

Por otro lado, el señor Yamil Zúñiga que habiendo recurrido y habiéndosele resuelto positivamente, manifiestan satisfacción, sin embargo están en desacuerdo en recurrir ante las mismas autoridades que dictaron el auto porque están involucradas directamente, por lo tanto se sienten indefensos y exteriorizan tener expectativas con la creación del tribunal de apelaciones en materia aduanera.

Constitución Política De La Republica De Chile

Decreto No. 1. 150, de 1980

Publicada en el Diario Oficial de 24 de Octubre de 1980

Ministros de Estado

Artículo 33. Los Ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República en el gobierno y administración del Estado.

La ley determinará el número y organización de los Ministerios, como también el orden de precedencia de los Ministros titulares.

El Presidente de la República podrá encomendar a uno o más Ministros la coordinación de la labor que corresponde a los Secretarios de Estado y las relaciones del Gobierno con el Congreso Nacional.

Artículo 34. Para ser nombrado Ministro se requiere ser chileno, tener cumplidos veintiún años de edad y reunir los requisitos generales para el ingreso a la Administración Pública.

En los casos de ausencia, impedimento o renuncia de un Ministro, o cuando por otra causa se produzca la vacancia del cargo, será reemplazado en la forma que establezca la ley.

Artículo 35. Los reglamentos y decretos del Presidente de la República deberán firmarse por el Ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito. Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma del Ministro respectivo, por orden del Presidente de la República, en conformidad a las normas que al efecto establezca la ley.

Artículo 36. Los Ministros serán responsables individualmente de los actos que firmaren y solidariamente de los que suscribieren o acordaren con los otros Ministros.

Artículo 37. Los Ministros podrán, cuando lo estimaren conveniente, asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados o del Senado, y tomar parte en sus debates, con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin

derecho a voto. Durante la votación podrán, sin embargo, rectificar los conceptos emitidos por cualquier diputado o senador al fundamentar su voto.

Bases Generales de la Administración del Estado.

Artículo 38. Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios del carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes.

Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales 26 que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño.

Estados de excepción constitucional

Artículo 39. El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado en las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública.

Artículo 40. 1º En situación de guerra externa, el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, podrá declarar todo o parte del territorio nacional en estado de asamblea.

2º En caso de guerra interna o conmoción interior, el Presidente de la República podrá, con acuerdo del Congreso, declarar todo o parte del territorio nacional en estado de sitio.

El Congreso, dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha en que el Presidente de la República someta la declaración de estado de sitio a su consideración, deberá pronunciarse aceptando o rechazando la proposición, sin que pueda introducirle modificaciones. Si el Congreso no se pronunciare dentro de dicho plazo, se entenderá que aprueba la proposición.

Sin embargo, el Presidente de la República, previo acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, podrá aplicar el estado de sitio de inmediato, mientras el Congreso se pronuncia sobre la declaración.

Cada rama del Congreso deberá emitir su pronunciamiento, por la mayoría de los miembros presentes, sobre la declaración de estado de sitio propuesta por el Presidente de la República. Podrá el Congreso, en cualquier tiempo y por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de cada Cámara, dejar sin efecto el estado de sitio que hubiere aprobado.

La declaración de estado de sitio sólo podrá hacerse hasta por un plazo máximo de noventa días, pero el Presidente de la República podrá solicitar su prórroga, la que se tramitará en conformidad a las normas precedentes.

3º El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, podrá declarar todo o parte del territorio nacional en estado de emergencia, en casos graves de alteración del orden público, daño o peligro para la seguridad nacional, sea por causa de origen interno o externo.

Dicho estado no podrá exceder de noventa días, pudiendo declararse nuevamente si se mantienen las circunstancias.

4º En caso de calamidad pública, el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, podrá declarar la zona afectada o cualquiera otra que lo requiera como consecuencia de la calamidad producida, en estado de catástrofe.

5º El Presidente de la República podrá decretar simultáneamente dos o más estados de excepción si concurren las causales que permiten su declaración.

6º El Presidente de la República podrá, en cualquier tiempo, poner término a dichos estados.

Artículo 41. 1º Por la declaración de estado de asamblea el Presidente de la República queda facultado para suspender o restringir la libertad personal, el derecho de reunión, la libertad de información y de opinión y la libertad de trabajo. Podrá, también, restringir el ejercicio del derecho de asociación y de sindicación, imponer censura a la correspondencia y

a las comunicaciones, disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.

2º Por la declaración de estado de sitio, el Presidente de la República podrá trasladar a las personas de un punto a otro del territorio nacional, arrestarlas en sus propias casas o en lugares que no sean cárceles ni en otros que estén destinados a la detención o prisión de reos comunes. Podrá, además, suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión y restringir el ejercicio de las libertades de locomoción, de información y de opinión.

La medida de traslado deberá cumplirse en localidades urbanas que reúnan las condiciones que la ley determine.

3º Los tribunales de justicia no podrán, en caso alguno, entrar a calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocadas por la autoridad para adoptar las medidas en el ejercicio de las facultades excepcionales que le confiere esta Constitución.

La interposición y tramitación de los recursos de amparo y de protección que conozcan los tribunales no suspenderán los efectos de las medidas decretadas, sin perjuicio de lo que resuelvan en definitiva respecto de tales recursos.

4º Por la declaración de estado de emergencia, se podrá restringir el ejercicio de la libertad de locomoción y del derecho de reunión.

5º Por la declaración del estado de catástrofe, el Presidente de la República podrá restringir la circulación de las personas y el transporte de mercaderías, y las libertades de trabajo, de información y de opinión, y de reunión, Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que estime necesarias.

6º Declarado el estado de emergencia o de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional que el Gobierno designe, quien asumirá el mando con las atribuciones y deberes que la ley señale.

El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso de las medidas adoptadas en virtud de los estados de emergencia y de catástrofe.

7º Las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán prolongarse más allá de la vigencia de dichos es

En ningún caso las medidas de restricción y privación de la libertad podrán adoptarse en contra de los parlamentarios, de los jueces, de los miembros del Tribunal Constitucional, del Contralor General de la República y de los miembros del Tribunal Calificador de Elecciones.

8º Las requisiciones que se practiquen darán lugar a indemnizaciones en conformidad a la ley. También darán derecho a indemnización las limitaciones que se impongan al derecho de propiedad cuando importen privación de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, y con ello se cause daño.

9º Una ley orgánica constitucional podrá regular los estados de excepción y facultar al Presidente de la República para ejercer por sí o por otras autoridades las atribuciones señaladas precedentemente, sin perjuicio de lo establecido en los estados de emergencia y de catástrofe.

LEY NÚM. 20.322

FORTALECE Y PERFECCIONA LA JURISDICCIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA

Diario Oficial/Normas Generales/Año 2009/DO 27/01/2009 LEY 20.322 2009

"TÍTULO VI

De las materias de competencia de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, de la Reposición Administrativa, del Procedimiento de Reclamación y del Procedimiento Especial de Reclamo por Vulneración de Derechos

1. DE LAS MATERIAS DE COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS

Artículo 117.- Serán de competencia de los Tribunales Tributarios y Aduaneros las Reclamaciones en contra de las siguientes actuaciones del Servicio Nacional de Aduanas:

- a) Liquidaciones, cargos y actuaciones que sirvan de base para la fijación del monto o Determinación de diferencias de derechos, impuestos, tasas o gravámenes.
- b) Clasificación y/o valoración aduanera de las declaraciones de exportación, practicada por el Servicio de Aduanas.
- c) Actos o resoluciones que denieguen total o parcialmente las solicitudes efectuadas en conformidad al Título VII del Libro II.
- d) Las demás que establezca la ley.

Será competente para conocer de las reclamaciones señaladas en el inciso anterior, el

Tribunal en cuyo territorio jurisdiccional se encuentre la autoridad aduanera que hubiere practicado la actuación que se reclama.

Artículo 118.- Las Cortes de Apelaciones conocerán en segunda instancia del recurso de apelación que se deduzcan contra las resoluciones del Tribunal Tributario y Aduanero, en los casos que sean procedentes de conformidad a la ley.

Conocerá de estos recursos la Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional tenga asiento el tribunal que dictó la resolución apelada.

Artículo 119.- La Corte Suprema conocerá de los recursos de casación en la forma y en el fondo que se deduzcan contra las sentencias de segunda instancia dictadas por las Cortes de Apelaciones, en los casos en que ellos sean procedentes de conformidad al Código de Procedimiento Civil y a esta Ordenanza.

Artículo 120.- En todas aquellas materias no sujetas a disposiciones especiales del presente

Título, se aplicarán, en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de las reclamaciones, las normas establecidas en el Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.

2. DE LA REPOSICIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 121.- Respecto de las actuaciones a que se refiere el artículo 117, será procedente el recurso de reposición administrativa, en conformidad a las normas del Capítulo IV de la ley Nº 19.880, con las siguientes modificaciones:

- a) El plazo para presentar la reposición será de quince días.
- b) La reposición se entenderá rechazada en caso de no encontrarse notificada la resolución que se pronuncia sobre ella dentro del plazo de cincuenta días contado desde su presentación.
- c) La presentación de la reposición no interrumpirá el plazo para la interposición de la reclamación judicial contemplada en el Párrafo siguiente.

No serán procedentes en contra de las actuaciones a que se refiere el inciso primero los recursos jerárquico y extraordinario de revisión.

Los plazos a que se refiere este artículo se regularán por lo señalado en la ley Nº 19.880.

3. DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN

Artículo 122.- Toda persona podrá reclamar de las actuaciones a que se refiere el artículo 117, siempre que invoque un interés actual comprometido.

La reclamación deberá deducirse dentro del plazo de noventa días contado desde la notificación del acto que se reclama. En las reclamaciones a que se refiere el presente Título, sólo podrán actuar las partes por sí o por medio de sus representantes legales o mandatarios. Las partes deberán comparecer en conformidad a las normas establecidas en la ley Nº 18.120, salvo que se trate de causas de cuantía inferior a treinta y dos unidades tributarias mensuales, en cuyo caso podrán comparecer sin patrocinio de abogado.

Artículo 123.- La reclamación deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- 1º. Consignar el nombre o razón social, número de Rol Único Tributario, domicilio, profesión u oficio del reclamante, y, en su caso, de la o las personas que lo representan y la naturaleza de la representación.
- 2º. Precisar sus fundamentos.
- 3º. Presentarse acompañada de los documentos en que se funde, excepto aquellos que por su volumen, naturaleza, ubicación u otras circunstancias, no puedan agregarse a la solicitud.
- 4º. Contener, en forma precisa y clara, las peticiones que se someten a la consideración del Tribunal.

Si no se cumple con los requisitos antes enumerados, el Juez Tributario y Aduanero dictará una resolución, ordenando que se subsanen las omisiones en que se hubiere incurrido, dentro del plazo que señale el tribunal, el cual no podrá ser inferior a tres días, bajo apercibimiento de tener por no presentada la reclamación. Respecto de aquellas causas en que se permita la litigación sin patrocinio de abogado, dicho plazo no podrá ser inferior a quince días.

Artículo 124.- La representación del Fisco en los procesos jurisdiccionales seguidos en conformidad a este Título corresponderá exclusivamente al Servicio

que para todos los efectos legales tendrá la calidad de parte. Si éste lo considera necesario podrá requerir la intervención del Consejo de Defensa del Estado ante los tribunales superiores de justicia.

Sin perjuicio de las facultades del Director Nacional, corresponderá a los Directores Regionales y a los Administradores de Aduana, dentro de los límites de sus respectivas jurisdicciones territoriales, la representación del Servicio para los fines señalados en el inciso anterior. Con todo, el Director Nacional podrá, en cualquier momento, asumir dicha representación.

Artículo 125.- El Tribunal llevará los autos en la forma ordenada en los artículos 29 y 34 del Código de Procedimiento Civil.

Sólo las partes podrán imponerse de ellos, en cualquier estado de la tramitación.

Artículo 126.- Los plazos de días que se establecen en este Título comprenderán sólo días hábiles. No se considerarán inhábiles para tales efectos ni para practicar las actuaciones y notificaciones que procedan, ni para emitir pronunciamientos, los días del feriado judicial a que se refiere el artículo 313 del Código Orgánico de Tribunales, en cuanto todos ellos deban cumplirse por o ante el Tribunal Tributario y Aduanero.

Artículo 127.- Las resoluciones que dicte el Tribunal Tributario y Aduanero se notificarán a las partes mediante la publicación de su texto íntegro en el sitio en Internet del Tribunal.

Se dejará testimonio en el expediente y en el sitio en Internet de haberse efectuado la publicación y de su fecha. Los errores u omisiones en dichos testimonios no invalidarán la notificación.

Las notificaciones al reclamante de las sentencias definitivas, de las resoluciones que reciben la causa a prueba y de aquellas que declaren inadmisibles un reclamo, pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, serán efectuadas por carta certificada. Del mismo modo, lo serán aquellas que se dirijan a terceros ajenos al juicio.

En estos casos, la notificación se entenderá practicada al tercer día contado desde aquél en que la carta fue expedida por el tribunal.

Sin perjuicio de lo anterior, dichas resoluciones serán igualmente publicadas del modo que se establece en el inciso primero. En todo caso, la falta de esta publicación no anulará la notificación.

Para efectos de las notificaciones a que se refiere el inciso anterior, el reclamante deberá designar, en la primera gestión que realice ante el Tribunal, un domicilio dentro del radio urbano de una localidad ubicada en alguna de las comunas de la Región sobre cuyo territorio aquél ejerce competencia, y esta designación se considerará subsistente mientras no haga otra, aun cuando de hecho cambie su morada. Si se omite efectuar esta designación, el Tribunal dispondrá que ella se realice en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de que estas notificaciones se efectúen de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero. Cualquiera de las partes podrá solicitar para sí el aviso, mediante correo electrónico, del hecho de haber sido notificada de una o más resoluciones. En todo caso, la falta de este aviso no anulará la notificación.

La notificación al Servicio de la resolución que le confiere traslado del reclamo se efectuará por correo electrónico, a la dirección que el Director Nacional, los Directores Regionales y los Administradores de Aduanas deberán registrar ante el Tribunal Tributario y Aduanero de su jurisdicción. La designación de la dirección de correo electrónico se entenderá vigente mientras no se informe al tribunal de su modificación.

Artículo 128.- Del reclamo se conferirá traslado al Servicio por el término de veinte días.

La contestación del Servicio deberá contener una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya, y las peticiones concretas que se someten a la decisión del Tribunal Tributario y Aduanero.

Vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, haya o no contestado el Servicio, el Tribunal Tributario y Aduanero, de oficio o a petición de parte, deberá recibir la

causa a prueba si hubiere controversia sobre algún hecho substancial y pertinente. La resolución que se dicte al efecto señalará los puntos sobre los cuales deberá recaer la prueba. En su contra sólo procederán los recursos de reposición y de apelación, dentro del plazo de cinco días, contado desde la notificación.

De interponerse apelación, deberá hacerse siempre en subsidio de la reposición y procederá en el solo efecto devolutivo. El recurso de apelación se tramitará en cuenta y en forma prefe-rente.

El término probatorio será de veinte días y dentro de él se deberá rendir toda la prueba.

En los primeros dos días del probatorio cada parte deberá acompañar una nómina de los testigos de que piensa valerse, con expresión de su nombre y apellido, domicilio y profesión u oficio. Sólo se examinarán testigos que figuren en dicha nómina. En el procedimiento no existirán testigos inhábiles, sin perjuicio de lo cual el tribunal podrá desechar de oficio a los que notoriamente aparezcan comprendidos en alguna de las situaciones del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. Se podrán dirigir a cualquier testigo preguntas tendientes a demostrar su credibilidad o falta de ella.

Se admitirá a declarar hasta un máximo de cuatro testigos por punto de prueba.

En todo caso, no podrán probarse por testigos los elementos que sirven de base para la determinación de la obligación tributaria aduanera.

El Tribunal Tributario y Aduanero dará lugar a la petición de oficios cuando se trate de requerir información pertinente sobre los hechos materia del juicio, debiendo señalarse específicamente el o los hechos sobre los cuales se pide el informe.

Tratándose de solicitudes de oficios a las que acceda el Tribunal Tributario y Aduanero, éste deberá disponer su despacho inmediato a las personas o entidades requeridas, quienes estarán obligadas a evacuar la respuesta dentro del plazo que al efecto fije el tribunal, el que en todo caso no podrá exceder de quince días. A petición de la parte que lo solicita o de la persona o entidad requerida, el plazo para evacuar el oficio podrá ser ampliado por el tribunal, por una sola vez y hasta por quince días más, cuando existan antecedentes fundados que lo aconsejen.

Los mismos plazos indicados en el inciso precedente regirán para los peritos, en relación a sus informes, desde la aceptación de su cometido.

El Director Nacional, los Subdirectores, los Directores Regionales y los Administradores de Aduanas no tendrán la facultad de absolver posiciones en representación del Servicio.

Se admitirá, además, cualquier otro medio probatorio apto para producir fe.

No serán admisibles aquellos antecedentes que, teniendo relación directa con operaciones fiscalizadas, hayan sido solicitados determinada y específicamente por el Servicio al reclamante, en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, y que este último, no obstante disponer de ellos, no acompañe en forma íntegra, dentro del plazo de un mes, contado desde la notificación del requerimiento. El reclamante siempre podrá probar que no acompañó la documentación en el plazo señalado por causas que no le hayan sido imputables.

El Juez Tributario y Aduanero se pronunciará en la sentencia sobre esta inadmisibilidad.

Cuando hayan de practicarse diligencias probatorias fuera del lugar en que se sigue el juicio, o si durante el término de prueba ocurren entorpecimientos que imposibiliten la recepción de ésta, el Tribunal Tributario y Aduanero podrá ampliar, por una sola vez, el término probatorio por el número de días que estime necesarios, no excediendo en ningún caso de diez días, contados desde la fecha de notificación de la resolución que ordena la ampliación.

La prueba será apreciada por el Juez Tributario y Aduanero de conformidad con las reglas de la sana crítica. Al apreciar las pruebas de esta manera, el tribunal deberá expresar en la sentencia las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en virtud de las cuales les asigna valor o las desestima. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.

No obstante lo anterior, los actos o contratos solemnes sólo podrán ser acreditados por medio de la solemnidad prevista por la ley. En aquellos casos en que la ley

requiera probar mediante contabilidad fidedigna, el juez deberá ponderar preferentemente dicha contabilidad.

El Tribunal Tributario y Aduanero tendrá el plazo de sesenta días para dictar sentencia, contado desde el vencimiento del término probatorio.

Artículo 129.- Las resoluciones que se dicten durante la tramitación del reclamo sólo serán susceptibles del recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro del término de cinco días contado desde la notificación correspondiente, sin perjuicio de señalado en los artículos 128, 129 B y 129 D.

Artículo 129 A.- El Juez Tributario y Aduanero declarará de oficio la nulidad de las actuaciones reclamadas que hubieren sido formuladas fuera de los plazos de prescripción establecidos en la ley.

Artículo 129 B.- Cuando las facultades del reclamante no ofrezcan suficiente garantía o haya motivo racional para creer que procederá a ocultar sus bienes, el Servicio podrá impetrar en los procesos de reclamación a que se refiere este Título, la medida cautelar de prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes o derechos específicos de aquél. La solicitud de medida cautelar deberá ser fundada. Esta medida cautelar se limitará a los bienes y derechos suficientes para responder de los resultados del proceso y se decretará, preferentemente, sobre bienes y derechos cuyo gravamen no afecte el normal desenvolvimiento del giro del reclamante. Ella será esencialmente provisional y deberá hacerse cesar siempre que desaparezca el peligro que se ha procurado evitar o se otorgue caución suficiente.

La solicitud de medida cautelar se tramitará incidentalmente por el Tribunal, en cuaderno separado. En contra de la resolución que se pronuncie sobre la medida sólo procederán los recursos de reposición y de apelación, dentro del plazo de cinco días, contado desde la notificación. Si se interpusieran ambos, deberán serlo conjuntamente, entendiéndose la apelación en subsidio de la reposición. El recurso

de apelación se concederá en el solo efecto devolutivo y será tramitado por la Corte de Apelaciones respectiva en cuenta y en forma preferente.

Artículo 129 C.- Notificada que sea la sentencia que falle el reclamo no podrá modificarse o alterarse, salvo en cuanto se deba, de oficio o a petición de parte, aclarar los puntos oscuros o dudosos, salvar las omisiones o rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparezcan en ella.

Artículo 129 D.- Contra la sentencia que falle un reclamo sólo podrá interponerse el recurso de apelación, dentro del plazo de quince días contados desde la fecha de su notificación. Respecto de la resolución que declare inadmisibile un reclamo o haga imposible su continuación, podrán interponerse los recursos de reposición y de apelación, en el plazo de quince días contado desde la respectiva notificación. De interponerse apelación, deberá hacerse siempre en subsidio de la reposición y procederá en el sólo efecto devolutivo. El recurso de apelación se tramitará en cuenta y en forma preferente.

El término para apelar no se suspende por la solicitud de aclaración, agregación o rectificación que se deduzca de acuerdo con el artículo anterior.

Artículo 129 E.- En contra de la sentencia de primera instancia no procederá el recurso de casación en la forma ni su anulación de oficio. Los vicios en que se hubiere incurrido deberán ser corregidos por la Corte de Apelaciones que corresponda.

Artículo 129 F.- El Tribunal deberá elevar los autos para el conocimiento de la apelación dentro de los quince días siguientes a aquél en que se notifique la concesión del recurso.

Artículo 129 G.- El recurso de apelación contra la sentencia definitiva se tramitará en cuenta, a menos que cualquiera de las partes, dentro del plazo de cinco días contado desde el ingreso de los autos en la secretaría de la Corte de Apelaciones,

solicite alegatos. Vencido ese plazo, el tribunal de alzada ordenará traer los autos en relación, si se hubiere solicitado oportunamente alegatos. De lo contrario, el Presidente de la Corte ordenará dar cuenta.

En las apelaciones a que se refiere esta Ordenanza no será necesaria la comparecencia de las partes en segunda instancia.

Artículo 129 H.- Los fallos pronunciados por el Tribunal Tributario y Aduanero deberán ser fundados. La omisión de este requisito, así como de los establecidos en el inciso decimoquinto del artículo 128, será corregida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 E.

Artículo 129 I.- El reclamante o el Servicio podrán interponer los recursos de casación en contra de los fallos de segunda instancia.

Los recursos de casación que se interpongan en contra de las sentencias de segunda instancia, se sujetarán a las reglas contenidas en el Título XIX del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 129 J.- La interposición de la reclamación suspenderá la prescripción del artículo 2521 del Código Civil, hasta que la resolución que le pone término o hace imposible su prosecución quede ejecutoriada.

4. DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE RECLAMO POR VULNERACIÓN DE DERECHOS

Artículo 129 K.- Si producto de un acto u omisión del Servicio, un particular considerare vulnerados sus derechos contemplados en los numerales 21º, 22º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, podrá recurrir ante el Tribunal Tributario y Aduanero en cuya jurisdicción se hubiere producido tal acto u omisión, siempre que no se trate de materias cuyo conocimiento la ley somete a un procedimiento distinto ante estos tribunales.

La acción deberá presentarse por escrito dentro del plazo fatal de quince días hábiles contado desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o desde

que se haya tenido conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

Interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política, en los casos en que ella proceda, no se podrá recurrir de conformidad a las normas de este Párrafo, por los mismos hechos.

Artículo 129 L.- Presentada la acción el Tribunal examinará si ha sido interpuesta en tiempo y si tiene fundamentos suficientes para acogerla a tramitación. Si su presentación ha sido extemporánea o adolece de manifiesta falta de fundamento, la declarará inadmisibile por resolución fundada.

Acogida a tramitación, se dará traslado al Servicio por diez días. Vencido este plazo, haya o no contestado el Servicio, y existiendo hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, se abrirá un término probatorio de diez días en el cual las partes deberán rendir todas sus pruebas. El Tribunal apreciará la prueba rendida de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Vencido el término probatorio, el Juez Tributario y Aduanero dictará sentencia en un plazo de diez días. El fallo contendrá todas las providencias que el Tribunal juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del solicitante, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Contra la sentencia sólo procederá el recurso de apelación, en el plazo de quince días. El recurso será conocido en cuenta y en forma preferente por la Corte de Apelaciones, a menos que cualquiera de las partes, dentro del plazo de cinco días contado desde el ingreso de los autos en la secretaría de la Corte de Apelaciones, solicite alegatos.

El Tribunal podrá decretar orden de no innovar, en cualquier estado de la tramitación.

Artículo 129 M.- En lo no establecido por este Párrafo, y en cuanto la naturaleza de la tramitación lo permita, se aplicarán las demás normas contenidas en el Párrafo 3

de este Título. En todo caso, el solicitante podrá comparecer sin patrocinio de abogado.".

6) Elimínase, en el artículo 130, la frase "Sin perjuicio de las devoluciones efectuadas en cumplimiento de fallos de las reclamaciones que se interpongan,", pasando el artículo "el", que sigue a continuación, a iniciarse con mayúscula.

7) Intercálase el siguiente artículo 131 bis, nuevo:

"Artículo 131 bis.- Los Directores Regionales y Administradores de Aduana podrán disponer la devolución de los derechos aduaneros pagados conforme al régimen general de importación, cuando, con posterioridad a la importación, se solicite la aplicación de un régimen preferencial, mediante la acreditación del origen de las mercancías, y en el respectivo tratado o convenio internacional suscrito por Chile no se establezca una norma especial diversa. El plazo para solicitar la devolución será de un año contado desde la importación.

Para estos efectos, los Directores Regionales y Administradores de Aduana podrán ejercer las facultades contempladas en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas.".

8) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 186:

a) Reemplázanse, en el inciso tercero, la palabra "diez" por "quince", y la expresión "la Junta General de Aduanas" por "el Tribunal Tributario y Aduanero, el que conocerá de acuerdo al procedimiento contenido en el artículo siguiente".

b) Elimínase el inciso final.

9) Incorpórase el siguiente artículo 186 bis, nuevo:

"Artículo 186 bis.- Formulado el reclamo, se conferirá traslado al Servicio por el término de diez días. Vencido el plazo, haya o no contestado el Servicio, el Juez Tributario y Aduanero podrá recibir la causa a prueba si estima que existen hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, abriendo un término probatorio de ocho días. En la misma resolución determinará la oportunidad en que la prueba testimonial deba rendirse. Dentro de los dos primeros días del término probatorio las partes deberán acompañar una nómina de los testigos de que piensan valerse,

con expresión de su nombre y apellido, domicilio y profesión u oficio. No podrán declarar más de cuatro testigos por cada parte. En todo caso, el tribunal podrá citar a declarar a personas que no figuren en las listas de testigos o decretar otras diligencias probatorias que estime pertinentes.

En contra de la resolución del Tribunal Tributario y Aduanero no procederá recurso alguno. En lo no previsto en este artículo, se aplicarán supletoriamente las normas del Párrafo 3 del Título VI del Libro II."

10) Intercálase el siguiente artículo 187 bis, nuevo:

"Artículo 187 bis.- Cuando los hechos que den origen a un reclamo ante el Tribunal Tributario y Aduanero sean los mismos que han servido de base al Servicio para iniciar un procedimiento de denuncia en conformidad a los artículos precedentes, se suspenderá la tramitación de este último, de oficio o a petición del denunciado, hasta que la resolución que falle el reclamo se encuentre ejecutoriada."